

Países con situaciones de tensión en 2023

\* La tensión Rusia – EEUU, OTAN, UE aparece señalada en este mapa de manera simplificada, por razones de representación gráfica. No se han marcado todos los países que integran la OTAN ni los que integran la UE, sino Bélgica como país que acoge las sedes de la UE y de la OTAN, Rusia y EEUU.

# 2. Tensiones

- Durante 2023 se registraron 114 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (38) y Asia y el Pacífico (33), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron entre América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10).
- Durante el año se incrementó la crisis política en Senegal entre el Gobierno y la oposición, provocando múltiples protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron decenas de muertos.
- La situación en RDC se agravó durante el 2023 como consecuencia de la violencia política electoral y de la escalada de la violencia en los conflictos armados en el país.
- Etiopía continuó en una grave situación de inestabilidad como consecuencia de las crisis regionales, la frágil implementación del acuerdo de paz en Tigré y de los impactos de las guerras en Oromiya y en Amhara.
- En Túnez se agravó la deriva autoritaria del presidente y se incrementaron los ataques y políticas contra la población migrante y solicitante de asilo subsahariana.
- En Haití se deterioró gravemente la situación de seguridad y la crisis humanitaria, con un incremento sustancial en la tasa de homicidios y un creciente control territorial de los cientos de bandas armadas que operan en el país.
- Ecuador experimentó una grave crisis política y un incremento sin precedentes en los niveles de violencia, motivando la declaración del estado de emergencia.
- Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se deterioraron notablemente y Pakistán inició la deportación de cientos de miles de personas refugiadas afganas.
- Escaló gravemente la tensión en el estado indio de Manipur, con enfrentamientos intercomunitarios entre población meitei y kuki que ocasionaron la muerte a más de 170 personas.
- En la región indonesia de Papúa Nueva Guinea se incrementaron significativamente la frecuencia, letalidad y alcance territorial de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado OPM.
- Una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia.
- En 2023 las autoridades iraníes continuaron con sus políticas represivas para intentar sofocar el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" y voces críticas

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2023. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2023. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por situaciones de tensión durante 2023.

### 2.1 Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2023

Tensión <sup>1</sup>	Tipología <sup>2</sup>	Actores principales	Intensidad <sup>3</sup>
ÁFRICA			Evolución <sup>4</sup>
AFRICA	Interno		1
Argelia	Gobierno, Sistema	Gobierno, poder militar, oposición política y social, movimiento Hirak, grupos armados con agendas yihadistas	1
	<u> </u>		<b>+</b>
Benín	Interna internacionalizada	Gobierno, actores armados regionales	2
	Gobierno		=
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	2
	Gobierno		<b>1</b>
Chad	Interna internacionalizada	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs),	3
Cilau	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad	grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia	<b>↓</b>
Ocale de Martil	Interna internacionalizada		2
Costa de Marfil	Gobierno, Identidad, Recursos	Gobierno, oposición política y social, actores armados regionales	=
D 1	Interna		1
Djibouti	Gobierno	Gobierno, oposición política y social, grupo armado FRUD-armé	=
	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	1
Eritrea	Gobierno, Autogobierno, Identidad		=
,	Internacional	- Eritrea, Etiopía	3
Eritrea – Etiopía	Territorio		1
,	Interna	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados	3
Etiopía	Gobierno		=
Etiopía – Egipto –	Internacional		2
Sudán	Recursos	– Etiopía, Egipto, Sudán	<b>↓</b>
=::	Internacional		2
Etiopía – Somalia	Gobierno, Territorio, Recursos	Etiopía, Somalia, Somalilandia	1
	Internacional		1
Etiopía – Sudán	Recursos	Etiopía, Sudán, milicias comunitarias	<b>↓</b>
	Interna	Gobierno, oposición política sectores de los cuerpos y fuerzas de	2
Gabón	Gobierno	seguridad sectores de los eucross y lucizas de	1
	Interna	Gobierno, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, partidos	2
Guinea	Gobierno	políticos de oposición, sindicatos	1
	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad,	1
Guinea-Bissau	Gobierno	oposición política, redes internacionales de narcotráfico	

<sup>1.</sup> En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.

<sup>2.</sup> Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo. Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.

<sup>3.</sup> La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.

En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2023 con la del año 2022 apareciendo el símbolo (†) si la situación general durante 2023 es más grave que la del año anterior, (1) si es mejor y (=) si no ha experimentado cambios significativos.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad Evolución
ÁFRICA			
	Interna		1
Guinea Ecuatorial	Gobierno	Gobierno, oposición política en el exilio	=
	Interna internacionalizada Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y soci		3
Kenya	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno	<ul> <li>(partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado</li> <li>SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab</li> <li>y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS</li> </ul>	1
Madamaa	Interna	O-kings and idea of the control of	1
Madagascar	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
Malí	Interna internacionalizada	Cabiarna angaisián palática y againt CEDEAO	2
Malí	Gobierno	Gobierno, oposición política y social, CEDEAO	<b>↓</b>
Marruecos – Sáhara	Internacional <sup>5</sup>	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo	2
Occidental	Autogobierno, Identidad, Territorio	armado Frente POLISARIO	<b>↓</b>
	Interna	0.11	1
Mozambique	Gobierno, sistema	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas	2
Niger <sup>6</sup>	Gobierno	de seguridad	1
	Interna	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil,	3
Nigeria	Identidad, Recursos, Gobierno	comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN	=
	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)	3
Nigeria (Biafra)	Identidad, Autogobierno		=
Ni andre (Delle Ni andre	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	1
Nigeria (Delta Níger)	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social	3
RDC	Gobierno		1
	Internacional	Gobierno de RDC, Gobierno de Rwanda, grupo armado ruandés FDLR,	3
RDC – Rwanda <sup>7</sup>	Identidad, Gobierno, Recursos	grupo armado congolés pro ruandés M23 (ex CNDP)	1
	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado ruandés FDLR, oposición política, sectores	1
Rwanda	Gobierno, Identidad	disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora ruandesa en otros países de África y en Occidente	=
	Internacional		1
Rwanda - Burundi	Gobierno	Gobierno de Rwanda, Gobierno de Burundi, grupos armados	=
	Interna		2
Senegal	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	<u> </u>
	Interna		1
Senegal (Casamance)	Autogobierno	Gobierno, facciones del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC)	<u> </u>
	Interna		1
Sierra Leona	Gobierno	Gobierno, oposición política y social, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad	1
	dobletilo		

A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como "internacional" y no como "interna" por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.
 Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión en Níger, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de Región Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>7.</sup> Aunque no se desarrolla en este capítulo la tensión RDC-Rwanda, elementos de esta crisis se incluyen en el resumen de RDC en este capítulo, en el resumen RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y en el análisis incluido en el escenario de riesgo "Rwanda, ¿Nunca más?" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo).

, i		Evolución
, I		
al		2
lentidad	Gobierno de Sudán, Gobierno de Sudán del Sur, milicias comunitarias	1
		1
	Gobierno, oposición política y social	<b>↓</b>
rnacionalizada		1
	Gobierno, actores armados regionales	1
	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas	3
istema	yihadistas	1
rnacionalizada	0.11	2
	Gobierno, oposicion politica y social, ADF	1
		1
	Gobierno, oposición política y social	=
	Gobierno oposición política y social	2
	doblemo, oposición pontica y social	<b>↑</b>
	Cobjerne opecición política y social	2
utogobierno, Identidad	doblemo, oposicion pontica y social	1
	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	2
		1
	Gobierno, oposición política y social	2
utogobierno, Identidad		1
		1
	Gobierno, oposicion pontica y social	1
		1
istema	Gobierno, oposicion politica y social	1
rnacionalizada		3
ecursos	Gobierno, oposicion politica y social, grupos de crimen organizado	1
		1
	Gobierno, oposicion politica y social, milicias ciudadanas	$\downarrow$
	Gobierno, oposición política y social, bandas organizadas (narcotráfico,	3
	pandillas)	<b>↓</b>
		2
	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
		3
	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	<u> </u>
	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	3
		<b>↑</b>
	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado	1
	Cobjerno operición político y cosial empor de misso y	3
ecursos, Identidad	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición	=
Si ell	Prinacionalizada  Sistema  Prinacionalizada  Autogobierno, Identidad  Autogobierno, Identidad  Prinacionalizada  Recursos  Recursos	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas yihadistas  Gobierno, oposición política y social, ADF  Gobierno, oposición política y social  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, milicias ciudadanas  Gobierno, oposición política y social, pandas organizadas (narcotráfico, pandillas)  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado  Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad Evolución
AMÉRICA			Evolution
	Interna		2
Nicaragua	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna		2
Panamá	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna		1
Paraguay	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	1
	Interna	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del	3
Perú	Gobierno, Recursos	Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Interna		3
Venezuela	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	<b>↓</b>
	Internacional		3
Venezuela-Guyana	Territorio, Recursos	Venezuela, Guyana	1
ASIA Y EL PACÍFICO			
	Internacional		3
Afganistán – Pakistán	Gobierno	Afganistán, Pakistán	1
	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh	2
Bangladesh	Gobierno	National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)	=
	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
China (Hong Kong)	Autogobierno, Identidad, Sistema		1
	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet	1
China (Tíbet)	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
	Interna internacionalizada		1
China (Xinjiang)	Autogobierno, Sistema, Identidad	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	=
	Internacional		2
China - EEUU	Sistema, Gobierno, Territorio	China, EEUU	1
	Internacional		3
China - Filipinas	Territorio, Recursos	China, Filipinas, EEUU	1
	Internacional		3
China – Japón	Territorio, Recursos	China, Japón, Taiwán, EEUU	<b>↑</b>
	Internacional		3
China – Taiwán	Territorio, Recursos, Sistema	China, Taiwán, EEUU	1
	Interna		1
Corea, RPD	Gobierno, Sistema	Gobierno, oposición política y social	=
Corea, RPD – EEUU,	Internacional		3
Japón, Rep. de Corea <sup>8</sup>	Gobierno	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	1
Corea, RPD – Rep. de	Internacional		3
Corea	Sistema, Territorio	RPD Corea, Rep. de Corea	1
	Interna		1
Fiji	Gobierno	Gobierno, oposición política	=

<sup>8.</sup> Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad Evolución
ASIA Y EL PACÍFICO			
	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL,	3
India (Manipur)	Autogobierno, Identidad	RPF, UNLF, KNF, KNA)	1
	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R,	1
India (Nagalandia)	Identidad, Autogobierno	NNC, ZUF	=
	Internacional		3
India – China	Territorio	- India, China	<b>1</b>
	Internacional		2
India – Pakistán	Identidad, Territorio	- India, Pakistán	1
Indonesia (Papúa	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos	3
Occidental)	Autogobierno, Identidad, Recursos	indígenas papús	1
Indonesia	Interna		1
(Sulawesi)	Identidad, Sistema	Gobierno, grupo armado MIT	=
Japón - Rusia (Islas	Internacional	L.C. D.C.	1
Kuriles)	Territorio, Recursos	- Japón, Rusia	=
	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados locales y	1
Kazajstán	Sistema, Gobierno	regionales	<b>↓</b>
	Interna internacionalizada		1
Kirguistán	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
Kirguistán -	Internacional	- Kirguistán, Tayikistán	1
Tayikistán	Territorio, Recursos		<b>↓</b>
Lao PDP	Interna	Gobierno, oposición política y social, organizaciones políticas y	1
Lao, RDP	Sistema, Identidad	armadas de origen hmong	=
Mar de la China	Internacional	China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Brunei	2
Meridional	Territorio, Recursos	Darussalam	1
Pakistán	Interna	Cabicana aposición político y occid	2
Pakistali	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	<b>↓</b>
	Interna		3
Papúa Nueva Guinea	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville	1
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
311 Latika	Gobierno	dobierno, oposicion pontica y social	<b>↓</b>
Tailandia	Interna	Cabiarna anasisión político y assigl	1
Tailandia	Gobierno	Gobierno, oposición política y social	<b>↓</b>
	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra,	2
Tayikistán	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio	grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	=
Tayikistán (Gorno-	Interna	Gobierno, líderes locales informales de la Región Autónoma de Gorno-	1
Badakhshan)	Identidad, Gobierno	Badakhshan (GBAO), oposición social al Gobierno central en la GBAO, China	<b>↓</b>
Habokietés	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales,	1
Uzbekistán	Gobierno, Sistema, Territorio	Tayikistán, Kirguistán	1
Uzbekistán	Interna		1
(Karakalpakistán)	Autogobierno, Identidad	Gobierno, oposición social en la región autónoma de Karakalpakistán	

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad Evolución
EUROPA			Evolution
Armenia-Azerbaiyán	Internacional	Annhairín Amaria artamatanata Baráhlina da Narawa Kambai	3
(Nagorno-Karabaj)	Autogobierno, Identidad, Territorio	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Türkiye	<u> </u>
	Interna internacionalizada	Outron on the court of the District of the Court of the C	2
Belarús	Gobierno	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, Letonia, Lituania, EEUU, Ucrania, OTAN, Rusia	1
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Instituciones estatales, instituciones de las entidades sub-estatales (República Sprska y Federación de Bosnia y Herzegovina), alto	2
Dosina y Neizegovina	Autogobierno, Identidad, Gobierno	representante de la comunidad internacional, EEUU, UE, OTAN, Serbia, Rusia	1
	Interna internacionalizada		1
Georgia (Abjasia)	Autogobierno, Identidad, Gobierno	- Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
Georgia (Osetia del	Interna internacionalizada		1
Sur)	Autogobierno, Identidad	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
Maldana	Interna internacionalizada	Cabicura associáta política Dusia HE Hansia OTAN	2
Moldova	Gobierno	Gobierno, oposición política, Rusia, UE, Ucrania, OTAN	1
Moldova	Interna internacionalizada	Maldaus sustanualamada Danáhlias da Transaistria Dusia Hansaia	2
(Transnistria)	Autogobierno, Identidad	- Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia, Ucrania	=
D. C.	Interna internacionalizada	Gobierno, Grupo Wagner, oposición política y social, actores armados	3
Rusia	Gobierno	de oposición	1
Rusia (norte del	Interna	Gobierno federal ruso, gobiernos de las repúblicas de Daguestán, Chechenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS), oposición social en la diáspora	1
Cáucaso)	Sistema, Identidad, Gobierno		1
Rusia – EEUU, OTAN,	Internacional	Rusia, Belarús, EEUU, OTAN, UE, Reino Unido, Ucrania	2
UE UE	Sistema, Gobierno, Territorio, Recursos		1
Serbia – Kosovo	Internacional <sup>9</sup>	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR,	2
Jerbia – Rosovo	Autogobierno, Identidad, Gobierno	misión de la UE EULEX	1
Türkiye	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah	2
Turkiye	Gobierno, Sistema	Gülen	1
Türkiye - Grecia,	Internacional	Türkiye, Grecia, República de Chipre, autoproclamada República Turca	1
Chipre	Territorio, Recursos, Autogobierno, Identidad	del Norte de Chipre	1
ORIENTE MEDIO			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo	1
	Gobierno, Identidad	AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		=
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
J.L	Gobierno	,	=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno	, oposion, pontion , decidi	=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados (PJAK, PDKI,	2
nan (nordeste)	Autogobierno, Identidad	Komala) Gobierno Regional del Kurdistán iraquí (KRG), Iraq	1

<sup>9.</sup> La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia emitió en 2010 una opinión consultiva en la que estableció que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional.

	Tipología	Actores principales	Intensidad
Tensión	Прогодіа	Actores principales	Evolución
ORIENTE MEDIO			
Irán (Sistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat	2
Baluchistán)	Autogobierno, Identidad	Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	<b>↓</b>
Irán – EEUU, Israel <sup>10</sup>	Internacional	LC. FFIII bank	3
IIaii – EEOO, ISIaei	Sistema, Gobierno	lrán, EEUU, Israel	=
	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Türkiye, Irán, PKK	1
Iraq (Kurdistán)	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		=
Líbana	Interna internacionalizada		2
Líbano	Gobierno, Sistema	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social	=
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas	1
ו מוכטנווומ	Gobierno	y su brazo armado Brigadas Essedin al-Qassam, grupos salafistas	=

<sup>1:</sup> intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta. escalada de la tensión; 1: reducción de la tensión; =: sin cambios.

Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

# 2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2023

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión En 2023 se volvió

sociopolítica a lo largo de 2023, tanto a nivel global como regional.

### 2.2.1. Tendencias globales

Durante 2023 se identificaron 114 escenarios de tensión en todo el mundo, seis más que en 2022, en línea con la

tendencia al alza en el número de crisis sociopolíticas que se ha registrado en los últimos años (31 casos más desde el año 2018). África y Asia y el Pacífico fueron las regiones del mundo con mayor número de tensiones (38 y 33 respectivamente), seguidas de América (20), Europa (13) y Oriente Medio (10). Respecto

a la variación de casos en comparación con el año anterior, se identificaron 13 nuevos casos, concentrados principalmente en África y América: Etiopía-Somalia; Gabón; Madagascar; Senegal; Sierra Leona; Togo; Argentina; Panamá; Paraguay; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Filipinas; y Rusia-EEUU, OTAN, UE. Por otro lado, otros siete casos dejaron de ser calificados como tensión, la mayoría en África: África Central (LRA); Eswatini; Sudán; Somalia (Somalilandia – Puntlandia); India; India (Assam); e Israel-Siria-Líbano. De ellos, los casos de África Central (LRA), Eswatini, India e India (Assam) lo hicieron debido a la reducción de la intensidad, mientras que los casos de Sudán, Somalia

> (Somalilandia - Puntlandia)11 e Israel-Siria-Líbano<sup>12</sup> pasaron a ser considerados conflictos armados.

> Un año más, uno de los aspectos más destacados en el análisis de las tensiones en 2023 es que, si bien en un 28% de los casos no se observaron cambios significativos y en un 23% la tensión se redujo respecto del 2022, la mitad de los casos identificados

en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior. Ello se tradujo, en parte, en un incremento de los casos de alta intensidad, que pasaron de 28 en 2022 a 31 en 2023: Chad; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; Túnez; Ecuador; El Salvador; Haití; Honduras; México; Perú;

a incrementar el número de tensiones,

registrándose 114, lo

cual supone 31 casos

más desde el año

2018

<sup>10.</sup> Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

<sup>11.</sup> A principios de 2023 se produjo una escalada de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad de Somalilandia (región de Somalia autoproclamada independiente cuyo estatus sigue siendo motivo de disputa) y las milicias de las regiones de Sool, Sannag y Cayn, que forman parte de Somalilandia y que se han autodenominado estado SSC-Khatumo. A su vez, Somalilandia y Puntlandia han mantenido una disputa histórica desde 1998 -año en el que Puntlandia se constituyó como república autónoma- por el control de estas regiones fronterizas entre ambos estados que ha derivado en la actualidad en un conflicto armado entre las milicias de estas regiones y Somalilandia. Este caso pasa a denominarse Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo). Para más información, véase el resumen sobre Somalia (Somalilandia-SSC Khatumo) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>12.</sup> Las dinámicas de este contexto son analizadas en el capítulo 1 (Conflictos armados) bajo la denominación "Israel-Hezbollah".

Cuadro 2.1. Tensiones de alta intensidad en 2023

ÁFRICA (9)	ASIA Y EL PACÍFICO (10)	ORIENTE MEDIO (3)
Chad Eritrea – Etiopía Etiopía Kenya Nigeria Nigeria (Biafra) RDC RDC – Rwanda Túnez	Afganistán – Pakistán China – Japón China – Taiwán China – Filipinas Corea del Norte – EEUU, Japón, Corea del Sur Corea del Norte – Corea del Sur India (Manipur) India – China Indonesia (Papúa Occidental) Papúa Nueva Guinea	Irán Irán – EEUU Israel AMÉRICA (8)
		Armenia – Azerbaiyán (Nagorno Karabaj) Rusia

Venezuela; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India (Manipur); India-China; Indonesia (Papúa Occidental); Papúa Nueva Guinea; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); Rusia; Irán; e Irán-

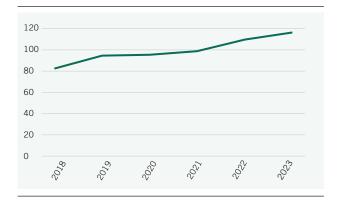
EEUU, Israel. Además de los 31 casos de alta intensidad, que supusieron cerca de un tercio del total, el 39% de los 114 casos de tensión fueron de intensidad baja (en 2022 eran el 42%) y el 33% de intensidad media (32% en 2022). Por tanto, en 2023 se volvió a observar la tendencia del año anterior, incrementándose el número de tensiones y también su intensidad media. El incremento de la intensidad de las tensiones se concentró especialmente en

Europa (donde el 85% de los casos escalaron) o en América (donde lo hizo un 75%). En Oriente Medio el 80% de las tensiones mantuvieron una dinámica similar al año anterior.

En cuanto a los principales factores de causalidad, las tensiones continuaron siendo predominantemente

Gráfico 2.1. Evolución del número de tensiones

2018-2023



multicausales, identificándose en el 56% de los casos dos o más causas. La oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, estaba presente en un 75% de las tensiones analizadas; las demandas de autodeterminación y autogobierno, o las aspiraciones identitarias lo estaban en un

35%; y el control de los recursos o del territorio lo estaba en un 31%. Tales cifras mantienen una cierta continuidad respecto de las del año anterior. En un análisis desagregado de factores, la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno volvió a ser la causa con mayor preponderancia y estuvo presente en el 69% de los 114 escenarios de tensión, siendo un porcentaje similar al año

anterior. En este sentido, en África se identificaron 30 casos, que equivale al 79% de los casos de la región; en América 19 casos, que equivale al 95% (solo en el caso de Venezuela-Guyana no estuvo presente); 14 en Asia y el Pacífico (42%); nueve en Europa y siete en Oriente Medio, que representan el 69% y el 70% respectivamente. El segundo factor con mayor prevalencia fue la reivindicación de aspiraciones de tipo identitario (33%), especialmente relevante en regiones como Europa (62%) u Oriente Medio (50%). A continuación, con porcentajes muy parecidos, se situaron las cuestiones relacionadas con el control de los recursos (24%), las demandas de autodeterminación y autogobierno (22%), la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado en su conjunto (20%) y el control del territorio (20%). Los distintos factores de causalidad asociados a las tensiones también observan una gran oscilación entre regiones. A modo de ejemplo, la oposición al Gobierno está presente en el 95% de las tensiones en América, mientras que en Asia y el Pacífico representan el 64% de los casos. Por otro lado, las demandas de autodeterminación y/o autogobierno

La mitad de los casos identificados en 2023 (49%) se agravaron respecto del año anterior y solo en un 23% se observó una reducción

solo lo están en un 15% de los casos en América, en un 29% en África, frente al 62% de los casos registrados en Europa. En relación con demandas vinculadas al control y acceso a los recursos y al territorio, casi la mitad de los casos en Asia y el Pacífico tenían vinculación (45%).

La mayor parte, aproximadamente la mitad de las tensiones en todo el mundo tuvo un carácter interno (49%), aunque con una pronunciada variabilidad geográfica (90% de los casos en América y 8% en Europa). Aproximadamente casi una cuarta parte de las tensiones (23%) fueron internacionales, pero algunas de ellas se contaron entre las de mayor intensidad en todo el mundo, como por ejemplo: Eritrea-Etiopía; RDC-Rwanda; Venezuela-Guyana; Afganistán-Pakistán; China-Japón; China-Taiwán; China-Filipinas; Corea del Norte-EEUU, Japón, Corea del Sur; Corea del Norte-Corea del Sur; India-China; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno Karabaj); e Irán-EEUU, Israel. Finalmente, más de una cuarta parte (28%) de las tensiones fueron internas internacionalizadas -aquellas en las que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos-, pero, nuevamente, se observaron importantes variaciones entre regiones (en Europa el 62% de los casos fueron de este tipo, mientras que América Latina solo se registró uno, el caso de la tensión en Ecuador).

En un análisis geográfico más pormenorizado, algunas de las subregiones con un mayor número de casos fueron, por este orden, África Occidental (14 casos); Asia Oriental (12); África Central y Grandes Lagos (11); América del Sur (10); Asia Meridional, Cuerno de África y el Golfo (siete cada una); Rusia y Cáucaso (seis); Centroamérica (cinco); y Mashreg, Sudeste de Europa, Asia Central y Sudeste Asiático (cuatro cada una). Los países que padecieron más tensiones en su territorio o cuyos gobiernos fueron actores principales en un mayor número de disputas foráneas fueron, por este orden, Rusia (12 casos); China (11); EEUU (diez); Etiopía, Irán y Tayikistán (cinco cada uno); India, Ucrania, Türkiye, Pakistán, Uzbekistán y Kirguistán (cuatro); o Nigeria, Sudán, Rwanda, Indonesia, Japón y Corea del Norte (tres).13

# 2.2.2. Tendencias regionales

Como en los últimos años, **África** fue la región que concentró un mayor número de tensiones (38), manteniendo el mismo porcentaje que el año anterior sobre el total de casos (33%). Durante el año, cuatro casos dejaron de ser considerados como tales –África Central (LRA), Eswatini, Sudán y Somalia (Somalilandia y Puntlandia) – mientras que se incluyeron otros seis casos nuevos: Etiopía-Somalia; Gabón; Madagascar; Senegal; Sierra Leona; y Togo. Los casos de Gabón y Sierra Leona se relacionan con los golpes de Estado que tuvieron

Gráfico 2.2. Distribución regional del número de tensiones en 2023

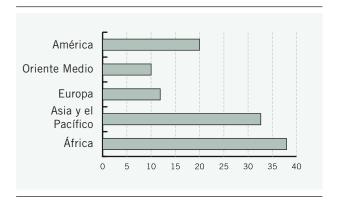
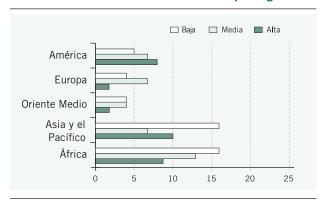


Gráfico 2.3. Intensidad de las tensiones por regiones



lugar, que en el que caso del primero fue efectivo y en el segundo un intento fallido. Por otro lado, la entrada de Senegal y Madagascar se relaciona con el aumento de la tensión política entre el Gobierno y la oposición política. El caso de Togo se incluye debido al creciente impacto en el país de las dinámicas transfronterizas del conflicto armado en Sahel Occidental. Finalmente, la tensión entre Etiopía y Somalia se debe al deterioro de la relación entre ambos vecinos, derivado del acuerdo entre Etiopía y Somalilandia –región que forma parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional- que incluía el futuro reconocimiento internacional de Somalilandia por parte de Etiopía, entre otros elementos. Por subregiones, África Occidental fue, con 14 casos, la zona de África (v. del mundo) con un mayor número de casos, incluyendo Benín; Burkina Faso; Costa de Marfil; Guinea; Guinea-Bissau; Malí; Níger; Nigeria; Nigeria (Biafra); Nigeria (Delta Níger); Senegal; Senegal (Casamance); Sierra Leona; y Togo. En segundo lugar África Central y Grandes Lagos (11): Chad; Gabón; Guinea Ecuatorial; RDC; RDC-Rwanda; Kenya; Rwanda; Rwanda-Burundi; Sudán-Sudán del Sur; Tanzania; Uganda. Le siguen el Cuerno de África (7) – Djibouti; Eritrea; Eritrea-Etiopía; Etiopía: Etiopía-Egipto-Sudán; Etiopía-Sudán; Etiopía-Somalia-; África del Sur (3) -Madagascar; Mozambique

<sup>13.</sup> Se incluyen en el recuento los actores que aparecen en la tabla como actores principales de la tensión.

y Zimbabwe– y el Norte de África-Magreb (3) –Argelia; Marruecos-Sáhara Occidental; y Túnez. Finalmente, cabe señalar que hubo varios países que padecían varios escenarios de tensión, como Etiopía (cinco casos) o Nigeria, Sudán y Rwanda (tres casos).

África fue la segunda región, por detrás de Asia y el Pacífico, en la que se registró un mayor número de casos de alta intensidad (nueve de 38), lo que equivale a un 24% del total de casos en la región, representando un caso menos de los identificados el año anterior (10 de 36). En su conjunto, el 42% de las tensiones fueron de intensidad baja, el 34% de intensidad media y el 24% de intensidad alta. Estas últimas involucraron los casos de: Chad; Eritrea-Etiopía; Etiopía; Kenya; Nigeria; Nigeria (Biafra); RDC; RDC-Rwanda; y Túnez. En cuanto a la evolución de las tensiones, el 42% se agravaron, el 32%

La subregión de

África Occidental fue

la zona del mundo

que concentró un

mayor número de

tensiones (14 casos)

no registraron cambios fundamentales, y el 26% restante se redujo. En este sentido, durante el año el número de tensiones que se agravaron en África pasó de los 13 casos registrados en 2022 a los 16, en donde destacaron los casos de las tensiones de Etiopía-Eritrea, Etiopía-Somalia y RDC-Rwanda; los países que padecieron golpes de Estado –exitosos o fallidos– como Gabón

o Sierra Leona; o aquellos que estuvieron sumidos en profundas crisis políticas como RDC, Mozambique, Senegal o Uganda, entre otros. Asimismo, durante el año hubo dos tensiones que escalaron significativamente – Sudán y Somalia (Somalilandia y Puntlandia)— y pasaron a ser consideradas conflictos armados, por lo que en términos globales se incrementó la intensidad de la violencia respecto del año anterior.

En relación con las causas de las disputas más preponderantes en la región fueron, nuevamente la oposición al Gobierno o al sistema, que estuvo presente en la gran mayoría de los casos, un 79% (30 de 38 casos); mientras que el control de los recursos y/o territorio (12) y las cuestiones relacionadas con la identidad o demandas de autogobierno y autodeterminación (11) representaron el 32 y el 29% respectivamente. Estos datos guardan continuidad con los del año anterior. Finalmente, las tensiones de naturaleza interna supusieron el 47% de los casos (un 50% en 2022), las internas internacionalizadas un 32% (un 28% en 2021) y las internacionales un 21% (un 22% en 2021), en todos los casos porcentajes muy parecidos a la media mundial.

En **América** se registraron 20 escenarios de tensión (18% del total), cuatro casos más que en 2022: Argentina, Panamá, Paraguay y Venezuela-Guyana. De los 20 casos, la gran mayoría se ubicaron en América del Sur (10), seguida de Centroamérica (5), el Caribe (3) y América del Norte (2). Una característica significativa de la región es que en el 75% de los casos se produjo una escalada de la tensión, mientras que solo en el

20% se observó una reducción de la violencia. Ello generó que la intensidad media de los casos en la región se incrementase significativamente con respecto del año anterior, pasando del 31% de casos de máxima intensidad en 2022, al 40% durante el 2023. Por el contrario, los casos de intensidad baja se redujeron a la mitad, registrándose un 25% de los casos en 2023 frente al 50% que mostraron una disminución de la tensión en 2022. Del mismo modo, los casos de intensidad media también crecieron en 2023 hasta representar el 35%, frente al 19% del 2022. En términos comparativos, América volvió a ser la región del mundo con una mayor proporción de casos de máxima intensidad: Ecuador; El Salvador; Haití; Honduras; México; Perú; Venezuela; y Venezuela-Guyana. De todos ellos, los casos de Ecuador, Haití, México, Perú y Venezuela ya habían sido catalogados como escenarios de alta intensidad

en 2022 y en años precedentes, mientras que El Salvador y Honduras padecieron importantes incrementos de las dinámicas de conflictividad en 2023, y la disputa entre Venezuela-Guyana por la región del Esequibo (un territorio históricamente revindicado por Venezuela pero que está formalmente bajo el control efectivo y administración del Gobierno de Guyana)

aumentó la tensión entre los dos Estados. En El Salvador se redujo claramente el número de homicidios, pero siguió registrándose la detención de decenas de miles de personas al amparo del estado de excepción y numerosas organizaciones denunciaron el deterioro de la situación de derechos humanos, una concentración del poder sin precedentes por parte de Bukele y una creciente deriva autoritaria en el país. En Honduras, durante el año se vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política que paralizó el Parlamento durante cuatro meses. Finalmente, la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar un referéndum sobre la anexión del Esequibo y de poner en práctica acciones para hacer efectivos los resultados de la consulta provocaron una importante crisis política y diplomática en la región y una importante movilización militar por parte de varios países.

En cuanto a las causas, 19 de los 20 casos identificados estaban vinculados a la oposición a las políticas domésticas o internacionales del gobierno, salvo la tensión entre Venezuela-Guyana, relacionada con el control de recursos y territorio. Además, factores como el control de los recursos y las cuestiones identitarias estuvieron asociadas a tres casos cada uno de ellos; mientras que las dinámicas unidas al autogobierno fueron un factor explicativo en otros dos casos y la oposición al sistema en un solo caso (Cuba). Por otra parte, cabe destacar que 18 de las 20 tensiones en la región fueron internas, lo que contrasta

con los datos agregados a nivel internacional, según los cuales aproximadamente la mitad de los casos en todo el mundo son tensiones de naturaleza interna. Únicamente el caso de Ecuador se caracterizó por ser de naturaleza interna internacionalizada y el de Venezuela-Guyana por ser de carácter internacional.

En Asia y el Pacífico se volvieron a registrar 33 tensiones, el 29% del total a nivel global. En relación con el 2022, se contabilizaron dos casos adicionales –Afganistán-Pakistán y China-Filipinas—mientras que otros dos casos dejaron de ser considerados en situación de tensión: India e India (Assam). Por subregiones, 12 de las tensiones estaban en Asia Oriental –China (Xinjiang), China (Tíbet), China (Hong Kong), China-Filipinas,

China-Japón, China-Taiwán, Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea; Mar de la China Meridional—, siete en Asia Meridional —Afganistán-Pakistán, Bangladesh, India (Manipur), India (Nagalandia), India-China, India-Pakistán y Pakistán—; cuatro en Asia Central — Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán—, y en el Sudeste asiático—Indonesia (Sulawesi), Indonesia (Papúa Occidental), Laos y Tailandia— y dos en el Pacífico—Papúa Nueva Guinea y Fiji. Como en años anteriores, hubo algunos países que fueron escenario de varias tensiones, como China (9 casos), India (cuatro) o Indonesia, Japón, Pakistán, Tayikistán y Corea del Norte (tres). Prácticamente la mitad de los casos (48%) fueron de intensidad baja, el 21% de

intensidad media y el 30% restante de alta intensidad. Por otra parte, el 42% de los casos identificados en Asia y el Pacífico escalaron en 2023 respecto del año anterior, mientras que un 27% de los casos disminuyeron en intensidad y en el 30% restante no se observaron cambios. Cabe destacar especialmente la escalada de aquellos escenarios que en 2023 pasaron a ser considerados de máxima intensidad. Afganistán-Pakistán pasó a ser considerado un nuevo escenario de

tensión ya que a lo largo de 2023 se incrementó la tensión entre los dos países, registrándose algunos episodios de violencia en la frontera, constantes enfrentamientos diplomáticos y la expulsión de Pakistán de centenares de miles de personas refugiadas afganas. Por otro lado, también se incrementaron las tres tensiones que mantiene China con Japón, Taiwán y Filipinas. En relación con esta última, durante el año se incrementó sustancialmente la tensión política y militar entre China y Filipinas, con algunos de los incidentes marítimos más graves de los últimos años, un incremento de la retórica belicista y una profundización de las alianzas en materia de defensa entre Manila y varios países, especialmente con EEUU. Finalmente, en el estado indio de Manipur, la tensión

escaló con enfrentamientos intercomunitarios entre grupos meitei y kuki, que provocaron la muerte de 163 personas.

En cuanto a las causas de fondo, los factores con mayor relevancia en la región fueron la oposición

al Estado y/o al Gobierno, que estuvo presente en el 64% de los casos, seguida de las cuestiones vinculadas al control del territorio y/o recursos (45%) y por último los factores vinculados con demandas de autogobierno y/o identitarias, presentes en el 39% de los casos. En relación con el tipo de escenario, casi la mitad de las tensiones fueron de carácter interno (45%), un poco menos de una quinta parte (18%) de carácter interno internacionalizado, y un 36% internacionales, siendo así Asia

y el Pacífico la región con un porcentaje más alto de tensiones internacionales. La mayor parte de las mismas se sitúan en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Meridional: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu); la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico; la tensión entre China-Taiwán; el contencioso entre China y EEUU, que tiene uno de sus principales escenarios en Asia Oriental; la disputa histórica entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles, o la crisis en el Mar de la China Meridional que involucra a China, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia y Brunei Darussalam.

Casi la mitad
(48%) de los casos
identificados en Asia
y el Pacífico fueron
de baja intensidad,
sin embargo, en un
42% se observó una
escalada con relación
al año anterior

En el 75% de los

casos de América

aumentó la tensión,

volviendo a convertir a

la región en la mayor

a nivel global en

proporción de casos

de alta intensidad

(40%)

En **Europa** se registraron 13 casos, el 11% del total. Respecto del año anterior, la disputa entre Rusia-EEUU, OTAN y la UE pasó a ser analizada como tensión. Precisamente la subregión con un mayor número de casos activos (6) fue Rusia y el Cáucaso, seguida del Sudeste de Europa (4) y Europa Oriental (3). Además de las dos tensiones que acontecen en su territorio –Rusia y Rusia (norte del Cáucaso)–, y de la que mantiene con

EEUU, OTAN y la UE, Rusia fue claramente el país con una mayor participación en disputas en la región, tanto en escenarios de Europa Oriental –Belarús, Moldova o Moldova (Transnistria) – como del Cáucaso –Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Georgia (Osetia del Sur), Georgia (Abjasia). Türkiye fue actor en tres de los casos de la región –Türkiye; Türkiye-Grecia-Chipre; y, en menor medida, en Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj).

Un año más, el aspecto más destacado del análisis de las tensiones en esta región es que en 2023 se registró una escalada de la tensión en el 85% de los casos de la región, y en solo dos casos la tensión o bien desescaló –Türkiye-Grecia, Chipre, a causa del acercamiento entre Ankara y Atenas— o se mantuvo sin cambios —

Moldova (Transnistria), aunque en un contexto de incertidumbre y fragilidad. Por tanto, Europa volvió a ser la región que registró un mayor porcentaje de casos que empeoraron en 2023, manteniendo la dinámica del año anterior, donde el 92% de los casos registraron una evolución negativa. El deterioro estuvo vinculado tanto a repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania en el

continente como a otras dinámicas locales y regionales. Por otro lado, esta escalada de las tensiones no ha significado un aumento de su intensidad, ya que el 31% de los casos fueron de baja intensidad, el 54% de intensidad media y el 15% de alta intensidad, datos similares a los registrados en 2022. Las dos tensiones

de mayor intensidad fueron los casos de Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Rusia. En relación con el primero, una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia. Y en lo concerniente a Rusia, en 2023 se deterioró la situación en el país, incluyendo una insurrección armada fallida por parte del Grupo Wagner.

En cuanto a las causas, la oposición al Gobierno y/o al sistema estuvieron presentes en el 69% de los casos, seguidas de las disputas vinculadas a la identidad y/o a las demandas de autogobierno (62%) y las de control del territorio y/o recursos (23%). Cabe destacar que Europa sigue siendo la región del mundo con mayor porcentaje de demandas vinculadas con la identidad

y/o autogobierno, duplicando la media mundial que es del 35%. En todo caso, son elementos presentes en contextos de tensión complejos insertos en dinámicas más amplias e internacionalizadas en los que tienen peso otros elementos como las disputas geoestratégicas e intereses de actores externos, como es el caso de Rusia en relación con Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria o la ascendencia de Türkiye sobre la autoproclamada república turca del norte de Chipre. Finalmente, cabe

destacar que el 62% de los casos fueron tensiones internas internacionalizadas, un 31% internacionales y un caso interno, Rusia (norte del Cáucaso). Respecto de esta cuestión, lo más significativo es la gran disparidad que existe entre el porcentaje de tensiones internas a nivel global (una media del 49%) y en Europa (8%). De manera complementaria, las tensiones internas internacionalizadas tenían más del doble de prevalencia en Europa (62%) que en el conjunto de las regiones (28%). Así, en 2023 se puso de manifiesto un año más la proyección de dinámicas y agendas externas en las tensiones en el continente, dimensión acentuada desde la guerra en Ucrania, en combinación con factores internos.

En **Oriente Medio** se identificaron 10 escenarios de tensión, lo que representa el 9% del total. Con relación al año anterior, un caso, Israel-Siria-Líbano, dejó de ser considerado tensión y pasó a ser considerado como conflicto armado (Israel – Hezbollah) debido al incremento de las hostilidades y los efectos de la violencia en el último trimestre de 2023 derivado

de la crisis en Gaza. De los 10 casos identificados, siete se concentraron en el Golfo y los tres restantes en el Mashreq. La mayor parte (80%) de los casos no registraron cambios significativos respecto al año anterior, aunque se observó una desescalada relativa de la tensión en dos casos (20%): Irán (noroeste) e

Irán (Sistán Baluchistán) que en 2022 habían sido escenario de mayores niveles de violencia en el marco de la respuesta de Teherán a la contestación interna. En cuanto a la intensidad de las tensiones, estas presentaron niveles similares que en 2022, con cuatro escenarios (40%) de baja intensidad –Arabia Saudita, Bahréin, Iraq (Kurdistán) y Palestina (tensión interna entre Fatah y Hamas)—; otros cuatro casos (40%) de intensidad media –Egipto, Irán (noroeste), Irán (Sistán Baluchistán) y Líbano—; y dos casos (20%) de alta intensidad –Irán e Irán-EEUU, Israel.

Cabe destacar que la crisis de Gaza repercutió de manera directa e indirecta en las dinámicas de conflicto armado y tensiones en la región. En el último trimestre se multiplicaron los ataques de grupos del autodenominado "Eje de Resistencia" (integrado por

Hezbollah, milicias pro-iraníes en Iraq y Siria y los al-houhtistas en Yemen, entre otros) contra fuerzas de EEUU en Iraq y Siria, las ofensivas estadounidenses contra estas organizaciones y los ataques de Israel contra posiciones e intereses de Hezbollah e Irán, entre otras dinámicas. Junto a estas repercusiones —que se analizan en el capítulo de conflictos armados—las consecuencias de la crisis en Gaza también influyeron en la tensión en torno al programa nuclear iraní.

La crisis en Gaza influyó en las dinámicas de los conflictos armados y tensiones de la región y repercutió también en las discusiones en torno al programa

nuclear iraní

Europa volvió a ser la

región que registró un

mayor porcentaje de

casos que empeoraron

en 2023 (85%)

En cuanto a las causas de las tensiones, el panorama fue muy parecido al del año anterior: el 70% de los casos estuvieron relacionados con la oposición al Gobierno o al sistema; el 50% a cuestiones relacionadas con la identidad y/o el autogobierno; y solo en el 10% de los casos hubo demandas relativas al control del territorio y/o recursos. Finalmente, en relación con la naturaleza de las tensiones, como en los últimos años, el 50% de las tensiones fueron internas internacionalizadas, el 40% internas, y el 10% (un caso) internacionales, la tensión entre Irán-EEUU, Israel.

### 2.3 Tensiones: evolución anual

## 2.3.1 África

### África Occidental

Guinea	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Interna Gobierno
Actores:	Gobierno, sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad, partidos políticos de oposición, sindicatos

#### Síntesis:

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta Militar. En 2010 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad política guineana, mantuvieron durante años al país en una situación de inestabilidad. En 2021 la tensión política en el país se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de finales de 2020 que dieron al presidente Alpha Condé su tercer mandato, señalado por la oposición como inconstitucional. La crisis política derivó en un nuevo golpe de Estado el 5 de septiembre de 2021, encabezado por el coronel Mamay Doumbouya, que derrocó al Gobierno presidido por Condé.

Las tensiones entre la Junta Militar y la oposición política se mantuvieron a lo largo del año tras no lograrse avances en el dialogo nacional, y se incrementaron las señales de división en las fuerzas de seguridad. El año se inició con el mantenimiento de los esfuerzos del bloque regional de África Occidental (CEDEAO) para relanzar el llamado diálogo inclusivo interguineano que se había celebrado a finales de 2022 con el objetivo de reducir las tensiones entre la Junta Militar y los grupos políticos y de la sociedad civil, pero el Gobierno presidido por el teniente coronel Doumbouya lo rechazó, afirmando que el diálogo había concluido. Posteriormente, a principios de marzo se puso en marcha una nueva iniciativa para lograr la reanudación del diálogo nacional encabezada por líderes religiosos, que si bien logró celebrar varias rondas de negociaciones en la capital, Conakry, no logró avances tangibles para aliviar la crisis política. Las demandas de las Fuerzas Vivas de Guinea (FVG) -coalición opositora que incluye al ilegalizado Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), la Agrupación del Pueblo Guineano (APG) del ex presidente Condé y la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) de Cellou Dalein Diallo- giraron en torno a la liberación de las figuras de la oposición detenidas, el levantamiento de la prohibición de protestar y la creación de un nuevo diálogo nacional supervisado por la CEDEAO. A principios de mayo las

FVG cancelaron su participación en el diálogo y se manifestaron en Conakry, en un acto que fue reprimido por las fuerzas de seguridad y que provocó la muerte de siete manifestantes y otros 32 resultaron heridos, según denunció las FVG. La tensión en la capital provocó que a finales de mayo las autoridades desplegasen el Ejército. En iunio las FVG anunciaron la suspensión de las manifestaciones debido a la celebración del Eid al-Adha -la fiesta del sacrificio, una de las dos celebraciones más importantes del calendario islámico-, hecho que distendió provisionalmente la tensión. Posteriormente, un tribunal absolvió a tres líderes de la plataforma de la sociedad civil FNDC -entre ellos Oumar Sylla, alias Foniké Mengué— de todos los cargos que se les imputaban a mediados de 2022, aunque el fiscal apeló la decisión. La absolución era una de las principales condiciones previas de las FVG para reanudar las negociaciones con la Junta Militar. Durante el resto del año no se reanudaron las conversaciones y se mantuvieron las movilizaciones de la oposición contra el Junta.

De forma paralela a las tensiones con la oposición, se produjeron diversos eventos vinculados con el crecimiento de la oposición a la Junta Militar en las fuerzas de seguridad. Entre los más destacados, a finales de abril y principios de mayo, el presidente Doumbouya destituyó al jefe de la inteligencia militar, el teniente coronel Ismaël Keïta y a la principal figura de la Junta, el general Sadiba Coulibaly, como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Asimismo, disolvió el batallón a cargo de la seguridad presidencial. A finales de agosto se produjeron rumores de un intento de golpe de Estado en el país que habría enfrentado a las fuerzas de la Junta y la Guardia Nacional, provocando el arresto de un número indeterminado de oficiales militares. Finalmente, el 4 de noviembre, individuos armados liberaron de la prisión de Conakry al expresidente militar de Guinea, Moussa Dadis Camara, y a tres colaboradores cercanos que estaban siendo juzgados desde 2022 por la masacre del estadio de Conakry en 2009, aunque días después fueron capturados por las fuerzas de seguridad, con la excepción del ex ministro de Seguridad Presidencial, el coronel Claude Pivi, quien seguía prófugo al acabar el año. Estos hechos provocaron nuevas purgas en el estamento militar, siendo destituidos más de 60 soldados, gendarmes y funcionarios de prisiones acusados de colaboradores.

Por otro lado, durante el año se fueron deteriorando las relaciones entre la Junta Militar y la CEDEAO. A principios de febrero, los ministros de Relaciones Exteriores de Guinea, Malí y Burkina Faso se reunieron en Uagadugú, capital de Burkina Faso, y solicitaron a la CEDEAO y la UA el levantamiento de las suspensiones impuestas a los tres países tras los golpes militares de 2021 y 2022. Paralelamente, la Junta Militar guineana creó de forma unilateral un comité para supervisar la transición política en el país, ignorando los esfuerzos de la CEDEAO para crear un comité inclusivo. En octubre, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO dictaminó que las continuas detenciones del ex primer ministro Ibrahima

Kassory Fofana y dos ministros de la era Condé eran "arbitrarias" y ordenó su liberación inmediata, dando un plazo de tres meses para cumplir con la sentencia.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, organizaciones de la sociedad civil, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, grupos criminales, IMN

#### Síntesis:

Tras la independencia en 1960, la incapacidad de los sucesivos gobiernos para abordar los problemas asociados con ciudadanía, etnia, religión o distribución de recursos ha agravado las percepciones de agravios y descontento, lo que ha llevado al surgimiento de demandas separatistas en varias regiones. Además, desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas. Paralelamente, las acciones de grupos criminales en el noroeste del país, de origen multicausal, se han multiplicado desde 2018.

En Nigeria persistió el clima de violencia política y de violencia criminal por parte de grupos criminales en el noroeste y centro-norte del país, mientras que la violencia con relación a la cuenca del Lago Chad (noreste) se incrementó respecto a 2022.¹⁴ La celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 25 de febrero de 2023 contribuyó a agravar esta situación. A esto se añade el clima recurrente de violencia intercomunitaria entre ganaderos y agricultores del cinturón central del país, la persistencia de los enfrentamientos y acciones insurgentes en la región de Biafra¹⁵ así como la proliferación de milicias y cuerpos

de seguridad privados locales que ha tenido lugar en los últimos años. 16 En el conjunto del país se contabilizaron 3.272 eventos violentos que provocaron 8.510 víctimas mortales en 2023, según ACLED, si bien estas cifras incluían también la violencia asociada al conflicto armado con Boko Haram.<sup>17</sup> En los cuatro estados del noroeste del país (Zamfara, Katsina, Kaduna y Níger) -epicentro de la violencia de los grupos criminales- los actos de violencia provocaron 2.344 víctimas mortales, según ACLED -cifra que ascendía a 2.869 víctimas mortales si se incluye los estados de Kebbi y Sokoto-, prácticamente la mitad de las víctimas mortales en estos estados en relación con el año 2022 (4.481 víctimas mortales, 4.920 incluyendo a Kebbi y Sokoto) y en año 2021 (3.918, cifra que aumenta a 4.484 incluyendo a Kebbi y Sokoto). Las cifras evidenciaban una disminución de la violencia en estos estados durante 2023 en comparación con los años anteriores. 18 Entre los hechos más relevantes, cabe destacar un ataque con drones perpetrado por el Ejército que confundió una celebración religiosa con una concentración de grupos criminales en el estado de Kaduna en diciembre en el que murieron 85 civiles, hecho que recibió críticas nacionales e internacionales19 hasta el punto que el Gobierno anunció la apertura de una investigación. Las acciones del Ejército, como el uso de bombardeos aéreos para perseguir a los grupos criminales, fueron duramente criticadas durante el año por su inefectividad y sus consecuencias hacia la población civil. Según ACNUR, las cifras de desplazamiento forzado en el conjunto del país se elevaron a casi 3,5 millones de personas, de las cuales casi 1,2 millones correspondían a los estados del noroeste y centro-norte.20

En lo concerniente a la evolución de la situación política y social, las elecciones tuvieron lugar en un clima de violencia política elevado, sobre todo en los estados del sur. La comisión electoral en enero advirtió que la inseguridad podría hacer descarrilar las elecciones generales previstas para el 25 de febrero y el 11 de marzo. El All Progressives Congress (APC) consolidó su poder al imponerse en las elecciones presidenciales y posteriormente amplió su control obteniendo victorias electorales -ratificadas en los tribunales a favor del APC- en las elecciones a gobernadores de estados, obteniendo un total de 22 de los 36 estados. El antiguo gobernador del estado de Lagos y candidato por el partido All Progressive Congress (APC) Bola Tinubu alcanzó la victoria en las presidenciales con el 36,61% de los votos (8,8 millones de votos), en un proceso electoral que

<sup>14.</sup> Véase el resumen sobre Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>15.</sup> Véase el resumen sobre Nigeria (Biafra) en este capítulo.

<sup>16.</sup> Véase el resumen sobre Nigeria en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau, Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2023.

<sup>17.</sup> ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024]. Esta cifra incluye tres tipos de eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados). Si incluimos las categorías de disturbios, protestas y eventos estratégicos, la cifra asciende a 8.764 víctimas mortales.

<sup>18.</sup> Esta cifra, no obstante, se debe relativizar dadas las dificultades para diferenciar las acciones de estos grupos de bandas de criminales de otras dinámicas de violencia, debido a la multiplicidad de actores, entre ellos grupos criminales, cuerpos de seguridad, actores armados yihadistas, grupos vinculados a comunidades ganaderas y milicias de autodefensa civiles.

<sup>19.</sup> Amnistía Internacional, Nigeria: Military attempting to cover up mass killing of civilians, 7 de diciembre de 2023.

<sup>20.</sup> UNHCR, Operational Data Portal – Nigeria, 30 de junio de 2023.

fue muy cuestionado por acusaciones de fraude. Los principales contendientes eran el antiguo vicepresidente Atiku Abubakar, del Peoples Democratic Party (PDP), y el antiguo gobernador del estado de Anambra, Peter Obi, por el Labour Party. Las elecciones generales se caracterizaron por un clima de violencia política, y el proceso se vio empañado por informes de compra de votos, intimidación de votantes, ataques a personal y oficinas electorales en ciertas áreas y acusaciones de fraude absoluto por parte de la oposición, lo que restó credibilidad al proceso. La Comisión Electoral (INEC) cometió errores en el proceso de visualización de resultados, según reconoció la propia comisión, lo que generó importantes críticas y desconfianza hacia los resultados y nuevas acusaciones de fraude. Estas circunstancias, junto con las declaraciones críticas hacia el INEC por parte de observadores y grupos de la sociedad civil, llevaron a las campañas de Abubakar, Obi y Rabi'u Kwankwaso a cuestionar y luego rechazar oficialmente los resultados electorales anunciados antes del 28 de febrero. Las tres principales candidaturas de la oposición, además de algunos grupos de la sociedad civil y el ex presidente Olusegun Obasanjo, pidieron a la INEC que volviera a celebrar las elecciones. El 29 de mayo Tinubu fue nombrado oficialmente presidente, aunque los recursos presentados por la oposición política y social no fueron desestimados hasta septiembre por el Tribunal de Peticiones para Elecciones Presidenciales, y nuevamente recurridos y rechazados definitivamente a finales de octubre por el Tribunal Supremo.

Tinubu sustituyó a todos los jefes de los servicios de inteligencia, nombró un gabinete de 48 ministros (uno de los más amplios de la historia reciente del país, incluyendo figuras relevantes de anteriores gobiernos)<sup>21</sup>, intentó llevar a cabo reformas económicas impopulares y el año se vio marcado por una creciente inestabilidad social y económica, <sup>22</sup> debido al incremento de la inflación –cercana al 29%, cifras que no se veían en el país desde los años noventa, vinculada a la subida de precios de los productos básicos y la retirada del subsidio a la gasolina—, que provocó importantes protestas y movilizaciones sindicales. Además, la moneda oficial, la naira, había perdido un 41% de su valor (un 30% en el mercado paralelo) respecto al dólar entre mayo y diciembre.

Nigeria (Biafra)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, organizaciones independentistas MASSOB, IPOB (que dispone de un brazo armado, el ESN)

#### Síntesis:

Tras la independencia en 1960, el Estado nigeriano se ha enfrentado al reto de articular las diferentes nacionalidades étnicas. El ejemplo más paradigmático fue la guerra civil entre el Estado y la autoproclamada República de Biafra (1967-1970), en la que murieron entre 1 y 3 millones de personas. Después de tres décadas de gobierno militar, el advenimiento de la democracia en 1999 generó nuevas expectativas de acomodación de identidades y demandas de reestructuración política que no se han hecho realidad, alimentando los agravios separatistas. En este contexto, las demandas de autodeterminación han resurgido en el sureste del país -denominado como Biafra por los movimientos independentistas- a través de organizaciones noviolentas, principalmente con el Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), creado en 1999 y luego por otros movimientos secesionistas incluido el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), creado en 2012. El ascenso al poder de Muhammadu Buhari en 2015, percibido como una amenaza en las regiones del sur, ha contribuido a un incremento de la tensión. El encarcelamiento en 2015 del líder del IPOB, Nnamdi Kanu, provocó un incremento de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad nigerianos, que desde entonces emprendieron una campaña de violencia y ejecuciones extrajudiciales, situación que se agravó con la ilegalización del IPOB en 2017 y el incremento de la violencia en la segunda mitad del 2020, especialmente en el contexto de la prohibición del IPOB.

En el sureste de Nigeria continuaron los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia, que causaron decenas de víctimas mortales. El brazo armado del movimiento independentista IPOB, la Red de Seguridad del Este (ESN), continuó llevando a cabo acciones armadas durante todo el año. Según el centro de investigación ACLED, en 2023 se produjeron 660 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) que costaron la vida a 776 personas en el conjunto de los 10 estados que componen la región de Biafra (Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Delta y Cross River, aunque fue en los cinco primeros, en los que la comunidad ibo es mayoritaria, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales vinculadas al conflicto). En 2022 el número de eventos ascendía a 703 y las víctimas mortales a 985. Esta cifra de ACLED incluía la violencia vinculada a los enfrentamientos armados de Biafra entre el Gobierno y grupos armados independentistas, que causaron decenas de víctimas mortales, pero también los múltiples ataques en esos estados cometidos por grupos criminales, así como los enfrentamientos de carácter intercomunitario por los usos y la propiedad de la tierra, así como por el acceso al agua, que causan cada año centenares de víctimas mortales.

Decenas de personas murieron durante el año como consecuencia del clima de inestabilidad, la recurrencia de las operaciones militares y los ataques contra puestos de policía y destacamentos militares, que supusieron

<sup>21.</sup> Adekaiyaoja, Afolabi, Tinubu's cabinet nominees: Renewed hope or recycled tropes?, African Arguments, 8 de Agosto de 2023.

<sup>22.</sup> Busari, Stephany, "Nigeria's Bola Tinubu sworn in as president, facing divided nation and economic woes," CNN, 29 de mayo de 2023.

un grave obstáculo para el desarrollo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2023. Entre los hechos más destacados del año, en diciembre en un ataque en la localidad de Oba (estado de Anambra) contra una milicia de autodefensa murieron siete civiles y miembros de la milicia, y en septiembre un comando del IPOB llevó a cabo una emboscada en Ehime Mbano (en el estado de Imo) en la que murieron ocho miembros de los cuerpos de seguridad. A finales de septiembre, las Fuerzas Aéreas bombardearon dos lugares identificados como posibles bases de entrenamiento y armerías del IPOB en el área de Nnewi North (estado de Anambra) y en el área de Okigwe (Imo). En noviembre, el Gobierno del estado de Abia descubrió una fosa con 70 cuerpos, supuestamente de personas secuestradas para exigir rescate.

Cabe destacar unas declaraciones que se produjeron en octubre que podrían evidenciar tensiones en el seno del IPOB. Dos facciones importantes del IPOB emitieron mensajes contradictorios sobre planes futuros. El autoproclamado primer ministro del Gobierno de la República de Biafra en el exilio, Simon Ekpa, quien en agosto se había declarado comandante del nuevo Ejército de Liberación de Biafra (BLA), el 5 de octubre dijo que las autoridades de Biafra "pronto iniciarían un gobierno pleno". Sin embargo, dos días después, la facción dominante del IPOB afirmó que el grupo estaba abierto a conversaciones con el Gobierno Federal sobre la independencia de Biafra a través de un referéndum supervisado por la ONU, ofreciendo a Tinubu la oportunidad de iniciar un diálogo sobre la cuestión.<sup>23</sup> Además, el Tribunal Supremo reinstauró en diciembre de 2023 los cargos de terrorismo contra el líder del IPOB, Nnamdi Kanu, cargos que le había retirado el 13 de octubre de 2022 el Tribunal de Apelaciones de Abuja.24 Esta decisión del Tribunal Supremo de diciembre podría hacer cambiar los anuncios previos realizados por los diferentes sectores del IPOB. El Tribunal Supremo señaló que Nnamdi Kanu debía ser juzgado por terrorismo aunque su extradición desde Kenya hubiera sido ilegal. Se teme que esta decisión provoque una escalada de la violencia por parte del IPOB.

Senegal	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Interna Gobierno
Actores:	Gobierno, oposición política y social
	·

#### Síntesis:

Senegal obtuvo su independencia en 1960. Desde ese momento hasta el año 2000, el país estuvo gobernado por un sistema de partido único de Estado encabezado por el Partido Socialista de Senegal. A partir de ese momento Senegal inició un régimen multipartidista, y en las elecciones presidenciales del año 2000, el líder de la oposición, Abdoulaye Wade, logró la presidencia a manos del Partido Democrático Senegalés. Wade se mantuvo en el poder hasta el año 2012, siendo derrotado por Macky Sall, candidato de Alianza por la República. En el año 2019, Ousmane Sonko, un joven proveniente de la región sureña de Casamance, se presentó a las elecciones liderando el partido Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés), con un programa político anticolonialista que ponía el foco en la falta de oportunidades para la juventud senegalesa. En las elecciones Sonko quedó tercero en la contienda, pero su figura creció en todo el país, que demandaba un cambio de Gobierno. Este hecho marcó el inicio de importantes movilizaciones encabezadas por la juventud senegalesa. Posteriormente, en febrero de 2021 Sonko es detenido, provocando que sus seguidores tomasen las calles en lo que consideraron un movimiento para anularle de la carrera presidencial. A partir de ahí se abrió una importante crisis política en el año 2022 entre el Gobierno presidido por Macky Sall y la oposición política y social.

Durante el año se incrementó la crisis política en el país entre el Gobierno y la oposición, provocando múltiples protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que provocaron la muerte de decenas de personas. En el mes de mayo las tensiones políticas que se habían iniciado en el país en el año 2022 aumentaron significativamente cuando el Tribunal de Apelación amplió de dos a seis meses la condena de prisión condicional impuesta a Ousmane Sonko, líder del partido opositor Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF por sus siglas en francés) por un caso de difamación. Este hecho podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales previstas, inicialmente, para febrero de 2024. La sentencia provocó protestas y enfrentamientos entre los seguidores de Sonko y las fuerzas de seguridad tanto en la ciudad de Ziguinchor -bastión de Sonko en la región de Casamance- como en la capital, Dakar, dejando al menos dos muertos. Posteriormente, en el otro juicio que enfrentaba Sonko acusado de violación, el 24 de mayo el fiscal solicitó al tribunal que declarara a Sonko culpable, solicitando una pena de diez años de cárcel. La petición volvió a movilizar a los seguidores de Sonko en una marcha de Ziguinchor a Dakar encabezada por el líder opositor. Posteriormente, el 1 de junio Sonko fue condenado a dos años de prisión por "corromper a la juventud", lo que le inhabilitaba de facto para las elecciones presidenciales, siendo absuelto del cargo de violación. El fallo motivó nuevas movilizaciones y protestas en el país -principalmente en Ziguinchor y Dakar- por parte de partidarios de Sonko, que denunciaron que el veredicto tenía motivaciones políticas. El 2 de junio, el Gobierno desplegó el Ejército en Dakar, y días después cerró el acceso a Internet. Las movilizaciones fueron

<sup>23.</sup> Ugwu, Chinagorom, 'We're now ready for dialogue with Nigerian govt,' - IPOB, Premium Times Nigeria, 7 de octubre de 2023.

<sup>24.</sup> Véase el resumen sobre Nigeria (Biafra) en el capítulo 2 (Tensiones) en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Barcelona: Icaria, 2023.

duramente reprimidas, contabilizándose, según datos del Gobierno, 16 manifestantes muertos, mientras que Amnistía Internacional reportó 23 víctimas mortales, y el PASTEF elevó a 30 el número de personas muertas. Otras decenas de personas resultaron heridas y se detuvo a unas 500 personas en todo el país.

En este contexto de tensión, el 3 de julio el presidente, Macky Sall anunció que no se presentaría a la reelección, en lo que hubiese representado su tercera candidatura a la presidencia. El anuncio distendió provisionalmente las tensiones en el país, ya que era una de las principales demandas de la oposición. Sin embargo, a finales de julio, la Policía arrestó a Sonko bajo la acusación de planear una insurrección, el Gobierno disolvió el PASTEF y volvió a restringir el acceso a Internet desatando nuevas protestas sociales y enfrentamientos que dejaron dos personas muertas. En respuesta, Sonko anunció el inicio de una huelga de hambre, siendo ingresado en el hospital el 6 de agosto. Múltiples personalidades senegalesas, entre ellas el ex ministro Serigne Diop y el presidente de la Liga Senegalesa de Derechos Humanos, Alassane Seck, firmaron una petición exigiendo la liberación de Sonko y el retorno a la legalidad del PASTEF. Posteriormente, el 14 de diciembre, el tribunal de primera instancia de Dakar reincorporó a Sonko al registro electoral, permitiéndole poder presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el Gobierno impugnó ante el Tribunal Supremo la decisión judicial. La coalición "Sonko President 2024" nominó a Sonko como candidato presidencial en una ceremonia realizada de forma virtual el 31 de diciembre, luego de que las autoridades prohibieran la reunión de nominación inicialmente programada para el 30 de diciembre en Dakar, citando riesgos para el orden público.<sup>25</sup> Al finalizar el año, la tensión política en el país se mantenía a las puertas de la convocatoria de las elecciones presidenciales, y Sonko mantenía los cargos de incitación a la insurrección, conspiración con grupos terroristas y amenaza a la seguridad del Estado.

# Cuerno de África

Eritrea – Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Eritrea, Etiopía

#### Síntesis:

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada,

lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía. Desde entonces persistió un clima de alta tensión, con miles de soldados en la frontera común, enfrentamientos esporádicos y una retórica beligerante. En 2018 se alcanzó un acuerdo histórico entre ambos Estados, dando inicio al restablecimiento de relaciones diplomáticas, reapertura de vuelos y de sus fronteras. No obstante, el optimismo inicial decayó al poco, ya que después de unos meses, en 2018 la frontera volvió a cerrarse y quedaron numerosos asuntos sin resolver. La guerra entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré entre 2020 y 2022 contribuyó a que los antiguos enemigos se aliaran para luchar contra el TPLF, pero viejos agravios y nuevas disputas podrían amenazar con reanudar el conflicto.

En el caso de Eritrea y Etiopía, cinco años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre ambos Estados, la guerra entre Etiopía y las autoridades político-militares de Tigré entre 2020 y 2022 contribuyó a que los antiguos enemigos se aliaran para luchar contra el TPLF, pero viejos agravios y nuevas disputas podrían amenazar con revivir el conflicto, según diversos análisis. El hecho de que ni las milicias y fuerzas especiales de la región de Amhara ni Eritrea participaran del acuerdo de Sudáfrica de noviembre de 2022 entre Etiopía y el TPLF, y que ambos actores hubieran deseado eliminar la resistencia del TPLF en lugar de alcanzar un acuerdo, entre otras cuestiones, contribuyeron a incrementar la tensión entre Eritrea y Etiopía.<sup>26</sup> Durante 2023 movimientos de tropas en la frontera común y la ausencia de contactos entre las partes, además de informes sobre un posible apoyo de Eritrea a las milicias amhara Fano y a la insurgencia oromo del OLA, que combaten a los cuerpos de seguridad etíopes, elevaron las alarmas.<sup>27</sup> En paralelo, aunque se había anunciado la práctica retirada de las tropas eritreas de territorio etíope, diferentes análisis alertaron también de la presencia de tropas eritreas en localidades etíopes cercanas a la frontera común.

Fuentes militares eritreas<sup>28</sup> sugirieron que su país se estaba preparando para una posible guerra. Según

<sup>25.</sup> Le Monde, "Senegal's authorities prohibit nomination meeting planned for opposition leader Sonko", 30 de diciembre de 2023.

<sup>26.</sup> Kheir Omer, Mohammed, "How Eritrea Could Derail the Ethiopian Peace Deal", Foreign Policy, 10 de noviembre de 2022.

<sup>27.</sup> Kheir Omer, Mohammed, "Are Ethiopia and Eritrea on the Path to War?", Foreign Policy, 7 de noviembre de 2023.

<sup>28.</sup> Ibid.

análisis, Etiopía acumuló tropas cerca de la frontera con Eritrea en la localidad etíope de Zalambessa, que está a 100 millas de la capital eritrea, Asmara, y cerca de la frontera con la Región Sureña del Mar Rojo, que incluye el puerto eritreo de Assab, que está a 45 millas de la frontera con Etiopía y que podría resultar difícil de defender para Eritrea. Esas zonas recientemente fueron testigos de una mayor actividad aérea y movimientos de tropas.

Las tensiones aumentaron en octubre, cuando Abiy manifestó el "derecho" de Etiopía al acceso al mar, enfatizando sus reclamos históricos sobre la costa del Mar Rojo.<sup>29</sup> Los líderes regionales vieron sus comentarios, que Abiy había expresado durante mucho tiempo en privado, como una amenaza implícita de apoderarse de parte de Eritrea, cuya secesión de Etiopía en 1991 dejó a este último sin salida al mar. La desconfianza creciente, así como la movilización de fuerzas y acumulación de armamento en la zona fronteriza generaron un clima de preocupación. El acuerdo de principios de 2024 entre Etiopía y Somalilandia en torno al posible acceso etíope a la costa de esta región en disputa con Somalia puso de manifiesto que Etiopía seguía empeñada en maximizar sus intereses estratégicos, a costa de un deterioro de las relaciones con sus vecinos,30 acuerdo que podía contribuir a reducir el interés etíope hacia los puertos de Eritrea.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno
	Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, diversos grupos armados

### Síntesis:

El régimen que ha gobernado Etiopía desde 1991 se ha enfrentado a una serie de movimientos opositores que reclamaban avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) estuvo controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que gobernó el país entre 1991 y 2019 con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. El régimen federal étnico implantado por el EPRDF no resolvió la cuestión nacional, lo que alimentó la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores políticomilitares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya. La movilización social contribuyó a la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn a inicios de 2018 y la designación de Abiy Ahmed, que emprendió una serie de reformas -entre las cuales, disolver la coalición EPRDF y refundarla en un nuevo partido de ámbito nacional, el Prosperity Party (PP), que rehuía el federalismo étnicodirigidas a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. Sin embargo, los cambios introducidos por el Gobierno de Abiy Ahmed provocaron tensiones en la federación, en especial entre el Gobierno Federal controlado por el PP y el TPLF, que culminó con una guerra (2020-2022), en la que Eritrea y las milicias de la región de Amhara apoyaron al Gobierno Federal. El acuerdo entre el Gobierno y el TPLF que puso fin a la guerra no hizo partícipes a Eritrea y a las milicias amhara. Estas milicias, al verse forzadas a desarmarse se rebelaron, iniciando un nuevo conflicto. En paralelo, otros movimientos político-militares, como el grupo armado oromo OLA, cuestionan el proyecto nacional de Abiy Ahmed. Por último, otros focos de tensión hacen referencia a su proyecto de hegemonía regional y la defensa de sus intereses nacionales (competencia por los recursos hídricos con sus vecinos Egipto y Sudán y diversificación del acceso al mar vía sus vecinos Djibouti, Eritrea y Somalilandia).

El país continuó afectado por numerosos retos y focos de inestabilidad y violencia internos y de dimensiones regionales.31 Entre los retos de carácter interno cabe destacar, en primer lugar, las consecuencias de la guerra en la región de Tigré, una de las más graves de los últimos años en términos de víctimas mortales y otros múltiples impactos como desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otros. Durante el año el Gobierno Federal y el movimiento político-militar de la región continuaron implementando el acuerdo de paz de noviembre de 2022, a pesar de los numerosos retos abiertos, de la fragilidad de la situación, de las vulneraciones de los derechos humanos y la hambruna que seguía afectando a la región.<sup>32</sup> En segundo lugar, la situación en la región de Oromiya siguió siendo de extrema gravedad durante el año 2023, constatándose una persistencia de los enfrentamientos y ataques por parte el grupo armado Ejército de Liberación Oromo (OLA) y de acciones de contrainsurgencia de los cuerpos de seguridad federales.<sup>33</sup> En 2023 los cuerpos de seguridad federales ya no contaron con el apoyo de las milicias amhara Fano para combatir al OLA, ya que el anuncio en abril por parte del Gobierno Federal de desarmar y disolver las fuerzas especiales en todo el país y en especial las fuerzas especiales amhara y las milicias amhara Fano, y su integración en la Policía y en el Ejército, fue rechazado por estas milicias. Este anuncio desencadenó

<sup>29.</sup> The Economist, "Ethiopia's prime minister wants a Red Sea harbour", The Economist, 2 de noviembre de 2023.

<sup>30.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía-Somalia en este capítulo.

<sup>31.</sup> Véase los resúmenes sobre Eritrea-Etiopía y de Etiopía-Somalia en este capítulo.

<sup>32.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía (Tigré) en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África). Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

<sup>33.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía (Oromiya) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

una escalada de los enfrentamientos entre estas y los cuerpos de seguridad federales. Las milicias amhara se replegaron en su mayoría a la región de Amhara, donde iniciaron una guerra de guerrillas contra el Gobierno Federal. Desde entonces se produjo una escalada de violencia, represión y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad federales y estas milicias, a las que se les unieron parte de las fuerzas de seguridad regionales que desertaron de sus puestos.34 Cabe destacar también que sectores disidentes de la región de Benishangul-Gumuz se opusieron al acuerdo de desarme de 2022 del Movimiento Democrático Popular de Gumuz, lo que derivó en un incremento de las actividades de grupos secesionistas y acciones contrainsurgentes de los cuerpos de seguridad en Benishangul-Gumuz y también en Gambella, entre otras regiones. El Gobierno Federal continuó lidiando con demandas y movilizaciones de actores político-militares vinculados a los más de 80 grupos étnicos de Etiopía.

En el plano regional, **Etiopía**, **Egipto y Sudán** acordaron reanudar las conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés), pero no se produjeron avances en las diferentes rondas de negociación celebradas durante el año, y Etiopía consiguió llevar a cabo el llenado de la presa a pesar de la oposición de sus vecinos Egipto y Sudán.<sup>35</sup> Por último, cabe destacar el memorando de entendimiento alcanzado entre Etiopía y Somalilandia que desencadenó una grave crisis diplomática entre Somalilandia y Somalia y, en especial, una escalada de la tensión entre Etiopía y Somalia que podría tener consecuencias regionales.36 Además, se produjo un paulatino deterioro de las relaciones entre Eritrea y Etiopía, países que hace cinco años firmaron un histórico acuerdo de paz y que apenas hace dos años estuvieron colaborando en el conflicto armado contra el TPLF, movimiento político-militar de la región de Tigré. El fin de la guerra y la marginación de Eritrea en el acuerdo de paz entre el TPLF y el Gobierno Federal etíope podría amenazar con reanudar el conflicto entre ambos, según diversos análisis.37

Etiopía-Somalia	
Intensidad:	3
Evolución:	<u> </u>
Tipología:	Gobierno, Territorio, Recursos Internacional
Actores:	Etiopía, Somalia, Somalilandia

#### Síntesis:

El conflicto entre Etiopía y Somalia se remonta al siglo XIV, cuando los gobernantes de las tierras altas cristianas de Etiopía llevaron a cabo expediciones militares en las tierras costeras donde predominaba el Islam, particularmente en lo que hoy es el norte de Somalia, para abrir rutas comerciales que les dieran acceso al mar. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el emperador etíope Menelik conquistó la ciudad somalí de Harar y en 1891 anunció un ambicioso programa de expansión, y tras la I Guerra italo-etíope (1895-1896), en la que derrotó a la Italia colonial, consiguió el reconocimiento de su independencia ante los poderes coloniales. En respuesta a la amenaza expansionista de Menelik, muchos clanes de lo que se convirtió en la Somalilandia británica aceptaron la protección británica. Tras la derrota en la Il Guerra italo-etíope contra la Italia de Mussolini y el posicionamiento etíope en la IIGM, Etiopía consiguió a finales de la década de los 1940, para consternación de los somalíes, que la región somalí de Ogadén fuera entregada a Etiopía por el Imperio británico. Tras la independencia de Somalia en 1960, ambos países se enfrentaron en diversas guerras (1964, 1977-1978, 1982) en las que Somalia fue derrotada. La guerra civil somalí de finales de los años ochenta y el colapso de Somalia en 1991 situaron a Etiopía en clara ventaja militar y económica y convirtieron a Somalia en una cuestión de seguridad nacional para Etiopía, interviniendo en los asuntos internos somalíes para promover la paz y la seguridad en Somalia en defensa de sus propios intereses, no siempre coincidentes con los intereses somalíes. Etiopía apoyó a unos actores político-militares en detrimento de otros y mantuvo presencia militar permanente unilateral y no pública y posteriormente dentro de marcos multilaterales (AMISOM y actualmente ATMIS), hecho que ha sido instrumentalizado por el grupo armado de Somalia al-Shabaab para justificar en parte su campaña armada.

La firma de un memorando de entendimiento<sup>38</sup> entre Etiopía y Somalilandia el 1 de enero de 2024 desencadenó una grave crisis diplomática entre ambas entidades y Somalia y, en especial, una escalada de la tensión entre Etiopía y Somalia que podría tener consecuencias regionales. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía debía evaluar esa petición, y prometió "una evaluación en profundidad<sup>39</sup>. El acuerdo, según diversos análisis, podría girar en torno al puerto de Lugaya, cerca de la frontera con Djibouti, o al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Etiopía históricamente ha

<sup>34.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía (Amhara) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>35.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía-Egipto-Sudán en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África). Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

<sup>36.</sup> Véase el resumen sobre Etiopía-Somalia en este capítulo.

<sup>37.</sup> Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en este capítulo.

<sup>38.</sup> Faisal, Ali, "Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports", The Guardian, 1 de enero de 2024.

<sup>39.</sup> Ehl, David, "Polémico acuerdo: salida al mar a cambio de reconocimiento", DW, 4 de enero de 2024.

buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti. Las tensiones entre Etiopía y Djibouti, en parte debido a las quejas etíopes sobre las tarifas portuarias de Djibouti y la excesiva burocracia, podrían haber influido en el cálculo de Abiy Ahmed de cara a promover este acuerdo. El acuerdo también incluía arrendar terreno de Somalilandia para construir una base naval. A cambio, Somalilandia recibiría el valor equivalente en forma de acciones de la aerolínea Ethiopian Airlines. La oficina del primer ministro etíope celebró el acuerdo pero no hizo ninguna mención al reconocimiento de la independencia de Somalilandia, solo hizo mención a un compromiso de avanzar en intereses mutuos sobre la base de la reciprocidad. Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Se convocaron manifestaciones contrarias al acuerdo en Somalia. En la propia Somalilandia el acuerdo fue recibido con protestas y la dimisión del ministro de Defensa. EEUU, UE, UA, IGAD y la Liga Árabe, entre otros, hicieron un llamamiento al diálogo y a reducir la tensión. La organización regional IGAD, a través del Gobierno de Djibouti, que ocupa la presidencia rotatoria, convocó de urgencia una reunión extraordinaria el 18 de enero de 2024 para abordar las tensiones diplomáticas, a la que Etiopía anunció que no podría asistir por solapamiento con la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Según diversos análisis,40 aunque es improbable una confrontación entre ambos países, debido al poder militar etíope frente al somalí, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos países y tener consecuencias en la guerra contra el grupo islamista somalí al-Shabaab. Un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría cuestionar la presencia de tropas etíopes en la misión de la UA en el país, ATMIS, de la que Etiopía es uno de los principales países contribuyentes.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

#### Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. El padre de la independencia y fundador de KANU, Jomo Kenyatta, gobernó el país desde 1964 hasta su muerte en 1978, y fue sucedido por el autocrático Daniel Arap Moi. En 1991 Moi inició una transición hacia el fin del régimen de partido único, y en 1992 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas, también ganadas por KANU. A partir de 2002, el proceso clientelar para suceder a Moi se interrumpió por la victoria de Mwai Kibaki, que junto a desafectos de KANU y otros, crearon la National Alliance of Rainbow Coalition (NARC) y derrotaron a Uhuru Kenyatta, hijo del líder de la independencia y candidato oficialista de KANU. Desde entonces, han aflorado diferentes conflictos etnopolíticos en el país lo que ha provocado un clima de violencia política instrumentalizado durante los diferentes ciclos electorales. El fraude electoral de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.500 personas y unas 600.000 se vieron desplazadas. Tras ese proceso electoral se formó un frágil Gobierno de unidad nacional entre Mwai Kibabi y Raila Odinga (hijo del histórico líder opositor Oginga Odinga). En las elecciones de 2013 Uhuru Kenyatta obtuvo la presidencia del país y William Ruto la vicepresidencia, proceso electoral cuestionado por la oposición liderada por Raila Odinga, al igual que en 2017, cuando Kenyatta revalidó el poder. Ruto y Odinga se enfrentaron en las elecciones de 2022, también afectadas por irregularidades y en medio de un clima de violencia política, como en los anteriores procesos, en las que obtuvo la victoria Ruto. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por el robo de ganado y la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, la intervención militar de Kenya en Somalia desencadenó ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, y tensiones entre Kenya y Somalia a causa de sus diferentes agendas políticas, lo que suponen retos añadidos a la estabilidad del país.

La situación en el país se vio marcada por la persistencia de los ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en el este y el noreste y de la violencia intercomunitaria y de la criminalidad principalmente en el norte y el centro-norte, vinculada a disputas estructurales en torno a robos de ganado y los usos y la propiedad de la tierra agravadas por la extrema sequía y las inundaciones derivada de las consecuencias del cambio climático. En este sentido, el Gobierno anunció que las inundaciones vinculadas al fenómeno climático El Niño habrían causado la muerte de 120 personas y el desplazamiento de decenas de miles de personas entre octubre y finales de noviembre.<sup>41</sup>

Según datos de ACLED,<sup>42</sup> durante 2023 se registraron 147 eventos violentos (batallas, violencia contra civiles y explosivos improvisados) en los cuatro condados fronterizos con Somalia (Mandera, Wajir, Garissa y

<sup>40.</sup> Weldemariam, Alemayehu, "Ethiopia's deal with Somaliland upends regional dynamics, risking strife across the Horn of Africa", *The Conversation*, 13 de enero de 2024.

<sup>41.</sup> Reuters, "Death toll from Kenya's El Nino floods jumps to 120", Reuters, 28 de noviembre de 2023.

<sup>42.</sup> ACLED, en línea [consultado el 15 de febrero de 2024].

Lamu), donde se concentra la mayoría de los hechos de violencia vinculados con acciones del grupo armado de corte yihadista al-Shabaab, que costaron la vida a 297 personas. Estas cifras suponen un incremento con respecto al año anterior (109 eventos violentos y 170 víctimas mortales en los cuatro condados fronterizos). En relación con las acciones de al-Shabaab, en la primera parte del año el grupo estuvo más inactivo y a partir de abril reanudó la intensidad de acciones de años anteriores. EEUU en octubre lanzó una alerta sobre posibles atentados inminentes del grupo armado en la capital. Además, en septiembre EEUU y Kenya firmaron un acuerdo de cooperación militar para hacer frente a las acciones de al-Shabaab en el país y colaborar en otros aspectos nacionales e internacionales de mutuo interés. Si a la cifra de víctimas mortales como consecuencia de las acciones de al-Shabaab se le añade la violencia intercomunitaria (principalmente en el centro y norte del país, aunque no exclusivamente) y otros hechos de violencia en el conjunto del país, el balance asciende a 541 eventos violentos que causaron 741 víctimas mortales., En 2022 en el conjunto del país se habían producido 440 eventos y 482 víctimas mortales.43 Entre las disputas intercomunitarias más destacadas del año se encuentran los enfrentamientos transfronterizos entre los condados de Kericho y Kisumu, que causaron decenas de víctimas mortales y que provocaron la intervención de operativos policiales, así como las disputas en otros condados donde las disputas tienen un carácter más estructural, como en Turkana, Marsabit, Samburu e Isiolo.

En paralelo, en diferentes momentos del año se produjeron importantes movilizaciones y protestas de la oposición contra el Gobierno en las que la intervención policial causó diversas víctimas mortales y detenciones de centenares de opositores. Cabe destacar que la discusión previa y la posterior aprobación en junio del proyecto de ley de finanzas de 2023, que duplicaba el impuesto al combustible, incrementaba los precios del maíz e introducía un nuevo impuesto a la vivienda, eliminando subsidios previos, provocó importantes movilizaciones y protestas durante todo el año. El partido del líder opositor Raila Odinga, de la coalición Azimio la Umoja, hizo un llamamiento al boicot de las nuevas medidas introducidas. El Gobierno defendió la necesidad de introducir estas tasas de cara a estabilizar la economía ante la grave volatilidad impuesta por la evolución de la situación a nivel internacional. Además, en diciembre el secretario del Tesoro, Njuguna Ndun'gu, admitió que el Gobierno había sido incapaz de hacer frente a los pagos de los funcionarios públicos durante cinco meses. Por otra parte, la alianza Kenya Kwanza (partido gobernante del presidente William Ruto) y la principal coalición opositora, Azimio la Umoja, mantuvieron contactos bilaterales durante el año hasta

que en agosto acordaron la creación del Comité de Diálogo Nacional (NDC) con una agenda de diálogo para hacer frente a diversos desacuerdos y bloqueos entre ambos, entre ellos el alto coste de la vida en el país y los resultados de las elecciones de 2022. El NDC se reunió con otros partidos políticos y grupos de la sociedad civil a partir de septiembre, y a finales de noviembre publicó un informe con recomendaciones entre las que destacaba un llamamiento a la restructuración y reconstitución de la comisión electoral, una auditoría de las últimas elecciones presidenciales, la solicitud de revisión de la política impositiva, la racionalización del gasto público, la expansión de la protección social y la reducción del coste de la vida. El Gobierno celebró las recomendaciones. No obstante, el 28 de noviembre el Tribunal Superior dictaminó que el impuesto salarial introducido por Ruto en junio era ilegal, lo que asestó un golpe a los esfuerzos del Gobierno por aumentar los ingresos fiscales, y uno de los líderes de Azimio, Kalonzo Musyoka, celebró lo que calificó como la victoria de la coalición opositora.

Por último, cabe destacar que Nairobi retiró sus tropas de RDC en el marco de su participación en la misión de la EAC y estuvo preparando el despliegue de tropas en Haití,<sup>44</sup> aunque esta cuestión seguía pendiente a finales de año a la espera de la su aceptación por parte del Tribunal Supremo de Kenya.

# Grandes Lagos y África Central

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↓</b>
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Consejo Militar de Transición, oposición política y social (entre otros, coalición Wakit Tama, que incluye al partido Les Tansformateurs), grupos armados chadianos (entre los principales, FACT, CCMSR, UFDD, UFR), milicias comunitarias, milicias privadas, Francia

### Síntesis:

Con frecuencia clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, Chad enfrenta un complejo clima de inestabilidad y violencia desde su independencia en 1960. La diversidad étnica del país se ha visto instrumentalizada por una tradición de faccionalismo. El colonialismo francés también exacerbó la animosidad entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista, división instrumentalizada políticamente y que forma parte del núcleo del conflicto. Los sucesivos gobiernos desde 1966 se han visto confrontados por insurgencias que pretendían

<sup>43.</sup> Si a esta cifra se le añade la violencia vinculada a protestas y a movilizaciones con disturbios en 2023, el número de eventos violentos alcanzó la cifra de 2.248 eventos y las 1.011 víctimas mortales, cifra superior a los 1.660 eventos y a las 698 víctimas mortales para 2022.

<sup>44.</sup> Véase el resumen sobre Haití en este capítulo.

acceder al poder. Libia y Francia históricamente han estado presentes en los asuntos internos chadianos, apoyando, respectivamente, a insurgencias y gobiernos. Idriss Déby alcanzó el poder tras un golpe de Estado en 1990. La reforma de la Constitución en 2005 le permitió convertirse en uno de los líderes más longevos del continente, pero fue el germen de una insurgencia compuesta por desafectos al régimen. Tras su muerte en 2021 una junta militar dio un golpe de Estado e instaló a su hijo, Mahamat Idriss Déby, como nuevo presidente. Durante 2022 Déby hijo alcanzó un acuerdo con parte de la insurgencia en Doha y celebró el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano (DNIS) que le permitió prolongar su mandato más allá de la promesa inicial de una transición de 18 meses. A esta situación se añaden otros focos internos de inestabilidad como son los periódicos brotes de violencia intercomunitaria por robo de ganado y la propiedad y usos de la tierra, la persistencia de acciones insurgentes en el norte y la minería ilegal. Y desde una perspectiva regional, el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra de la vecina Sudán, así como la participación en la ofensiva regional contra Boko Haram en la región del Lago Chad.

Chad continuó inmerso en un clima de inestabilidad y violencia tras la prolongación del mandato presidencial en octubre de 2022 y la celebración del referéndum constitucional en diciembre de 2023. El periodo de transición de 18 meses adoptado en abril de 2021 por el consejo militar que ocupó el poder mediante un golpe de Estado -y que suspendió la Constitución e instaló a Mahamat Idriss Déby, hijo de Idriss Déby, tras la muerte de este- fue prolongado por un nuevo periodo de 24 meses. Esa decisión de la junta militar desencadenó movilizaciones en su contra, que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad, causando decenas de víctimas mortales (50 según el Gobierno, incluyendo a 10 policías, y 100 según la oposición, mayoritariamente civiles), en lo que se ha conocido como el Jueves Negro chadiano, el 20 de octubre de 2022.45 Tras este nuevo periodo de transición se prevé la celebración de elecciones en octubre de 2024 a las que se podrá presentar Mahamat Déby. La actuación represiva de los cuerpos de seguridad, los brotes esporádicos de violencia en el norte por parte del grupo armado FACT y los enfrentamientos en torno al robo de ganado y usos de la tierra fueron una constante durante 2023, aunque se redujeron respecto al año 2022. En el conjunto del país se contabilizaron 148 eventos violentos que provocaron 264 víctimas mortales en 2023, según ACLED,46 cifras inferiores a los 239 eventos violentos y 742 víctimas mortales de 2022.

Durante 2023 el Gobierno de transición puso en marcha el comité organizador del referéndum constitucional

-una de las recomendaciones derivadas del proceso de diálogo (DNIS) celebrado en 202247- que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023. El referéndum fue boicoteado por varias figuras de la oposición política y de la sociedad civil<sup>48</sup> que continuaron denunciando que el proyecto de Constitución se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal, la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. La nueva Constitución, elaborada bajo la tutela de la Junta Militar, fue aprobada con baja participación sobre todo en las principales ciudades y en particular el sur del país. La Comisión Electoral dictaminó el 24 de diciembre que la Constitución contó con el apoyo del 86% de los votos, con una participación del 63,75%. Figuras como el antiguo primer ministro Pahimi Padacké y el antiguo ministro Yaya Dillo cuestionaron los resultados. Según la oposición, este referéndum constitucional pretendía reforzar los poderes del presidente, y legitimar un Estado más centralista y el proceso de transición iniciado con el golpe de Estado cometido en abril de 2021 al facilitar que el líder de la Junta Militar, Mahamat Déby, pueda presentarse a las elecciones que deberán celebrarse en 2024.

La aprobación de la nueva Constitución comportó la renovación del Gobierno de transición del antiguo líder opositor cooptado por la Junta Militar, Saleh Kebzabo, y el nombramiento del antiguo líder opositor Succès Masra el 2 de enero de 2024 como nuevo primer ministro.<sup>49</sup> Masra había retornado el 3 de noviembre después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas -alrededor de 300, según la oposición- de víctimas mortales. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, se alcanzó en Kinshasa e incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición y promover la reconciliación. El 5 de noviembre, las autoridades liberaron a 72 miembros del partido opositor Les Transformateurs que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N'Djamena, e instó a la reconciliación con la cúpula militar. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de

<sup>45.</sup> Véase el resumen sobre Chad en el capítulo 2 (Tensiones). Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.* Barcelona: Icaria, 2023.

<sup>46.</sup> ACLED, Dashboard [consultado el 19 de febrero de 2024]. Esta cifra incluye cinco tipos de eventos violentos (batallas, violencia contra civiles, acciones con artefactos explosivos improvisados, disturbios y protestas). Si se excluye los disturbios y protestas, la cifra de eventos violentos cae a 86 y, en cambio, se mantiene una cifra similar de víctimas mortales (259).

<sup>47.</sup> Para profundizar en la cuestión, véase Josep Maria Royo, "Claves y retos de la transición en Chad (2) esperanzas frustradas con el proceso de paz y el diálogo nacional", Escola de Cultura de Pau, *Apunts ECP de Conflictos y Paz Nº23*, Diciembre de 2022; Josep Maria Royo, "Claves y retos de la transición en Chad (1) Cambio climático, inestabilidad y conflicto", Escola de Cultura de Pau, *Apunts ECP de Conflictos y Paz Nº19*, Noviembre de 2022.

<sup>48.</sup> Josep Maria Royo, "Chad, ante un referéndum constitucional que perpetúa la dinastía Déby", Africaye, 16 de diciembre de 2023.

<sup>49.</sup> Al-Jazeera, "Former Chad opposition leader appointed as PM of transitional government", *Al-Jazeera*, 1 de enero de 2024.

las movilizaciones de octubre de 2022. En este sentido, la aceptación de Masra del cargo generó opiniones encontradas en sectores opositores y de la sociedad civil.<sup>50</sup> Sin embargo, tal y como destacó el International Crisis Group (ICG) en enero de 2024, Déby afirmó en los días siguientes su autoridad, ya que el nuevo gobierno mantuvo figuras clave del gobierno anterior, mientras que Masra aseguró sólo tres ministerios para su partido. En un probable intento por reforzar el control sobre las

acciones de Masra, según el ICG, Déby el 8 de enero de 2024 nombró a otra figura que había abandonado Les Transformateurs, Moustapha Masri, como jefe adjunto de su gabinete civil. El partido gobernante Movimiento Patriótico de Salvación del difunto presidente Idriss Déby nominó al presidente Mahamat Déby como candidato para las elecciones presidenciales previstas para el 13 de octubre de 2024.

Por otra parte, diversos análisis también señalaron que Déby había fracasado en la puesta en marcha del comité que debía llevar a cabo el seguimiento de las

resoluciones de las conversaciones de paz de Doha y que no estaba implementando las recomendaciones del diálogo nacional. Entre junio y julio Déby retiró a un centenar de generales y promovió a un número similar de jóvenes oficiales próximos a él al rango de general (alrededor de 500 generales en el país, una de las cifras más altas a nivel mundial en proporción al Ejército). En paralelo, el presidente de la Comisión de la UA, el chadiano Moussa Faki, reiteró que los militares chadianos no deberían poder presentarse a las elecciones de 2024 y deberían entregar el poder a los civiles. A principios de julio el Gobierno de transición estableció la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, en consonancia con el Acuerdo de Doha, así como también estableció otra comisión sobre reconciliación nacional y cohesión social. El 16 de octubre, las autoridades de transición declararon que se había dado comienzo al proceso de desarme, desmovilización y reintegración, según señaló la ONU en noviembre.

El Gobierno de transición llevó a cabo diversos indultos y decretó una amnistía de los responsables de las protestas antigubernamentales del 20 de octubre de 2022 así como de diversos actores político-militares en diferentes fases. En diciembre de 2022 la fiscalía del país había condenado a 262 personas arrestadas durante las protestas y decretado la libertad de otras 139 personas en un juicio que no contó con las garantías procesales según estándares internacionales. En febrero de 2023 se celebró el juicio de alrededor de 400 miembros del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT, por sus siglas en francés) capturados en abril de 2021 durante los combates que condujeron a la muerte del presidente ldriss Déby, y que fueron sentenciados a cadena perpetua. El presidente

Mahamat Déby indultó a 380 de ellos, así como a otros 259 activistas encarcelados por su participación en las movilizaciones de octubre de 2022. El líder del FACT, Mahamat Mahdi Ali, sentenciado junto a otros *in absentia*, no recibió el indulto. En julio otras 110 personas fueron indultadas por su participación en las movilizaciones del 20 de octubre de 2022.

El FACT rompió en agosto el alto el fuego unilateral

El presidente

golpista de

Chad reforzó sus

poderes mediante

el referéndum

constitucional de

diciembre de 2023

que le permitirá

presentarse a las

elecciones de

octubre de 2024

que mantenía desde abril de 2021 como consecuencia de la ofensiva iniciada ese mes por parte del Ejército Nacional de Libia y las Fuerzas Armadas chadianas en la región de Tibesti (norte). Aunque el Gobierno no había acordado ningún alto el fuego con el grupo, sí que había liberado a cientos de sus miembros de cara a facilitar su participación en el proceso de Doha, y también tras la sentencia de marzo. Esta ofensiva debilitó al grupo armado hasta el punto de que el secretario general del FACT, Mahamat Barh Béchir Kendji, se entregó a principios de noviembre a las autoridades chadianas junto con centenares de combatientes. El 9

de noviembre el FACT acusó de traición a Kendji. Los miembros de la coalición opositora Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR), compuesta por los 18 grupos armados que no firmaron el acuerdo de Doha (entre ellos, el FACT), manifestaron su voluntad de negociar con las autoridades de transición con el apoyo de una mediación neutral e imparcial, aunque no recibieron respuesta del Gobierno de transición.

En el plano regional, cabe destacar que se deterioraron las relaciones bilaterales entre Chad y Sudán por acusaciones del Ejército de Sudán y de su ministro de Exteriores de que Chad estaba facilitando que Emiratos Árabes Unidos pudiera dar apoyo al grupo paramilitar sudanés Rapid Support Forces. En paralelo, en el marco de la disolución de la misión de la ONU en Malí (MINUSMA), Chad llevó a cabo el retorno de su contingente en la misión. Por otra parte, Mauritania y Chad, los dos últimos miembros de la misión G5-Sahel, alianza creada en 2014 para hacer frente al yihadismo y otros desafíos en la subregión, anunciaron su disolución el 6 de diciembre, tras el anuncio de la retirada de Níger y de Burkina Faso. En paralelo, cabe destacar que la muerte de un soldado chadiano a manos de un soldado francés en la base militar francesa de la localidad de Fava, en la provincia de Borkou, en septiembre, provocó movilizaciones sociales exigiendo la retirada de las tropas francesas del país. Las autoridades establecieron una comisión de investigación conjunta francesachadiana. Estas protestas incrementaron la hostilidad hacia la presencia francesa, lo que derivó en octubre en una carta de 20 líderes de partidos políticos y organizaciones sociales locales y de la diáspora, entre ellos la plataforma Wakit Tama, exigiendo a Déby la retirada de las tropas francesas de Chad.

<sup>50.</sup> Africanews, "Tchad : Masra nommé Premier ministre, réactions mitigées à N'Djamena", Africanews, 2 de enero de 2024.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno liderado por la coalición Union Sacrée (liderada por Félix Tshisekedi e integrada por diferentes actores políticos, incluidos disidentes de la coalición Front Commun pour le Congo del ex presidente Joseph Kabila), oposición política (entre otros, Front Commun pour le Congo y Lamuka) y social

#### Síntesis:

RDC vive inmersa en un ciclo de inestabilidad y violencia que tiene sus orígenes en la época colonial bajo la tutela primero del rey belga Leopoldo II y posteriormente de Bélgica. El país no escapó de las dinámicas internacionales de la Guerra Fría por lo que la crisis persistió tras su independencia en 1965, a partir del golpe de Estado y posterior dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997). Se vio afectado también por las dinámicas regionales de conflicto en los países vecinos durante los años ochenta y noventa, en especial el genocidio de Ruanda de 1994 y su injerencia en RDC. La rebelión con apoyo ruandés de 1996 contra el régimen de Mobutu condujo a la caída del régimen en 1997, seguida por la "primera guerra mundial africana" (1998-2003) en la que participaron una decena de países de la región.51 La transición entre 2003 y 2006 contribuyó a afianzar en el poder a Joseph Kabila, que mediante el control del aparato del Estado, fraude e irregularidades en las elecciones de 2006 y 2011, consiguió prolongar su mandato de 2016 (cuando debía celebrarse un nuevo proceso electoral) a 2018. En la profunda y persistente crisis que afecta al país confluyen las promesas frustradas de democratización, un elevado clima de corrupción y clientelismo, la pobreza omnipresente y la violencia crónica, y el control del Gobierno se ejerce a través del a menudo recurrente uso excesivo de la fuerza y de graves vulneraciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. En 2018 se celebraron nuevas elecciones que significaron la primera transición pacífica en el país y comportaron la controvertida subida al poder de Félix Tshisekedi, hijo del histórico opositor Étienne Tshisekedi, mediante una frágil coalición en la que los partidarios de Joseph Kabila (la coalición FCC) siguieron ejerciendo su determinante influencia. Este clima de inestabilidad política convive con la persistencia del conflicto en el este de RDC, atravesado por dinámicas locales, regionales e internacionales.

La situación en RDC se agravó durante el 2023 como consecuencia de la violencia política vinculada a la contienda electoral, a lo que se sumó la escalada de la violencia en los diferentes escenarios de conflictividad. En primer lugar, a partir de octubre se intensificó la ofensiva por parte del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte.<sup>52</sup> Esta escalada en el último trimestre del año, además de las acciones

de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF)<sup>53</sup> y otros grupos en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, contribuyeron a la persistencia de un clima general de inseguridad. La ofensiva también se sumó al clima general de violencia política vinculada a la campaña electoral que culminó con las elecciones generales del 20 de diciembre. Por último, cabe constatar el conflicto armado iniciado a mediados de 2022 en el territorio de Kwamouth, en la provincia de Mai-Ndombe (oeste del país), que se intensificó en 2023, y se extendió a las provincias vecinas de Kwango, Kwilu, Kinshasa y Kongo Central, causando centenares de víctimas mortales.<sup>54</sup>

El 20 de diciembre se celebraron las elecciones generales en la RDC, en las que el presidente Félix Tshisekedi fue reelegido para un segundo mandato tras haber conseguido más del 73% de los votos con un 43% de la participación, según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), resultado ratificado por el Tribunal Constitucional. El presidente Félix Tshisekedi era el favorito en la carrera electoral, con la oposición fragmentada. Asumió el cargo en 2019 después de elecciones disputadas que, según diversas fuentes, podrían haber sido ganadas por otro candidato, Martin Fayulu. Las elecciones de 2023 se vieron plagadas de irregularidades, según numerosos analistas y la Conferencia Episcopal congolesa, y varios de los principales candidatos pidieron una repetición y denunciaron la existencia de fraude, entre ellos Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege y el partido del ex presidente Joseph Kabila.<sup>55</sup> Problemas logísticos, acusaciones de fraude, recuento opaco de votos, equipos defectuosos y retrasos en la entrega del material electoral obligaron a una extensión no programada de las elecciones, que los líderes de la oposición dijeron que era inconstitucional. La Iglesias católica y protestante de RDC, que actuaron como observadores locales de los comicios, informaron que los numerosos casos de irregularidades detectados podrían afectar a la integridad de los resultados. El Gobierno descartó la repetición electoral y prohibió las protestas de la oposición en los días posteriores a los comicios. En paralelo, los resultados provisionales de las elecciones legislativas fueron publicados por la CENI el 14 de enero y dieron como ganador al partido de Félix Tshisekedi, Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), que obtuvo 66 de los 500 escaños, incrementando el resultado obtenido en 2018 (35 escaños). Se espera que UDPS, junto al resto de los partidos aliados de la coalición Union Sacré, que en el Parlamento saliente controlaba 390 escaños, pueda configurar el nuevo Gobierno. Los partidos de algunos aliados de Tshisekedi, como el del presidente del Senado Modeste Bahati Lukwebo, el del ministro de Defensa Jean Pierre Bemba, y el del

<sup>51.</sup> Véase la síntesis sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>52.</sup> Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>53.</sup> Véase el resumen sobre RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>54.</sup> Véase el resumen sobre RDC (oeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

<sup>55.</sup> Kombi, Yassin y Rolley, Sonia, Congo's Katumbi says election should be annulled as opposition plans protest, Reuters, 23 de diciembre de 2023.

ministro de Economía Vital Kamerhe, obtuvieron 35, 17 y 32 escaños, respectivamente. Esta grave situación postelectoral alimentó una disputa que amenaza con desestabilizar el país y la región.

En el período previo a las elecciones, grupos de derechos humanos habían acusado a las autoridades de restringir el espacio político, y la ONU documentó violencia contra actores de la sociedad civil.<sup>56</sup> Desde octubre, organizaciones como Human Rights Watch alertaron de enfrentamientos en todo el país entre partidarios de partidos políticos rivales que resultaron en agresiones y violencia sexual.<sup>57</sup> Dichos incidentes de violencia política persistieron tras la celebración de las elecciones. Los partidarios del gobernante partido UDPS se vieron implicados en amenazas y ataques contra líderes opositores y periodistas. Los partidarios de la oposición también estuvieron implicados en actos de violencia. Los combates entre los cuerpos de seguridad y sus aliados y el M23 en el este del país también impidieron que 1,5 millones de personas desplazadas internas se registraran para votar.

En este sentido, la seguridad en el este se deterioró durante el mandato de Tshisekedi<sup>58</sup> y a finales de 2023 había una cifra récord de siete millones de personas desplazadas internamente.59 Aunque entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, tras culminar en el primer trimestre el despliegue de la misión militar de la organización regional Comunidad de Estados de África Oriental (EAC), iniciado en noviembre de 2022, este grupo continuó combatiendo contra grupos armados locales progubernamentales por el control del territorio en la provincia de Kivu Norte. No obstante, en octubre se intensificó la ofensiva del M23 en Kivu Norte, con

apoyo de Rwanda.60 La misión de la EAC completó su retirada del país el 21 de diciembre, a petición del Gobierno debido a su inoperancia. En paralelo, se produjeron conversaciones entre el Gobierno congolés y Sudáfrica, iniciadas en marzo, y que culminaron con el despliegue de una fuerza de la SADC en la zona con el objetivo de colaborar en las operaciones de combate de las FARDC contra el M23. En mayo fue aprobado por la SADC el despliegue de la Misión de la SADC en RDC (SAMIDRC), que se hizo efectivo el 15 de diciembre de 2023. Cabe remarcar que a principios de 2024

Uganda	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, ADF

#### Síntesis:

El presidente Yoweri Museveni ocupa el poder desde 1986, cuando al mando de un movimiento insurgente consiguió la toma del poder al derrocar al Gobierno de Tito Okello. Desde entonces ha gobernado Uganda de forma autoritaria. con todo el poder concentrado en sus manos y en su partido, el NRM (el Movimiento). En las elecciones presidenciales de 2001, Museveni venció a su principal opositor, Kizza Besigye, ex coronel del NRA, en medio de acusaciones de fraude. En un referéndum celebrado en julio de 2005, los ugandeses votaron en favor de un regreso al sistema multipartidista. Tras una enmienda a la Constitución en 2005, para aumentar el límite existente de dos mandatos consecutivos a tres, Museveni finalmente ganó las elecciones de 2006, en medio de serias acusaciones de fraude. Fueron las primeras elecciones multipartidistas desde la llegada de Museveni al poder en 1986. En las elecciones presidenciales de 2011 y 2016 Museveni volvió a imponerse a su eterno contrincante y antiguo aliado, Kizza Besigye, en medio de nuevas acusaciones de fraude, lo que generó una escalada de la tensión social y de la represión gubernamental contra las demandas de cambio democrático y las protestas contra el incremento del coste de la vida. En 2021 volvió a ganar las elecciones enfrentándose al nuevo líder de la oposición, el joven Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine. En paralelo, las intervenciones militares de Uganda en Somalia v RDC (este) incrementaron las amenazas del grupo armado somalí al Shabaab y del grupo armado ugandés con base en RDC, ADF, hacia Uganda. Finalmente, diversas zonas del país se ven afectadas por periódicas disputas intercomunitarias agravios instrumentalizados en período electoral.

> El año estuvo marcado por la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición política, el incremento de la inseguridad provocada por los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), así como por la aprobación de la ley que criminaliza y persigue a la comunidad LGTBIQ+. Durante el año, en lo que respecta a las tensiones políticas que mantiene el Gobierno de Yoweri Museveni con la oposición política, estas se volvieron a intensificar en el último trimestre después de que el Gobierno restringiera el derecho de reunión del ncipal partido opositor, Plataforma de

(NUP). Este hecho se produjo tras el del inicio de una gira de campaña

2024 se hizo también efectiva la primera	princ
fase de la retirada de la MONUSCO, con la partida de	Unidad Nacional (
2.000 cascos azules del país.	anuncio del NUP

<sup>56.</sup> Security Council Report, "Democratic Republic of the Congo: Briefing and Consultations", SCR, 27 de septiembre de 2023.

La situación en

RDC se agravó

durante el 2023

como consecuencia

de la escalada de

la violencia en los

diferentes frentes

abiertos en el país,

a los que se sumó

la violencia política

vinculada a la

contienda electoral

<sup>57.</sup> Human Rights Watch, "DR Congo: Electoral Violence Threatens Vote", HRW, 16 de diciembre de 2023.

<sup>58.</sup> The News Humanitarian, "Gaza's historic toll, DR Congo elections, and a city falls in Sudan: The Cheat Sheet", 22 de diciembre de 2023.

<sup>59.</sup> IOM, "Record High Displacement in DRC at Nearly 7 Million", IOM, 30 de octubre de 2023.

<sup>60.</sup> Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de este informe y en el capítulo 2 (Negociaciones de paz en África) en Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

por todo el país, llamada "marcha de un millón". Posteriormente, el 5 de octubre, la Policía arrestó a su líder, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, en el aeropuerto de Entebbe cuando regresaba de un viaje al extranjero. En respuesta, el 26 de octubre, la oposición abandonó el Parlamento por tercera vez en dos semanas, exigiendo un debate sobre los derechos humanos y el fin de la represión de los partidos de la oposición y provocando el bloqueo del Parlamento hasta el mes de diciembre.

Más allá de crisis política, Uganda también tuvo que hacer frente al deterioro de la situación de seguridad en el país debido al incremento de las acciones armadas de ADF y a la violencia provocada por el robo de ganado en las regiones septentrional y oriental del país, incluyendo la frontera con Kenya. En relación con la inseguridad provocada por las ADF y por la inestabilidad en la vecina RDC,61 en febrero, los jefes militares de la Comunidad de África Oriental (EAC) acordaron que Uganda (así como Burundi y Sudán del Sur) desplegaran tropas en la provincia de Kivu Norte (este de RDC) para luchar junto a las fuerzas kenianas contra los rebeldes del M23 y otras insurgencias como las ADF. A finales de marzo, unos 1.000 soldados ugandeses fueron desplegados en la ciudad de Bunagana, en la provincia de Kivu Norte. A mediados de junio, presuntos miembros de las ADF atacaron una escuela secundaria en la ciudad de Mpondwe, cerca de la frontera con RDC, matando al menos a 44 personas, en su mayoría niños y niñas. En respuesta, los Ejércitos de Uganda y RDC intensificaron las operaciones contra las ADF en el valle de Mwalika, territorio de Beni (Kivu Norte), y según los informes, mataron a 16 combatientes, entre ellos a varios líderes del grupo. Posteriormente, el 13 de octubre, presuntos miembros de las ADF emboscaron un vehículo civil en Katojo, cerca de la frontera con RDC, matando a dos personas, y días después mataron a dos turistas extranjeros y a su guía local en el Parque Nacional de la Queen Elisabeth. Si bien el 25 de octubre el Gobierno anunció una amnistía para los miembros de las ADF que estuvieran dispuestos a rendirse, en diciembre las ADF intensificaron los ataques en suelo ugandés, llevando a cabo dos atentados con bombas en Kampala que hirieron a una persona, y un ataque en la aldea de Kitehurizi, en el distrito de Kamwenge, en el cual diez civiles fueron asesinados y cientos se desplazaron de sus hogares.

Por otro lado, en relación con incidentes violentos relacionados con el robo de ganado, en la región de Karamoja, fronteriza con Kenya y Sudán del Sur, durante el año persistieron los ataques de presuntos ladrones de ganado que dejaron decenas de muertos. El 11 de mayo el Ejército desplegó tropas adicionales en Karamoja, en un intento por contener los robos de ganado y la violencia entre pastores y agricultores. También a mediados de mayo el presidente Yoweri K.

Museveni promulgó una orden ejecutiva por la que se prohibía la entrada en Uganda a los pastores turkanas kenianos, acusados de múltiples robos de ganado y asesinatos en suelo ugandés.

Finalmente, en otros eventos destacados del año, en febrero el Gobierno anunció el cierre de la oficina de ACNUDH en Uganda, hecho que fue criticado por activistas y grupos de defensa de los derechos humanos ugandeses, en particular, por el Foro de Concienciación y Promoción de los Derechos Humanos. Por otro lado, el 21 de marzo el Parlamento aprobó casi por unanimidad un proyecto de ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, que fue ratificado y promulgado en ley por el presidente Museveni a finales de mayo, lo que provocó una amplia condena a nivel internacional. En particular, el presidente de EEUU, Joe Biden, condenó la medida como una "trágica violación" de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que "socavan el proceso democrático" en Uganda y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. Grupos de derechos humanos ugandeses instaron al Banco Mundial (BM) a suspender los préstamos a Uganda, y el 8 de agosto este organismo anunció la congelación de nuevos préstamos a Uganda, provocando que el shilling ugandés cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años.

# Magreb – Norte de África

Túnez	
Intensidad:	3
Evolución:	<u> </u>
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados con agendas yihadistas

### Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición

<sup>61.</sup> Para más información, véase el resumen sobre RDC (ADF-este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS. Desde mediados de 2021, Túnez está inmerso en una nueva crisis, en un contexto caracterizado por los intentos de concentración del poder por parte del presidente Kais Saïed.

Durante 2023 se intensificó la deriva autoritaria del presidente Kais Saïed y la represión de voces críticas y también se registraron preocupantes ataques contra la población migrante subsahariana. En línea con las medidas observadas desde mediados de 2021, a lo largo del año Saïed siguió concentrando poder y disminuyendo los mecanismos de equilibrio de poderes y control al Ejecutivo. Tras la segunda ronda de las elecciones legislativas celebrada en enero, un nuevo Parlamento se instauró en marzo en medio de críticas de la principal coalición opositora. El Frente de Salvación Nacional (FSN) no reconoció la legitimidad del nuevo Legislativo, surgido de comicios con una tasa de participación del 11% y que, según denunciaron diversas voces, cuenta con muchos menos poderes según lo establecido en la Constitución promovida por el propio Saïed y adoptada en 2022. El mismo mes de marzo el presidente tunecino decidió unilateralmente disolver los concejos municipales electos democráticamente y reemplazarlos por nuevas autoridades locales, escogidas con nuevas normas. Estas elecciones locales celebraron su primera ronda en diciembre -la segunda estaba prevista para febrero de 2024–, y también contaron con una bajísima tasa de participación (11%) en medio de llamamientos al boicot. Figuras de la oposición e intelectuales insistieron en que esta votación solo contribuiría a consolidar el sistema represivo en el país. Durante todo el año, se produjeron constantes y numerosas acciones legales, detenciones y condenas contra representantes de la oposición y otras voces críticas, empresarios y periodistas. Figuras del partido de inspiración islamista Ennahda se vieron especialmente afectadas por esta campaña. Su líder, Rachid Ghannouchi, fue detenido en abril tras alertar de que la persecución a las fuerzas islamistas podía derivar en una guerra civil y fue condenado en mayo a un año de cárcel por cargos de terrorismo. Las autoridades tunecinas ordenaron el cierre de las oficinas centrales y varias regionales de Ennahda, en lo que fue considerado como una prohibición no oficial del partido. Las medidas contra la oposición fueron denunciadas por entidades de la sociedad civil tunecina y actores internacionales, entre ellos ACNUDH, que exigió la liberación de las personas detenidas arbitrariamente en el país norteafricano. Durante todo el año se produjeron manifestaciones para demandar la excarcelación de personas detenidas y protestar por la deriva antidemocrática, el incremento en el coste de

la vida y el deterioro de la situación socioeconómica, que a finales de año se reflejaba en las carencias de productos básicos y tensiones en algunas zonas del país.

Otra dinámica destacada de la tensión en el país estuvo relacionada con la situación de la población negra migrante, refugiada o solicitante de asilo, que padeció un incremento de la persecución y agresiones, en especial tras unas polémicas declaraciones de Saïed. En febrero, el presidente tunecino aseguró que el flujo de migrantes subsaharianos formaba parte de un "plan criminal" destinado a cambiar la composición demográfica del país y relacionó a la población migrante con violencia y criminalidad.62 Las palabras de Saïed motivaron una reprobación de actores dentro y fuera de Túnez, incluyendo de la UA -que se mostró "preocupada y consternada por la forma y fondo de las declaraciones"-, así como denuncias de racismo por parte de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tras las declaraciones del mandatario hubo una oleada de detenciones –más de 800 migrantes solo en febrero- y se intensificaron los ataques violentos, que se sucedieron en los meses siguientes dejando una treintena de personas muertas y decenas heridas. Los incidentes más violentos se produjeron en Sfax, localidad que fue escenario de protestas contra la población migrante y enfrentamientos hasta finales de año y en la que murieron dos jóvenes subsaharianos (uno en mayo y otro en julio). Paralelamente, se denunciaron masivas expulsiones de migrantes subsaharianos más de 2.000 de 16 nacionalidades- a remotas áreas fronterizas con Argelia y Libia en las que habrían muerto dos y 28 personas, respectivamente, algunas de hambre v sed, según denunció ACNUDH.63 Otras fuentes elevaron a 4.000 la cifra de expulsiones y entre 50 y 70 las víctimas mortales.64 Voces expertas de la ONU instaron a las autoridades tunecinas a detener las deportaciones, recordaron que las expulsiones colectivas están prohibidas por el derecho internacional y alertaron sobre el incremento de los discursos racistas y de odio en el país. En agosto, el secretario general de la ONU exigió que se reubicara a la población deportada a sitios seguros. A pesar de estas controvertidas acciones contra la población migrante, la UE suscribió a mediados de año un memorando de entendimiento con el Gobierno tunecino para que pudiera intensificar los controles fronterizos y frenar los flujos de personas hacia Europa. El acuerdo motivó críticas a la UE por parte de diversas voces, incluyendo desde el Parlamento Europeo y organizaciones como HRW, que subrayaron que el pacto no incluía garantías sobre los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo ni provisiones para evitar que las ayudas europeas llegaran a entidades responsables de vulneraciones.65 En octubre, Saïed

<sup>62.</sup> Lilia Blaise, Tunisia's President Saied claims sub-Saharan migrants threaten country's identity, Le Monde, 23 de febrero de 2023.

<sup>63.</sup> ACNUDH, Türk: Los derechos humanos son un antídoto contra las políticas imperantes de distracción, engaño, indiferencia y represión, 11 de septiembre de 2023.

<sup>64.</sup> Lorenzo Tondo, 'I had to drink my own urine to survive': Africans tell of being forced into the desert at Tunisia border, *The Guardian*, 28 de septiembre de 2023.

<sup>65.</sup> Human Rights Watch, Tunisia, World Report 2024, 2024.

optó por devolver el dinero que había recibido de la UE en el marco de este convenio. En otro ámbito, durante el último trimestre la crisis en Gaza también tuvo eco en Túnez, con un ataque de manifestantes contra una instalación judía (en octubre) y una iniciativa legal para criminalizar la normalización de relaciones con Israel que no prosperó tras ser objetada por Saïed. Según trascendió, el Gobierno tunecino recibió presiones de EEUU para frenar la propuesta. Finalmente, respecto a la acción de grupos armados en el país, en 2023 se registró una actividad limitada.

En diciembre las autoridades informaron de la muerte de tres personas identificadas como "terroristas" en la zona de Kasserine. En mayo se produjo un incidente violento en una sinagoga que dejó cinco personas muertas, pero las autoridades lo atribuyeron a un acto criminal y no lo calificaron como un acto terrorista. Algunos análisis subrayaron el declive de la actividad yihadista en el norte de África, incluyendo en Túnez, en contraste con la mayor actividad reciente de grupos con este tipo de agendas en África subsahariana.66 La rama de AQMI en Túnez no ha reivindicado un ataque desde 2019 y balances indican que las ofensivas de grupos de inspiración yihadista en Túnez -de ISIS, AQMI u otros actores- pasaron de 47 en 2017 a tan solo cuatro en 2022. Ninguno de estos últimos cuatro ataques fue atribuido a ningún grupo. Especialistas advierten, no obstante, que el deterioro de la situación política y socioeconómica en el país podría favorecer una mayor actividad futura de este tipo de organizaciones.

### 2.3.2. América

### América del Norte, Centroamérica y Caribe

Haití	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

### Síntesis:

La grave crisis multidimensional que atraviesa el país –con altos niveles de violencia, movilizaciones masivas, parálisis institucional, fragilidad económica, crisis sociopolítica y humanitaria, control de áreas significativas del país por parte de bandas armadas– se agudizó con el asesinato del Jovenel Moïse en 2021 y el fortalecimiento y alianza de las numerosas bandas armadas que operan en el país. Sin embargo, la fragilidad sociopolítica e institucional del país se remonta a la dictadura de François y Jean-Claude Duvalier (1957-86), el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide en 1991 tras las primeras elecciones democráticas en la historia del país, la deriva autocrática del mismo Aristide tras su reinstauración en el poder (1994)

y su salida abrupta y forzada del país en 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. Desde entonces, el despliegue de varias fuerzas y misiones internacionales –Fuerza Multinacional Provisional (2004), MINUSTAH (2004), MINUJUSTH (2017,) BINUH (2019), Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (2023)—, la aplicación de sanciones y embargos de armas por parte de Naciones Unidas, o el desembolso de cuantiosos recursos por parte de la cooperación internacional no han logrado revertir la inestabilidad política, social y económica, ni reducir los altos niveles de corrupción, pobreza, exclusión social y tasas de delincuencia, ni eliminar el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas del país.

En 2023 se agudizó la crisis política, humanitaria y de seguridad sin precedentes que vive el país tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. En 2023 se registraron 4.789 homicidios, un aumento del 119,4 % respecto al año anterior, con una tasa de 41 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo y un incremento notable respecto del 2022 (18 homicidios cada 100.000 habitantes). El número de secuestros en 2023 se incrementó en un 83% respecto de 2022 y alcanzó los 2.490. Según Naciones Unidas, a finales de año las bandas de crimen organizado -más de 300- controlaban más del 80% de la región metropolitana de la capital, así como las principales rutas de connexión de Puerto Príncipe con el resto del país y algunas infraestructuras clave para la prestación de servicios básicos. Más allá de la región metropolitana de la capital, varios informes señalaron que las bandas de crimen organizado habían expandido notablemete su cobertura territorial, especialmente hacia el valle del Artibonite y las regiones de las ciudades de Gonaives (noroeste) y Cabo Haitiano (norte). A finales de 2023, unos dos millones de personas vivían en áreas controladas por las bandas criminales. La situación de violencia y de enfrentamientos entre las dos principales coaliciones de organizaciones criminales (Ilamadas G9 y GPèp) se incrementó notablemente en la segunda mitad del año, especialmente tras la muerte de uno de los líderes y fundadores de la coalicion G9 a mediados de noviembre. Según ACLED, el número de víctimas mortales por enfrentamientos entre bandas rivales fue de más de 450, mientras que los enfrentamientos entre dichos grupos armados y las fuerzas de seguridad del Estado ascendieron a más de 460. También cabe destacar la proliferación de grupos civiles y milicias de autodefensa en las principales zonas urbanas del país, y especialmente la creación del grupo Bwa Kale en abril de 2023 para prevenir la implantación de las bandas criminales en determinados barrios de la capital. Según datos oficiales, solamente entre abril y septiembre de 2023, se habrían registrado 388 linchamientos de presuntos miembros de bandas criminales. Según ACLED, las muertes reportadas por actos de milicias de autodefensa (alrededor de 300) representaron el 15% de la violencia política en 2023. A modo de ejemplo,

el 24 de abril, grupos civiles de autodefensa mataron al menos a 57 miembros de bandas armadas en varios barrios de Puerto Príncipe.

En cuanto a la situación humanitaria del país, Naciones Unidas advirtió en diciembre que Haití era uno de los nueve países del mundo que enfrentan riesgo de hambruna, con 4,35 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, una de las peores tasas del mundo en proporción a la población del país. El número de personas que necesitaban ayuda humanitaria casi se ha duplicado en los últimos tres años. OCHA también advirtió sobre el riesgo de colapso de los servicios básicos, como la atención sanitaria y la educación. En cuanto a este último aspecto, Naciones Unidas también declaró que los ataques contra escuelas por parte de miembros de pandillas se habían multiplicado por nueve en 2023 y la OCHA estima que un millón de menores no van a la escuela, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento por parte de las pandillas. En cuanto al impacto de la violencia de las bandas en el sistema de

salud, se multiplicaron los ataques contra personal sanitario y hospitales, algunos de los cuales tuvieron que cerrar (como el de Médicos Sin Fronteras en Puerto Príncipe) o no pudieron funcionar por falta de combustible, material médico o personal. ACLED estima que más de 650 civiles murieron a manos de las decenas de bandas armadas que operan en el país. Además, en las zonas controladas por dichas bandas, varias ONG denunciaron la utilización de la violencia sexual contra mujeres y niñas como arma de guerra, intimidación, control

territorial y dominación. Solamente entre enero y agosto de 2023 se denunciaron un total de 3.056 casos de violación, un aumento del 49% en comparación con 2022, aunque la cifra podría ser mucho mayor. Según otras estimaciones, la violencia sexual se incrementó un 80% respecto del año anterior. Según la OACNUDH y la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, otras de las prácticas que padece la población civil en áreas controladas por grupos armados son, además de la violencia sexual, los secuestros a usuarios de transporte públicos, saqueos de casas, granjas, campos y ganado, así como destrucción de canales de riego. Finalmente, cabe destacar que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que en diciembre de 2023 había más de 310.000 personas desplazadas internamente, y que el 60% de las mismas lo había hecho en 2023, especialmente en la región metropolitana de la capital. Además del desplazamiento interno, la situación de violencia y de precariedad económica motivó un incremento sin precedentes en el número de personas que abandonaron el país. Solamente en 2023, se estima que más de 100.000 personas haitianas entraron de forma irregular en EEUU.

Ante tal situación, el 2 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés) con el objetivo principal de apoyar a la Policía Nacional Haitiana a restaurar la seguridad, proteger infraestructuras y rutas de comunicación vitales para el país y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones. Aunque fue el Consejo de Seguridad quien aprobó la resolución que crea la MSS para un período de 12 meses bajo mandato del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, esta no es una misión de dicha organización, sino una coalición ad hoc de países liderada por Kenya y que se financiará a través de contribuciones voluntarias mediante un fondo fiduciario de Naciones Unidas. A petición del Gobierno haitiano, Naciones Unidas Ilevaba más de un año discutiendo formatos de intervención para hacer frente al agravamiento de la situación de seguridad. El secretario general de la ONU había hecho varios llamamientos en ese sentido, y el propio Consejo de Seguridad había establecido previamente en 2022 un régimen de sanciones y un embargo de armas que prorrogó en 2023. Además, paises como EEUU y Canadá habían enviado equipamiento militar a la Policía para

reforzar sus capacidades. A principios de 2024, más de tres meses después de la aprobación de la resolución que creaba a la MSS, todavía había serias dudas sobre algunas cuestiones operativas de la misión. Algunos análisis sostienen que la MSS estará conformada por entre 2.500 y 5.000 efectivos de una docena de países, pero algunos de los países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados o Belice) que habían expresado su compromiso con la misión todavía no habían concretado su contribución a la misma. Incluso la

participación de Kenya, el país que lidera la MSS y en el que la oposición al Gobierno cuestionó tal despliegue de tropas en el extranjero, estaba pendiente de una resolución judicial de la Corte Suprema.

En el plano político, la situación también se deterioró

notablemente en el último trimestre del año. Cabe recordar que en Haití no se han celebrado ningunas elecciones desde el año 2016, que ninguna de las dos Cámaras del Parlamento sesiona desde enero de 2020 (cuando finalizó el mandato de la mayor parte de diputados y senadores) y que el mandato de los últimos 10 senadores finalizó en enero de 2023. El primer ministro de facto, Ariel Henry, asumió el cargo a mediados de 2021 tras el asesinato de Jovenel Moïse sin ser elegido directamente en unos comicios y, desde entonces, ha liderado el Gobierno con el apoyo de una parte significativa de la comunidad internacional pero con una importante oposición política y social interna y unos altos niveles de movilización y protestas. Ante tal situación, a mediados de año CARICOM convocó al Gobierno y a la oposición a una cumbre en Kingston (Jamaica) para tratar de lograr un acuerdo que facilitara una transición más inclusiva y la celebración de unas nuevas elecciones. Una delegación de ex mandatarios de CARICOM facilitó las conversaciones en la segunda mitad del año (con cinco visitas al país), pero al

finalizar el año no solamente no se había logrado ningún acuerdo, sino que varias de las organizaciones políticas y sociales participantes en el diálogo abandonaron las conversaciones, exigieron la renuncia inmediata de Henry y se unieron a los partidos opositores que lideran las protestas antigubernamentales.

Honduras	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

#### Síntesis:

En las últimas décadas Honduras ha tenido una de las tasas de homicidios más altas de la región y del mundo, llegando en 2011 a ser el país con una mayor tasa de homicidios del mundo. Las autoridades hondureñas atribuyen buena parte de los altos niveles de violencia que experimenta el país a las llamadas maras (como la Mara Salvatrucha o la Mara 18), que se han expandido en las dos últimas décadas, y a organizaciones de crimen organizado y de narcotráfico, que se fortalecieron significativamente durante los dos mandatos del ex presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado, juzgado y condenado en EEUU por delitos vinculados al narcotráfico. Paralelamente, el país ha experimentado notables crisis políticas y altos niveles de polarización social, especialmente durante el mandato de Manuel Zelaya (2006-2009) y tras el golpe de Estado de 2009 que le derrocó y provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya. Este, tras retornar al país en 2011, ha liderado una de las principales formaciones políticas del país. En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro decretó el estado de emergencia para hacer frente a los altos niveles de criminalidad del país, provocando numerosas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

En 2023 el país vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política que paralizó el Parlamento durante cuatro meses y agudizó las tensiones entre el Gobierno y la oposición. Además, aunque en Honduras hubo una ligera disminución en el número de homicidios respecto de 2022, el país siguió teniendo una de las tasas de homicidios más altas de América Latina (y del mundo) y varios análisis observaron un incremento de los enfrentamientos entre bandas de crimen organizado y entre éstas y las fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno declaró que en 2023 se habían registrado 3.030 homicidios, 631 menos que en 2022. En línea con la reducción paulatina en la tasa de homicidios que observa el país desde que alcanzara su pico histórico en 2011 (85 cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios en 2023 (31,1) fue inferior a la de los años precedentes (38,1 en 2022; 41,7 en 2021; 38,9 en 2020; y 44,7 en 2019). Sin embargo, tal tasa sigue siendo de las

más altas de América Latina (solamente superada por Ecuador, si no se contempla el Caribe) y del mundo. La presidenta, Xiomara Castro, declaró en varias ocasiones que la reducción en el número de homicidios y otros delitos durante el 2023 se debía principalmente a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, que se fue renovando sucesivamente a lo largo de 2023 y que es aplicable en 17 de los 18 departamentos del país -concretamente en 158 de los 298 municipios del país. El estado de emergencia permite a la Policía Militar apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad pública, permite a las Fuerzas Armadas y de seguridad llevar a cabo detenciones y allanamientos sin orden judicial y suspende algunos derechos constitucionales como la libertad de asociación, reunión y circulación. Según el Gobierno, solamente en el primer mes de aplicación de la medida extraordinaria, se desarticularon 39 bandas de crimen organizado y se detuvo a 652 personas. Castro también señaló que gracias al estado de emergencia había 48 municipios del país (de un total de 298) en los que no se había registrado ningún homicidio.

Sin embargo, la organización ACLED señaló que las medidas desplegadas por el Gobierno habían tenido resultados ambivalentes en los niveles de seguridad del país. Por un lado, con respecto al año anterior, el número de ataques de grupos armados contra población civil se redujo en un 14%, mientras que el número de civiles asesinados en tales ataques también se redujo en un 7%. Por otra parte, según ACLED, entre enero y noviembre de 2023 se incrementaron en un 45% respecto del año anterior los enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y grupos armados, especialmente en los departamentos de San Francisco Morazán y Cortés (donde están Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente), en los que el Gobierno desplegó 20.000 policías en diciembre de 2022 para apoyar las operaciones contra las pandillas. Además, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, en 2023 se incrementó tanto el número de enfrentamientos entre bandas de crimen organizado como el número de homicidios múltiples concretamente, en 2023 se registraron 44 masacres (o homicidios múltiples, con un mínimo de tres víctimas mortales) que provocaron la muerte de 209 personas, un 27% más que en el año anterior. Por tanto, según ACLED, la disminución en el número de muertes violentas afectó significativamente a los homicidios relacionados con la violencia interpersonal y no tanto a los homicidios atribuidos a bandas armadas y actividades de extorsión. En este sentido, en diciembre la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señalo que el 11% de la población hondureña fue víctima de extorsión en 2023, dos puntos porcentuales más que hace un año. Por otra parte, algunos análisis sostienen que las bandas armadas de crimen organizado no solamente incrementaron su actividad en 2023, sino también su alcance territorial. Si bien históricamente estas se habían concentrado en áreas urbanas, recientemente se observa un claro incremento de la criminalidad en áreas rurales. Tal

tendencia podría estar motivada por la mayor presión de las fuerzas de seguridad contra bandas armadas de crimen organizado tras la imposición del estado de emergencia y la creciente militarización de la seguridad pública del país, pero algunos análisis también apuntan a una reorganización de las redes criminales a raíz de la extradición en julio de 2022 del expresidente Juan Orlando Hernández a EEUU por tráfico de drogas y armas.

También cabe destacar que Honduras, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, tuvo la tasa de feminicidios más alta de América Latina (6 cada 100.000 habitantes), más del doble que el segundo país, República Dominicana

(2,9). En diciembre la CEPAL señaló que una mujer era asesinada cada 21 horas. Estos datos son consistentes con los del Centro de Derechos de Muieres, que en 2023 registró la muerte violenta de 386 mujeres. En noviembre, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en 2023 habían sido asesinadas 47 personas LGTBI+, 194 desde el año 2001. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras denunció aue 97 periodistas. comunicadores sociales y propietarios de medios han muerto de manera violenta en Honduras desde 2001. Por su parte, OACNUDH denunció que entre enero y septiembre de 2023 fueron asesinadas 15 personas defensoras de los derechos humanos, la mayoría (más de un 81%) vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y

el medio ambiente, y que en el mismo período se documentaron 297 agresiones contra 267 defensores de derechos humanos y 105 periodistas en Honduras. Además, en 2023 también se registró un incremento sin precedentes en el número de personas refugiadas y migrantes en territorio hondureño, muchas de las cuales sufrieron violencia, extorsión y otras prácticas. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el número de personas refugiadas y migrantes que ingresaron, se registraron y transitaron por Honduras en 2023 se elevó hasta las aproximadamente 545.000, casi el triple que en 2022 y máximo histórico en el país. Según ACNUR, el 38% de estas personas reportó haber sufrido algún tipo de maltrato o abuso durante el viaje desde su país de origen o última residencia hasta Honduras, y el 16% indicó que experimentó maltrato u otra forma de abuso en Honduras. Más de la mitad de estas personas -siendo las cinco nacionalidades más numerosas Venezuela, Cuba, Guinea, Ecuador y Haití- eran mujeres y menores, en consonancia con la tendencia de los últimos años. Por otra parte, según Naciones Unidas, unos 3,2 millones de personas en Honduras necesitan asistencia y ayuda alimentaria.

Durante 2023 varios organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la militarización de la seguridad

pública en Honduras y por las consecuencias de la imposición del estado de emergencia. Amnistía Internacional (AI), por ejemplo, declaró que la estrategia de seguridad que está implementando la presidenta Castro, que según AI está imitando a la impuesta por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, está teniendo un impacto notable en el deterioro de la situación de derechos humanos. Únicamente entre diciembre de 2022, fecha de la declaración del estado de emergencia, y septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos. Algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Policía Nacional y la Policía Militar Ilevaron a cabo

constantes operativos en determinadas zonas con altos niveles de exclusión social contra jóvenes a los que acusan de pertenencia a organización criminal; y también que desde la imposición del estado de emergencia se habían incrementado las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales У las desapariciones forzadas en todo el país. En este sentido, el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, declaró tras visitar Honduras entre finales de mayo y principios de junio que las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo un fenómeno generalizado en el país, constatando una situación de impunidad generalizada en el país debido a graves deficiencias en el sistema judicial, incluyendo demoras procesales injustificadas, nula o limitada

posibilidad de participación de las víctimas en el proceso penal, falta de investigaciones efectivas, negativa u obstrucción de las autoridades investigadoras a aceptar las denuncias de las víctimas, o falta de coordinación entre las fiscalías especializadas. Otros mecanismos expertos de las Naciones Unidas que visitaron Honduras durante el año también expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos. El ACNUDH expresó su seria preocupación por la decisión del Gobierno de transferir el mando y el control del sistema penitenciario a la Policía Militar, anunciada en junio poco después de que un grave episodio de violencia entre bandas en la Prisión Nacional de Mujeres de Tamara provocara la muerte de 46 internas. Desde entonces, la Policía Militar llevó a cabo operaciones en todos los centros penitenciarios del país, en los que se denunciaron distintas formas de maltrato y tortura contra reos a los que se vincula con maras y bandas delictivas.

Finalmente, cabe destacar la crisis política e institucional que se inició en agosto tras la finalización de las sesiones ordinarias del Parlamento y la constitución de una Comisión Permanente del Congreso (conformada por nueve parlamentarios, solamente uno de la oposición), bajo cuyo mandato se designaron a altos cargos, como el fiscal general del Estado. Tal crisis provocó la parálisis del Parlamento durante cuatro meses (de agosto a

En 2023 Honduras vivió un incremento de las protestas sociales y políticas, un alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos vinculadas a la declaración del estado de emergencia en diciembre de 2022, así como una importante crisis política

diciembre), el incremento notable de la tensión política entre el Gobierno y la oposición y un aumento en el número de protestas de corte social y político (alrededor de 800, un número similar al de 2022 pero claramente superior al de 2021 (31) o 2020 (45). Cabe destacar especialmente las movilizaciones antigubernamentales masivas que se produjeron a mediados de agosto y en noviembre, y que estuvieron lideradas por el Bloque de Oposición Ciudadana, conformado por los partidos Nacional, Alianza Patriótica y Salvador de Honduras (PSH) y por organizaciones de la sociedad civil. Algunos análisis destacaron los altos niveles de polarización social y política en los que estaba inmerso el país y advirtieron de que la actual situación guarda algunos paralelismos con la situación política y social que culminó con un golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, marido de la actual presidenta.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado, grupos armados de oposición

#### Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada "guerra al narcotráfico", tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la "guerra contra el narcotráfico" había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca -entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2023 hubo una leve reducción en el número de homicidios respecto del año anterior, pero los niveles de violencia en el país siguieron contándose entre los más altos del mundo y varios análisis constataron un fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –órgano autónomo que agrega los datos de las fiscalías estatales-, en 2023 se registraron 30.253 homicidios, 1.431 menos que en 2022. Casi la mitad de tales homicidios se concentraron en seis estados -en orden de mayor a menor número de homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Según datos del Gobierno (concretamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), en 2023 se registraron 29.675 homicidios, un 4,2% menos que en 2022, siendo el cuarto año consecutivo en el que se produce una disminución en tal cifra (34.696 en 2019; 34.554 en 2020; 33.308 en 2021; y 30.968 en 2022). Según el Gobierno, desde el inicio en diciembre de 2018 del mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, los homicidios se han reducido en un 20%, los secuestros en un 70% y los feminicidios un 39% (un 19% respecto del 2022). El Gobierno también señaló que se habían producido bajadas significativas tanto en el número de delitos del fuero común (como hurtos o robos) como en el de crímenes vinculados a la delincuencia organizada. La tendencia a la disminución en el número de homicidios respecto de años anteriores también fue identificada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, la principal fuente de referencia en esta materia, pero que publica los datos con mayor retraso que las otras dos fuentes citadas anteriormente), según la que en los primeros seis meses de 2023 se produjeron 15.082 homicidios, un 7,6% menos que en 2022, siendo la cifra más baja desde el 2017. Sin embargo, algunas voces cuestionan tales cifras porque no incluyen a las personas halladas en fosas comunes por parte de colectivos de búsqueda ni tampoco a las personas desaparecidas. A pesar de la disminución de homicidios observada en 2023, el número de personas asesinadas en México durante el mandato del actual presidente (166.278, incluyendo 4.760 casos de feminicidio) ya era claramente superior al de sus dos predecesores en el cargo -156.066 bajo el Gobierno de Peña Nieto (2012-18) y 120.613 bajo el de Felipe Calderón (2006-12). Según algunos análisis, al finalizar el sexenio del actual presidente en diciembre de 2024, el número de homicidios en México podría acercarse a los 200.000. Cabe destacar un incremento en la muerte de policías en servicio (412 en 2023, 381 en 2022). Por otra parte, a mediados de diciembre, la ONG Causa en Común publicó un informe en el que señala que en 2023 se produjeron 427 masacres definidas como asesinato de tres o más personas en un mismo hecho violento-, acumulando 2.130 desde el 1 de enero de 2020. Los estados que concentraron mayor número de masacres en 2023 fueron Guanajuato (57), Zacatecas (43) y Guerrero (41). Además, desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023 Causa en Común también registró 22.930 'atrocidades' -eventos que incluyen masacres, hallazgos de fosas clandestinas, trata de personas, tortura, calcinamiento, violencia contra migrantes o asesinato de menores. Solamente en los primeros seis meses del 2023 se registraron 1.453 casos de torturas y 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Por su parte, OACNUDH documentó el asesinato de al menos trece personas defensoras de los derechos humanos en posible relación con su labor durante 2023. En la misma línea, la organización Comité Cerezo México declaró que en 2023 se registró el asesinato de 14 personas defensoras de derechos humanos por parte de agentes del Estado, ascendiendo a un total de 93 durante el mandato del actual presidente –muchos menos que durante el sexenio de Peña Nieto (189),

pero muchos más que en el mandato de Calderón (67). En cuanto al número de periodistas asesinados por el ejercicio de su labor, la ONG Artículo 19 señaló que en 2023 se registraron cinco casos (un claro descenso respecto de los 13 registrados en 2022, 163 desde el año 2000), pero también advirtió que durante el año se produjeron 561 agresiones contra periodistas o medios de comunicación, como ataques armados o secuestros. En la misma línea, la ONG Reporteros Sin Fronteras consideró a México el país con el mayor número de periodistas desaparecidos en activo en el mundo (con 31 de un total de 84 casos, desde 1995 hasta el 1 de diciembre de 2023) y también lamentó que México fuera el segundo país más peligroso para el periodismo en 2023, después de Palestina. Por otra parte, la organización Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señaló que la violencia en el país había provocado el desplazamiento forzado de casi 8.000 personas solamente en los seis

primeros meses del 2023, estimando que el número de personas que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia ascendía a unas 410.000 desde el año 2006.

Además del alto número de homicidios, en 2023 se incrementó significativamente el número de personas desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en 2023

se registraron 12.301 casos, un incremento de un 30% respecto de 2022 y de un 155% en la última década. Desde que se iniciara el mencionado registro a principios de los años sesenta hasta finales de diciembre de 2023, se han contabilizado 113.820 casos, un 42% de las mismas en el sexenio del actual presidente y casi un 10% solamente en 2023. Desde que se inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, se ha registrado la desaparición de más de 100.000 personas. Los estados que concentran un mayor número de casos son Jalisco (14.927), Tamaulipas (12.931), Estado de México (12.212), Veracruz (6.966) y Ciudad de México (6.934), y los dos estados con un mayor número de casos en 2023 fueron Estado de México (2.136) y Ciudad de México (1.808). Además, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señaló que a esta situación se suma una crisis forense, pues a finales de 2023 había más de 52.000 personas sin identificar. En este sentido, durante 2023 se hizo público que se han identificado 5.696 fosas clandestinas en 570 municipios del país (casi una cuarta parte del total) desde el 2007, año en que se empezó a incrementar drásticamente el fenómeno de las fosas comunes. Del total de fosas identificadas, aproximadamente la mitad (2.864, hasta abril de 2023) se han localizado durante el mandato del actual presidente, siendo su primer año de mandato (2019) en el que se identificaron un mayor número de fosas (970). Desde entonces, las localizaciones han ido a la baja, pero ello no implica una disminución de los entierros ilegales, pues podría ser que los lugares de

ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades, o bien que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la Comisión Nacional de Búsqueda, o bien que se haya reducido el número de búsquedas de campo. En noviembre, el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México denunció que solamente en las fosas comunes de la capital hay más de 18.000 personas sin reclamar o sin identificar. En cuanto a las personas desaparecidas, en diciembre de 2023 el Gobierno declaró que solamente un 11% de los casos incluidos en el mencionado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (es decir, 12.377 personas) eran casos confirmados de desaparición, mientras que el resto correspondían a personas localizadas y ubicadas, no había datos suficientes para la identificación o la búsqueda. Este cambio metodológico del Gobierno comportó no solamente las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos, sino también la

Al finalizar el

sexenio del actual

presidente en

diciembre de

2024, el número

de homicidios

en México podría

acercarse a los

200.000

dimisión de la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Poco antes de dicha renuncia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —que investigaba la desaparición en 2014 de 43 personas en Ayotzinapa— anunció su salida del país y criticó bloqueos, presiones, limitaciones y falta de colaboración de las autoridades competentes para esclarecer completamente el caso.

En cuanto al rol de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en los niveles de violencia en el país, el informe Índice de Paz México 2023, elaborado por el Institute for Economics and Peace, señaló que entre 2015 y 2021 el número de homicidios relacionados con el crimen organizado creció de alrededor de 8.000 a más de 23.500 (un incremento de aproximadamente el 190%), mientras que el número de homicidios no relacionados con el crimen organizado se había mantenido relativamente estable, en alrededor de entre 10.000 y 12.500 casos por año. En la misma línea, según la Universidad de Uppsala, el número total de muertes por violencia no estatal aumentó drásticamente entre 2011 y 2021, pasando de 2.657 a 18.783 casos. Según dicha universidad, uno de los factores que explica este incremento tan pronunciado es la gran expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desde 2017 se ha expandido a 28 de los 32 estados del país y que actualmente está asociado a más del 80% de los homicidios provocados por enfrentamientos entre cárteles. En este sentido, cabe destacar el incremento de la rivalidad entre los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que solamente en 2021 (últimos datos disponibles) habría provocado la muerte de 4.890 personas, más de una cuarta parte del total de víctimas mortales asociadas a la violencia entre cárteles. Si en 2015 el número de enfrentamientos en los que participaba alguna de las dos organizaciones suponía el 42% del total de víctimas mortales por violencia entre cárteles, en 2021 tal porcentaje se había elevado

hasta el 95%. En 2023, un equipo de investigación publicó un influyente artículo en la revista Science en el que sostenía que actualmente en México existen unos 150 cárteles, que cuentan con entre 160.000 y 185.000 miembros, unos 60.000 más que en 2012. El cartel más numeroso sería el CJNG (un 20% del total aproximadamente), seguido del de Sinaloa (un 10%) y la Familia Michoacana. Según este artículo, que tuvo una gran repercusión, los cárteles de la droga son la quinta fuente de empleo del país y necesitan reclutar a unas 19.000 personas cada año para sustituir a aquellas que son detenidas (unas 6.000 al año) o que mueren (un 17% del total de personas reclutadas). Estos datos están en sintonía con las declaraciones que hizo a mediados de año la directora de la agencia de antinarcóticos de EEUU (DEA), según la cual el CJNG y el Cártel de Sinaloa tendrían unos 45.000 miembros y colaboradores en alrededor de 100 países del mundo. Según algunos analistas, la mayor parte de los cárteles cada vez cuentan con un armamento más sofisticado. A mediados de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que desde 2021 hasta marzo de 2023 se habían decomisado 23 drones presuntamente pertenecientes a cárteles de la droga que iban a ser usados en ataques con explosivos. A modo de ejemplo, a principios de enero de 2024, unas 30 personas murieron en el estado de Guerrero después de que el cártel La Familia Michoacana atacara a la organización delictiva rival Los Taclos con vehículos aéreos no tripulados cargados con explosivos. En 2023, uno de los eventos más significativos en la lucha contra la delincuencia organizada fue la detención en enero y posterior extradición a EEUU de Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, hijo de uno de los fundadores del mismo ("Chapo" Guzmán). El operativo de captura en el nordeste del estado de Sinaloa provocó la muerte de 29 personas (incluyendo diez militares) y la quema de vehículos y edificios en la zona. Dos días antes de la detención de Guzmán, 17 personas (incluyendo diez funcionarios de prisiones) murieron tras el motín en un penal de Ciudad Juárez que provocó la huida de 30 personas, incluyendo al líder del grupo delictivo Los Mexicles –una organización que varios análisis vinculan con el Cártel de Sinaloa. Por otra parte, en varios momentos del año, el Gobierno autorizó el despliegue de efectivos militares y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas (tanto en la zona de San Cristóbal de las Casas como en la región fronteriza de Comalapa) para hacer frente al incremento de los enfrentamientos entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y del CJNG. En este sentido, el presidente López Obrador declaró que buena parte de la reducción en el número de homicidios que se ha registrado en los últimos años obedece principalmente a la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado y, muy especialmente, al rol desempeñado por la Guardia Nacional. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política criticaron nuevamente una creciente militarización de las tareas de seguridad pública. En este sentido, en marzo el Senado creó una comisión para supervisar y controlar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y en abril la

Corte Suprema declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa.

Panamá	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

#### Síntesis:

Las protestas masivas de 2023 tienen que ver con la actividad de la empresa canadiense First Quantum Minerals -y su subsidiaria Minera Panamá- en una mina a cielo abierto de cobre, oro, plata y otros minerales de unas 13.600 hectáreas -una de las mayores del mundo, según algunos análisis—, situada en la provincia de Colón, a escasos quilómetros del Mar Caribe, en pleno Corredor Biológico Mesoamericano. En 1997, el Gobierno panameño otorgó a la empresa minera Petaquilla Minerals la explotación del mencionado yacimiento, provocando desde el inicio las protestas por el impacto medioambiental de la misma y la interposición de recursos de inconstitucionalidad. En 2017, pocos meses después de que el Gobierno de Juan Carlos Varela prorrogara la extensión del contrato por otros 20 años, la concesión fue declarada inconstitucional, pero el fallo no fue publicado hasta finales de 2021, de modo que la empresa pudo seguir operando aún sin contar con un contrato legal vigente. A principios de 2022 el Gobierno de Cortizo y la empresa iniciaron negociaciones para la ampliación del contrato, pero ante la falta de acuerdo y las acusaciones de incumplimiento de compromisos del Gobierno a First Quantum Mineral hizo que en diciembre de 2022 el Ejecutivo ordenara la suspensión de las actividades de la empresa. Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes continuaron en los primeros meses de 2023.

En Panamá se vivieron las protestas más importantes de las últimas décadas, en las que cinco personas murieron, decenas resultaron heridas y más de 1.000 fueron detenidas. Además, los bloqueos de carreteras en varias partes del país, incluyendo la carretera Panamericana – que conecta el país de norte a sur y con el resto del istmo centroamericano- provocaron el desabastecimiento de productos básicos en varias partes del país. Las protestas se iniciaron en octubre de 2023, poco después de que el Parlamento aprobara y el presidente promulgara por la vía rápida una ley que prolongaba la extensión de la concesión de explotación minera a First Quantum Minerals por otros 20 años -con opción de renovación por otros 20-, alegando que la actividad de la empresa suponía el 5% del PIB del país (Panamá es el 14° exportador de cobre a nivel internacional). Tras conocerse la decisión, decenas de miles de personas se manifestaron ininterrumpidamente en la capital y en varias partes del país para protestar contra la mencionada extensión de la concesión, por entender que esta comporta graves daños medioambientales en una región de una especial importancia para la biodiversidad del país, que atenta contra la soberanía nacional y que lesiona los intereses económicos del Estado (por considerarse que la tributación de la

empresa es insuficiente). Las movilizaciones masivas durante varios días comportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los que decenas de personas resultaron heridas y en los que se produjeron importantes desperfectos materiales, así como numerosos cortes de carreteras en todo el país. Ante esta situación, a principios de noviembre el Gobierno declaró una moratoria a la actividad minera en el país -excluyendo las concesiones ya aprobadas-, lo que provocó una cierta disminución en la intensidad de las protestas. Además, el Gobierno también anunció su intención de conocer el fallo de la Corte Suprema sobre los recursos de inconstitucionalidad de la extensión del contrato para evitar que una derogación del mismo pudiera comportar penalizaciones millonarias en un eventual proceso judicial o de arbitraje con la empresa. A finales de noviembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantiun Minerals (y su filial Minera Panamá) y, poco después, el Estado anunció la finalización progresiva y ordenada de las actividades de la empresa y la renuncia del Ministro de Comercio e Industrias.

## América del Sur

Ecuador	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos de crimen organizado

#### Síntesis:

En los últimos años, Ecuador ha experimentado uno de los incrementos de la violencia más pronunciados de toda América Latina. En 2022, el Gobierno sostenía que desde el año 2017 la tasa de homicidios se ha multiplicado casi por cinco, y que más del 80% de los asesinatos en el país están vinculados al narcotráfico. Si bien Ecuador había sido históricamente un lugar de tránsito de drogas ilícitas, algunos análisis sostienen que el país cada vez juega un rol más prominente en la cadena de suministro de drogas a escala internacional, especialmente de cocaína, con una mayor participación en el almacenaje, el procesamiento, la producción y la distribución internacional de estupefacientes, muy principalmente a través de las rutas del Pacífico -la ciudad costeña de Guayaquil concentra casi un porcentaje importante de los homicidios- y de la Amazonía, gracias a su frontera con Brasil. Tal contexto ha dado lugar a un incremento sustancial de los enfrentamientos por el control de lugares y rutas estratégicas entre grupos locales de crimen organizados (como Los Lobos, Los Choneros o Los Lagartos), cárteles mexicanos (especialmente el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), facciones disidentes de las FARC (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Urías Rondón) u organizaciones criminales internacionales.

En 2023 Ecuador enfrentó una grave crisis política, que provocó la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones anticipadas, así como un incremento sin precedentes en los niveles de violencia,

motivando la imposición del estado de emergencia en varios momentos del año. Según datos oficiales, en 2023 se registraron 7.878 muertes violentas, con una tasa de 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de América (exceptuando el Caribe). Durante el mandato de Lenin Moreno (2017-2021), la tasa de homicidios se mantuvo entre seis y ocho homicidios cada 100.000 habitantes, pero en 2021, fecha en la que asumió la presidencia Guillermo Lasso, dicha tasa creció hasta los 14 y posteriormente escaló hasta los 25,9 en 2022. Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo sumaron 86,44% de los homicidios de 2023, regiones que varios análisis consideran clave en las cadenas de valor del narcotráfico y en el tráfico internacional de armas. Destaca especialmente la provincia del Guayas (en la que se concentraron casi la mitad de los homicidios intencionales del país) y, en concreto, su capital, Guayaquil, que alberga barrios como Nueva Prosperina, con una tasa de 114 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones denunciaron una tasa de impunidad de más del 91%. Según la Policía, el 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos o Tiguerones- que buscan obtener el control de la distribución y exportación de drogas, principalmente de cocaína. Ante esta situación, en abril el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró oficialmente como terroristas a los Grupos de Delincuencia Organizada que mantienen vínculos con cárteles colombianos y mexicanos (especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación) y con otras organizaciones de crimen organizado internacionales. Tal medida permite la movilización de las Fuerzas Armadas sin la previa declaración del estado de excepción y podría afectar, según algunos medios, a unas 20 organizaciones delictivas. Al día siguiente de tal declaración, 10 personas fueron asesinadas en Guayaguil en un ataque armado que el Estado vinculó a la lucha por el control territorial entre bandas. Además de esta medida, el Gobierno también declaró el estado de excepción en los meses de julio y agosto (prorrogados posteriormente) para hacer frente a la crisis de violencia que padece el país.

En consonancia con el incremento de la violencia que se observa en el sistema penitenciario desde el año 2020 (se estima que alrededor de 500 personas han sido asesinadas en dicho periodo), en 2023 también se produjeron varios episodios de violencia importantes en algunos centros penales. En julio, 31 reos murieron y otros 14 resultaron heridos durante los enfrentamientos entre bandas rivales en la cárcel del Litoral (en Guayaquil). Dos días más tarde, después de que reos de 13 penales del país iniciaran una huelga de hambre y tomaran como rehenes a varios funcionarios de prisiones, el presidente Lasso decretó un estado de emergencia en todo el sistema penitenciario del país y autorizó el despliegue de 2.700 militares para retomar el control del centro penal del Litoral. En la misma prisión, en abril, 18 internos y tres funcionarios de prisiones habían muerto en otro episodio de violencia entre bandas rivales. Según el Gobierno, en 2023 se registraron 67 muertes violentas en las cárceles del país.

Además de los altos niveles de violencia vinculada al crimen organizado y en el seno del sistema penitenciario, durante el año se registró un incremento drástico de la violencia política, hasta el punto de que el Observatorio

Ciudadano de Violencia Política declaró que los comicios presidenciales del mes de agosto habían sido el proceso electoral más violento de la historia del país. Según dicho centro de investigación, en 2023 se registraron 88 casos de violencia política, el 86% de los cuales contra líderes políticos (candidatos y cargos públicos) y el 14% restante contra sus familiares y personas cercanas. El informe atribuyó la mayoría de tales episodios de grupos de delincuencia organizada, especialmente relacionados con el narcotráfico. Los asesinatos que tuvieron un mayor impacto social y político fueron los del alcalde de Manta (la tercera ciudad del país, situada en la provincia de Manabí), a finales de julio, y el del candidato presidencial Fernando Villavicencio a mediados de agosto, en Quito. En el primer caso, el presidente Lasso decretó el estado de emergencia en las

provincias de Manabí y Los Ríos y en la ciudad de Durán (Guayas), así como el toque de queda en Manta. Dicho toque de queda coincidió con el estado de emergencia decretado en el sistema penal para que las autoridades recuperaran el control sobre las cárceles del país. En el caso del asesinato de Villavicencio a mediados de agosto, a diez días de la celebración de las elecciones, también motivó el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional y la imposición del estado de excepción, que preveía, entre otras cuestiones, que la Policía y Fuerzas Armadas pudieran hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público y seguridad ciudadana o bien realizar inspecciones y requisas que tuvieran como objetivo el hallazgo de armas y sustancias ilícitas. Además, el Gobierno ordenó un macrooperativo militar y policial de unos 4.000 efectivos para proceder al traslado a un centro de máxima seguridad de José Adolfo "Fito" Macías, líder de Los Choneros –una de bandas criminales más poderosas del país- y que había proferido amenazas contra Villavicencio. Tales medidas no lograron poner fin a los motines ni los episodios de violencia en las cárceles del país. A modo de ejemplo, a finales de agosto, poco después del asesinato de Villavicencio y de la celebración de las elecciones presidenciales, 50 guardias carcelarios y siete policías fueron retenidos forzosamente durante varios motines en seis penales del país como respuesta de la banda criminal Los Lobos contra una intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga para requisar armas y también en protesta contra una serie de traslados de presos.

En paralelo al incremento sin precedentes en los niveles de violencia, en 2023 el país también vivió una importante crisis política. A mediados de mayo, al día siguiente de que la Asamblea Nacional iniciara un juicio político contra Guillermo Lasso por acusaciones de una trama de corrupción, este firmó un decreto en el que, alegando una situación de conmoción interna y de grave crisis política, se disolvía el Parlamento y se

convocaban unas elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias, para que tanto Lasso como la Asamblea Nacional fueron elegidos. Además, Lasso ordenó a las Fuerzas Armadas que rodearan la sede del Parlamento, de modo que este no pudiera seguir sesionando ni proseguir el juicio político recientemente iniciado. Dicha decisión provocó algunas protestas en los días inmediatamente posteriores, así como las críticas de numerosos partidos de la oposición y organizaciones sociales, que consideraron que la disolución del Parlamento solamente buscaba evitar enjuiciamiento del presidente y evidenciaba la involución democrática del país. Algunas organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas

mergencia en varios
momentos del año

del Ecuador (Conaie), que históricamente
ha demostrado una gran capacidad de
movilización, consideraron que la decisión
de Lasso era un autogolpe de Estado encubierto y abría
la Dicho la puerta a un escenario de dictadura. Finalmente,
ergencia en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de
agosto (primera vuelta) y el 15 de octubre (segunda
vuelta) en el marco del estado de excepción, Daniel
Noboa se impuso por un estrecho margen a la candidata
del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.
En las elecciones legislativas, se impuso el Movimiento
retado de
Movimiento Construye (formación de la que Fernando

Perú	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (Militarizado Partido Comunista del Perú), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)

Villavicencio era su candidato presidencial).

#### Síntesis:

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el

Congreso y acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso, posteriormente redenominado como Militarizado Partido Comunista del Perú, se han incrementado significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones, se ha negado a mantener ningún tipo de diálogo con la organización y ha intensificado la lucha política y legal contra su brazo político, Movadef. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política económica de los sucesivos gobiernos y contra la actividad de empresas extractivas.

Perú siguió sumido en una de las mayores crisis políticas de la historia reciente el país, motivada principalmente por las protestas masivas antigubernamentales que se registraron entre enero y marzo en varias partes del país, en las que unas 50 personas murieron, más de 700 resultaron heridas y cientos más fueron detenidas. Tales protestas, especialmente intensas en Quito y en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, fueron la continuación de las que se habían producido desde principios de diciembre de 2022 tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, acusado de querer perpetrar un autogolpe

de Estado. Algunas de las demandas que exigían las personas manifestantes eran la dimisión de la presidenta Dina Boluarte –en tanto que vicepresidenta del país, asumió la presidencia tras la destitución de Castillo–el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la conformación de un Gobierno transitorio para que pueda adelantar las elecciones, el fin de la represión de las protestas por parte de la Policía y, también por parte de algunos sectores, la liberación del

ex presidente Castillo. Desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 hasta el 20 de febrero de 2023 la OACNUDH registró 1.327 protestas a nivel nacional, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y 60 marchas por la paz. Según las cifras reconocidas por la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) o Naciones Unidas, 77 personas murieron desde el inicio de las protestas en diciembre, 70 de las cuales civiles, un policía y seis militares. De entre las víctimas mortales civiles, 49 murieron por la represión estatal y en el marco de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y 11 durante el bloqueo de carreteras. Además, el número de personas heridas oscilaría alrededor de las 1.880. El episodio de violencia más letal se produjo el 9 de enero de 2023 en Juliaca, cuando, 18 personas manifestantes y transeúntes murieron por impactos de bala y perdigones y, además, según algunos medios, un policía murió por quemaduras. Naciones Unidas, la OEA y organizaciones como Human Rights Watch o Al

denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la contención de las protestas, e instaron al Gobierno a iniciar un diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas por la violencia, adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública, iniciar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y agilizar los procesos judiciales para que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia. En el mes de mayo, la CIDH concluyó que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza y que algunas de las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, Al denunció que la respuesta del Estado ante las protestas tuvo un sesgo racista, pues el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de las protestas fueron de la población indígena y campesina. En la misma línea, el relator especial de las ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, denunció que la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones y lamentó que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas.

En un contexto de condenas nacionales e internacionales por el uso excesivo de la fuerza, el 11 de enero la Fiscalía inició una investigación preliminar por los presuntos

delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola, los ministros de Interior y Defensa y dos exministros. Boluarte se negó a dimitir y a convocar una asamblea constituyente y amplió a Lima y a varias regiones del país el estado de emergencia que se había decretado en diciembre. Boluarte criticó la violencia ejercida por determinados grupos de manifestantes, denunciando que algunas de las protestas pretendían romper

y sabotear el estado de derecho y que algunos de los grupos que habían alentado las protestas tenían vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Sin embargo, días más tarde, instó a una tregua nacional a las organizaciones convocantes, pidió perdón a las familias de las víctimas mortales de las protestas y solicitó al Congreso que adelantara las elecciones al 2023 (en octubre la primera vuelta y en diciembre la segunda), petición posteriormente rechazada por el Parlamento, de modo que en principio Boluarte debería mantenerse en el cargo hasta 2026. Además, la presidenta anunció su intención de reformar la Constitución de 1993 promulgada durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori. Sin embargo, tales anuncios no lograron poner fin a las movilizaciones, y fueron seguidos por graves enfrentamientos entre policías y manifestantes en Lima. Finalmente, las protestas remitieron notablemente desde principios de marzo, pero volvieron a reactivarse a mediados de julio, con motivaciones parecidas a las de diciembre de 2022 y principios de 2023, pero con mayor énfasis en la renuncia de la presidenta. Según la

Perú siguió sumido en una de sus mayores crisis de la historia reciente, con protestas masivas antigubernamentales en las que unas 50 personas murieron

Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64. En Lima se registraron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y cientos de personas que intentaban entrar en el Congreso. A finales de julio, se registró una nueva oleada de protestas en todo el país -según la Defensoría del Pueblo, manifestaciones en 18 provincias y 14 puntos de bloqueo de carreteras. Ante tal situación, Boluarte ofreció un pacto de reconciliación nacional, garantizó que se haría justicia con las víctimas de la represión estatal y pidió perdón a las familias de las víctimas. Boluarte también pidió al Congreso la delegación de facultades legislativas al poder Ejecutivo por el plazo de 120 días para poder enfrentar la delincuencia y la criminalidad. En diciembre, con motivo del primer aniversario de la detención del expresidente Castillo, la Defensoría del Pueblo señaló que se registraron movilizaciones en 20 provincias de 15 de las 25 regiones de Perú, pero el alcance de las mismas fue claramente inferior a las de principios y mediados de año y no se registraron incidentes de gravedad.

Por otra parte, durante el año se registraron algunos enfrentamientos entre efectivos policiales y militares y miembros del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), nombre con el que se autodenomina la facción remanente de Sendero Luminoso en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Cabe destacar la muerte de siete policías a mediados de febrero tras una emboscada del grupo en Cuzco (VRAEM) liderada por el llamado Camarada Carlos, que forma parte de la primera generación de combatientes del grupo y que, según algunos medios, habría participado en la masacre de 16 personas en el departamento de Junín en mayo de 2021, a escasos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pocos días más tarde, otros dos militares murieron en otro enfrentamiento en Vizcatán del Ene (provincia de Satipo, departamento de Junín). En septiembre, cuatro soldados y dos miembros del MPCP murieron y otros tres militares resultaron heridos en un enfrentamiento en el VRAEM, concretamente en la provincia de Huanta (departamento de Ayacucho). En noviembre, el ministro del Interior declaró haber dado uno de los golpes más duros contra el MPCP de los últimos años, tras la detención de cuatro de los dirigentes del grupo, incluyendo al hijo del líder de MPCP, Víctor Quispe Palomino.

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↓</b>
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

## Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

Venezuela nο se registraron protestas antigubernamentales masivas y continuadas, como sí había sucedido en años anteriores, y el Gobierno y la parte mayoritaria de la oposición alcanzaron un importante acuerdo político en el mes de octubre, pero el país siguió registrando altos niveles de homicidios y movilizaciones sociales, denuncias sobre la precaria situación humanitaria y de derechos humanos y críticas de formaciones políticas y organismos internacionales sobre los obstáculos impuestos por el Gobierno para avanzar en una reforma política que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales. Aunque no constan datos oficiales sobre el número de homicidios, la organización Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) señaló que en 2023 se registraron 6.973 muertes violentas, un 25% menos que en 2022 (9.367) y 2021 (9.447) y un 75% menos respecto del año en el que se alcanzó el máximo de muertes violentas (28.475 en 2016). A pesar de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 (26,8) fue claramente inferior a las de 2021 (34,9) y 2022 (35,3), siguió siendo de las más altas del continente, solamente superada por las de Ecuador y Honduras. Además, las cifras del OVV no incluyen las desapariciones, que en 2023 (1.443) se incrementaron ligeramente respecto de las del año anterior (1.370). A pesar de la disminución en el número de homicidios, varios análisis advirtieron sobre el creciente rol de los grupos de delincuencia organizada en los últimos años. En este sentido, el Índice 2023 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional situó a Venezuela en el octavo lugar entre los países del continente con mayor nivel de criminalidad organizada y en el último lugar en cuanto a la capacidad estatal para combatirla. Según el mencionado informe, actualmente los grupos armados de crimen organizado están presentes en, al menos, 22 de los 24 estados del país, controlando los mercados de narcotráfico, oro y trata de personas, entre otras actividades ilícitas, y ejerciendo mayores niveles de control social y territorial en las zonas fronterizas. Ante tal situación, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que en 2023 se había desmantelado a 1.844 organizaciones de crimen organizado y que el número de los efectivos policiales se incrementó en un 12%,

pasando de 160.000 a 179.000. Además, a mediados de año el Gobierno declaró que en 2023 los casos de secuestro se redujeron en un 54,2 % con relación al 2022.

En cuanto a la situación humanitaria y migratoria, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) - conformada entre otras por ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- señaló que en 2023 más de medio millón de personas se vieron forzadas a abandonar Venezuela, aumentando de 7.180.000 en enero de 2023 a 7.720.000 en noviembre de 2023. Sin embargo, según algunas fuentes la cifra es incluso superior. Concretamente, el Observatorio de la Diáspora Venezolana declaró que la cifra total de personas migrantes venezolanas era de unos 8,5 millones distribuidas en 90 países-, de modo que, en el último cuarto de siglo, Venezuela podría haber experimentado una reducción poblacional superior al 25%. Según R4V, el 85% (6.540.000) de la diáspora venezolana se concentra en países de la región -principalmente en Colombia (44%), Perú (23%), Brasil (8%), Ecuador

El Observatorio de la

Diáspora Venezolana

declaró que la cifra

total de personas

migrantes venezolanas

era de unos 8,5

millones

(7%) y Chile (7%)-, el 90% si se incluye EEUU. En este sentido, la OIM declaró que en 2023 unos cuatro millones de personas venezolanas en la región de América Latina tenía necesidades humanitarias y de protección urgentes. Además, a finales de 2023 había más de un millón de personas venezolanas solicitantes de asilo en el mundo y más de 230.000 personas venezolanas reconocidas como refugiadas. En cuanto a la situación de precariedad

económica, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que el 88% de las protestas a nivel nacional reivindicaban bienes y servicios básicos como el acceso a agua, electricidad o combustible, o servicios de salud y pensiones suficientes.

En cuanto a las movilizaciones y protestas sociales y políticas, según el OVCS en 2023 se registraron 6.956 protestas, la mayor parte de las cuales (5.583) relacionadas con derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, y muy específicamente por reivindicaciones laborales (4.100), mientras que las protestas restantes (1.373) estuvieron vinculadas con derechos civiles y políticos. El número de protestas en Venezuela fue ligeramente inferior al del año pasado (7.032 protestas), y sensiblemente superior al del 2021 (8.560 manifestaciones). En el plano político, a pesar de los avances que se produjeron en las negociaciones entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria, que cuentan con la facilitación de Noruega, en varios momentos del año se produjeron acusaciones cruzadas entre las partes. El momento de máxima tensión entre las partes se produjo a finales de octubre, coincidiendo con la celebración de las primarias de la oposición para elegir a la persona que concurrirá a las elecciones presidenciales de 2024. Según la oposición, unos 2,4 millones de personas participaron en dicho proceso, en el que María Corina Machado - inhabilitada en 2015 por

15 años para concurrir a cargos públicos- logró el 93% de los votos. Sin embargo, el Gobierno consideró que el proceso había sido fraudulento y, a finales de octubre, la Corte Suprema invalidó los resultados de las primarias. Por su parte, EEUU advirtió sobre la posibilidad de revertir la flexibilización de sanciones anunciada pocos días antes si antes del 30 de noviembre no se retiraban las inhabilitaciones contra personas candidatas de la oposición. Más tarde, en diciembre, dos días después del referéndum sobre el Esequibo organizado por el Gobierno, el fiscal general de Venezuela dictó una orden de arresto contra 13 personas (incluyendo a destacados líderes en el extranjero, como Juan Guaidó, Julio Borges o Leopoldo López, y también a tres personas del equipo de Machado) acusados de traición a la patria por participar en una conspiración nacional e internacional para boicotear el referéndum. Otro de los momentos del año de incremento de la tensión entre Gobierno y oposición fue la renovación por parte de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional Electoral. A pesar de que éste ya estaba conformado previamente por una clara mayoría de personas consideradas

cercanas al Gobierno, la oposición criticó

tal decisión como un intento por parte de Caracas de controlar aún más el proceso electoral, mientras que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) expresaron su preocupación sobre el impacto que tal medida podría tener en la celebración de unas elecciones libres y competitivas.

Al igual que HRW, en 2023 hubo otras organizaciones de derechos humanos que denunciaron la situación de derechos humanos en el país. Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón estiman que, en la actualidad, hay entre 286 y 319 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) señaló que persistía el uso de las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una estrategia de represión del Gobierno y como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población. En su momento, Al señaló que tales acciones -que incluyen detenciones sin órdenes judiciales; períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto; imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad; limitaciones al acceso al derecho a la defensa; o el uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes- podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Según AI, el objetivo de las detenciones arbitrarias, dirigido contra opositores políticos, pero también contra personas defensoras de derechos humanos o sindicalistas, es neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del Gobierno. En la misma línea, en septiembre de 2023 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), señaló que, si bien en los últimos tiempos ha habido una disminución cuantitativa en la comisión de violaciones de derechos humanos y de que estas se llevan a cabo de manera más selectiva contra determinados colectivos —como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos—, en Venezuela sigue habiendo numerosos casos de violaciones graves de los derechos humanos y no se ha desmantelado la estructura represiva del Estado. Además, según la MIIV, recientemente el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos de menoscabar el espacio cívico y democrático, incrementando su control sobre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos y utilizando las amenazas, la vigilancia y el hostigamiento, la difamación o la censura para silenciar y desalentar a la oposición al Gobierno.

Venezuela – Guyana	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Venezuela, Guyana

#### Síntesis:

La tensión entre Venezuela y Guyana por la Guayana Eseguiba (o Eseguibo) --un territorio de casi 160.000 km2 rico en minerales y otros recursos naturales, controlado y administrado formalmente por Guyana—se remonta la falta de acuerdo a finales del siglo XIX sobre la delimitación fronteriza entre Venezuela y el Imperio Británico. Mientras que Guyana, ex colonia británica, sostiene que el un Laudo Arbitral emitido en París en 1899 adjudicó el territorio en disputa al Imperio Británico, Venezuela no reconoció tal fallo y sustenta su posición en Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela y Reino Unido (en consulta con el Gobierno de Guyana, que obtuvo la independencia de Reino Unido ese mismo año), por el que las partes se comprometían a resolver el contencioso mediante negociaciones amistosas. La tensión se incrementó significativamente después de que en 2020 la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para resolver v dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión --v Venezuela rechazara la jurisdicción de la CIJ en la materia--, de que Guyana concediera a varias empresas la exploración de yacimientos de hidrocarburos en aguas en disputa con Venezuela y de que, en diciembre de 2023, Caracas celebrara un referéndum sobre la soberanía del Eseguibo.

La decisión del Gobierno de Venezuela de convocar un referéndum sobre la anexión del Eseguibo (un territorio históricamente revindicado por Venezuela pero que está formalmente bajo el control efectivo y administración del Gobierno de Guyana) y de poner en práctica acciones para hacer efectivos los resultados de la consulta provocaron una importante crisis política y diplomática en la región y una importante movilización militar por parte de varios países. Según Caracas, la participación en el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre fue de alrededor del 50% y el 95% de las personas que votaron su apoyo a las cinco preguntas planteadas en el referéndum acerca, entre otras, del no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba; la creación del estado Guayana Esequiba,

el otorgamiento de la ciudadanía a la población de ese territorio y la incorporación de dicho estado en el mapa del territorio venezolano; o la oposición a la pretensión de Guyana de disponer de un mar pendiente por delimitar. Sin embargo, varios análisis cuestionaron las cifras de participación ofrecidas por el Gobierno y señalaron que ni siguiera Hugo Chávez en los momentos de máxima popularidad obtuvo más de 10,4 millones de votos. Pocos días antes, la CIJ había emitido un fallo instando a Venezuela a abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa, aunque sin prohibir la celebración del referéndum, tal y como solicitaba previamente el Gobierno de Guyana por considerar que el objetivo de ese referéndum es preparar el terreno para la anexión a Venezuela del Eseguibo. El fallo de la CIJ también instó a ambas partes a abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la controversia o hacerla más difícil de resolver. La CIJ fijó para abril de 2024 la audiencia en la que Venezuela debería argumentar y documentar su posición para una resolución de fondo de la controversia (que según algunos análisis podría tardar años), pero a finales de 2024 Venezuela seguía rechazando firmemente la jurisdicción y competencia de la CIJ para dirimir el contencioso.

Dos días después de la celebración del referéndum, Nicolás Maduro anunció la incorporación del Esequibo al mapa oficial de Venezuela y la activación de un plan de atención "humana" y "social" a la población de la Guayana Esequiba, con el inicio de un censo, la expedición de cédulas de identidad y la apertura de una oficina del Servicio Administrativo de Identificación y Migración (SAIME) en la región. Maduro también pidió al Parlamento que empezara el trámite legislativo para convertir a la Guayana Esequiba en un nuevo estado de la república. Además, también anunció que la localidad de Tumeremo (estado Bolívar, fronterizo con el Esequibo) será provisionalmente la sede de la Zona de Defensa Integral (ZODI) y la sede político-administrativa del nuevo estado, del que el mayor general Alexis Rodríguez Cabello fue nombrado como autoridad única. Además, Maduro ordenó la creación de la división Petróleos de Venezuela Esequibo (PDVSA) y Corporación Venezolana de Guayana Esequibo (CVG), la realización de un mapa de exploración y explotación de los recursos en la región y la concesión de licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en la Guayana Esequiba. En la misma línea, concedió un período de tres meses para que las compañías petroleras autorizadas por Guyana para operar en aguas en disputa pusieran fin a sus actividades.

Además de estas decisiones, el Gobierno de Venezuela envió un contingente militar hasta Puerto Barima, en el estado de Delta Amacuro, en la frontera atlántica de Venezuela, muy cerca del Esequibo. Al día siguiente, EEUU llevó a cabo maniobras aéreas con la Fuerza de Defensa de Guyana y declaró su disposición a cooperar para mejorar las capacidades de defensa de Guyana. A principios de enero, el subsecretario de Defensa de

EEUU visitó Guyana, provocando las especulaciones de Venezuela -negadas por Georgetown-- acerca de la instalación de una base militar estadounidense en la región. Por otra parte, los Gobiernos de Brasil y Surinam movilizaron a sus Ejércitos en sus respectivas fronteras con Guyana. Aunque ambos países mostraron su solidaridad con la posición de Guyana, cabe destacar que la frontera entre Brasil y Guyana fue delimitada a través de un tratado de arbitraje y que Guyana y Surinam mantienen un contencioso territorial fronterizo por la región de Tigri, ocupada de facto y administrada por Guyana. En este sentido, algunos partidos en Surinam lamentaron que Guyana no había cumplido con sus compromisos hechos en los años sesenta de desmilitarizar la región de Tigri y habían exigido al Gobierno elevar una protesta diplomática ante la Corte Internacional de Justicia, CARICOM y Naciones Unidas. Además, la oposición expresó su deseo de llevar a cabo un referéndum parecido al que llevó Venezuela en diciembre e incorporar oficialmente la región de Tigri al mapa de Surinam. También en el plano militar, la tensión escaló a finales de diciembre cuando el Reino Unido, antigua potencia colonial en la región, envió un buque de guerra a las costas de Guyana. Venezuela consideró esta acción como una provocación hostil extremadamente grave, instó a Guyana a no involucrar a potencias militares en el contencioso territorial e inició ejercicios militares de una magnitud considerable en el Atlántico. En tal contexto, el Gobierno de Brasil expresó su preocupación por la dinámica de escalada militar en la región y señaló que las demostraciones militares en favor de cualquiera de las partes en conflicto debían ser evitadas y eran contrarias al acuerdo que alcanzaron Maduro y el presidente de Guyana en la cumbre bilateral organizadas por la CELAC, CARICOM y el Gobierno brasileño a mediados de diciembre en San Vicente y las Granadinas. Aunque fue en el mes de diciembre cuando se produjo la escalada de la situación diplomática y militar, ya en el último trimestre del año había habido un importante incremento de la tensión entre Venezuela y Guyana. En octubre, el Gobierno de Guyana denunció la movilización de tropas y la realización de maniobras militares de las Fuerzas Armadas venezolanas cerca de su frontera común, comunicó tal preocupación a CARICOM y a varios de sus aliados internacionales y puso a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta. Poco antes, el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria (que mantienen una negociación con la facilitación de Noruega) habían acordado en Barbados una defensa conjunta de la Guayana Esequiba. En este sentido, algunos líderes opositores (como los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales) se manifestaron a favor de la celebración del referéndum, mientras que otros, entre ellos Juan Guaidó o la principal líder opositora María Corina Machado se mostraron en contra de tal iniciativa. Machado, de hecho, solicitó la suspensión del referéndum y la conformación de un equipo que eleve el contencioso ante la CIJ. Dos días después del referéndum, el fiscal general de Venezuela dictó una orden de arresto contra 13 personas (incluyendo a destacados líderes en el extranjero, como

Juan Guaidó, Julio Borges o Leopoldo López, y también a tres personas del equipo de Machado) acusados de traición a la patria por participar en una conspiración nacional e internacional para boicotear el referéndum.

# 2.3.3. Asia y el Pacífico

## 2.3.3.1 Asia

#### **Asia Meridional**

Afganistán - Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	1
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	Afganistán, Pakistán

#### Síntesis:

Las relaciones entre Afganistán y Pakistán se han caracterizado históricamente por la complejidad y las disputas en torno a la demarcación fronteriza establecida durante la colonización británica de Pakistán y conocida como Línea de Durand y que dividió a la población pashtún a los dos lados de la frontera. En 1996 se estableció en Afganistán el Emirato Islámico, gobernado por los talibanes, movimiento religioso y militar conformado en 1994 por hombres que se habían formado en escuelas religiosas en Pakistán e impulsado por los servicios secretos de este país. Pakistán fue uno de los pocos países en reconocer al Gobierno talibán de Afganistán. Tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001 y la caída del régimen talibán, Pakistán se alineó junto al Gobierno de EEUU, aunque los talibanes continuaron recibiendo apoyo pakistaní y establecieron importantes bases operativas en Pakistán. Si bien Pakistán siempre negó de manera oficial haber ayudado a los talibanes, sectores del Gobierno, los servicios secretos y de las Fuerzas Armadas prestaron apoyo logístico, militar y político a los talibanes durante las dos décadas de conflicto armado y presencia militar extranjera en Afganistán. Con el retorno de los talibanes al poder en Afganistán en 2021, el Gobierno de Pakistán presionó al nuevo Ejecutivo afgano para que ejerciera un control sobre la insurgencia talibán pakistaní –el grupo armado TTP. A su vez el Gobierno talibán afgano trató de mediar entre el Gobierno pakistaní y el TTP, pero tras el fracaso de las negociaciones, se incrementó la tensión entre Afganistán y Pakistán.

A lo largo de 2023 se incrementó la tensión entre los dos países, con algunos episodios de violencia en la frontera, constantes enfrentamientos diplomáticos y la expulsión de Pakistán de centenares de miles de personas refugiadas afganas. Tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Pakistán y el grupo armado talibán pakistaní TTP en noviembre de 2022 y la escalada de la violencia en Pakistán durante 2023, el Gobierno pakistaní incrementó sus presiones sobre el Gobierno talibán de Afganistán, exigiendo a este que cesara su apoyo a la insurgencia. Afganistán se había ofrecido como mediador y facilitó los contactos entre el Gobierno pakistaní y el TTP. No obstante, tras el fracaso de las negociaciones, el Gobierno pakistaní acusó al afgano de permitir al TTP operar desde suelo afgano para llevar a cabo sus ataques contra las fuerzas de seguridad

pakistaníes. Ante la negativa del Gobierno afgano a llevar acciones contra el TTP, señalando que se trata de un problema interno pakistaní, la tensión escaló entre ambos Ejecutivos. En octubre se produjo un incremento considerable de la tensión cuando Pakistán anunció un plan de deportaciones masivas de personas extranjeras que se encontraban residiendo en este país, un plan diseñado específicamente para la población afgana. El anuncio se produjo después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y el TTP en Chitralen la frontera entre ambos países- en los que murieron cuatro soldados y al menos 12 insurgentes. Entre tres y cuatro millones de personas afganas residen en Pakistán, de las que 600.000 llegaron procedentes de Afganistán tras el ascenso de los talibanes al poder en 2021. Según International Crisis Group, 1,3 millones de personas afganas están registradas legalmente como refugiadas y 850.000 cuentan con la Carta de Ciudadanía Afgana que les otorga algunas protecciones. A estas se unen cerca de dos millones de personas que no cuentan con ninguna documentación que autorice su residencia en Pakistán, cifra que podría ser superior debido a la porosidad de las fronteras entre ambos países, lo que favorece el tránsito frecuente de población. Tras el anuncio del plan, se iniciaron las deportaciones y los retornos voluntarios de población, ante las amenazas del Gobierno pakistaní de expropiaciones, detención y castigo incluso contra quienes prestaran apoyo a las personas afganas residiendo en el país de forma ilegal. Al finalizar el año, 500.000 personas habían sido deportadas a Afganistán en condiciones de gran vulnerabilidad, ya que las autoridades pakistaníes limitaron la cantidad de ganado y dinero que las personas retornadas podían llevar a un valor de 175 dólares.

En noviembre, el primer ministro interino de Pakistán, Anwar ul-Hag Kakar, encargado de liderar el país hasta la celebración de elecciones previstas para el primer trimestre de 2024, afirmó que el Gobierno talibán de Afganistán estaba dando apoyo a la insurgencia del TTP y que había contribuido a la escalada de la violencia en Pakistán, en unas declaraciones sin precedentes por la falta de ambigüedad en las acusaciones. Kakar es considerado como próximo a las Fuerzas Armadas de Pakistán y exigió a Afganistán que entregase a aquellos responsables de actos de terrorismo en Pakistán, señalando que a pesar de que Pakistán esperaba que el cambio en el Gobierno de Afganistán llevase a la paz, se había producido un incremento de la violencia del TTP en Pakistán. Estas acusaciones fueron negadas por el Ejecutivo afgano, que a su vez exigió al Gobierno de Pakistán un comportamiento que se adhiriese a los "principios del Islam", en un intento de frenar el retorno forzado de decenas de miles de personas. En paralelo a las deportaciones, el Gobierno de Pakistán también incrementó los obstáculos al comercio, lo que podría tener un serio impacto en la deteriorada economía afgana, que es escenario de una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial. El retorno de cientos de miles de personas a Afganistán también estaría teniendo un importante

impacto sobre la situación humanitaria del país, aunque el Gobierno afgano anunció el establecimiento de campos para recibir a las personas retornadas.

India – China	
Intensidad:	3
Evolución:	$\downarrow$
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	India, China

#### Síntesis:

La frontera compartida por China e India ha sido objeto de disputas desde la década de 1950, tras la partición de India y Pakistán y la fundación de la República Popular China en 1949. Esta frontera nunca ha sido formalmente delimitada mediante un acuerdo entre ambos países y son varias las zonas sobre cuva demarcación existe conflicto. En la zona occidental de la frontera la disputa gira en torno a la zona de Aksai Chin, un área deshabitada cuyo territorio India reclama y considera que pertenece a la región de Ladakh (parte de Jammu y Cachemira) y que administra China como parte de la región de Xinjiang. El anuncio por parte de China de la construcción de una carretera que unía Xinjiang con Tíbet atravesando la región de Aksai Chin incrementó la tensión con la India, que se vio agravada tras la concesión de asilo al Dalai Lama en India en 1959. En los años siguientes se produjeron movimientos de tropas por partes de ambos países en la zona. En 1962 se inició una guerra que finalizó con la derrota militar de India, pero sin que se resolviera la cuestión de la demarcación, asunto que siguió condicionando las relaciones entre ambos Estados, así como con otros países de la región, especialmente con Pakistán. En 1988 los dos Gobiernos acordaron resolver la disputa por vías pacíficas. No obstante, desde entonces no se han logrado avances en las negociaciones y la tensión militar en las zonas en disputa ha persistido. En 2020 se produjo una grave escalada de la tensión, con los primeros enfrentamientos directos entre los Ejércitos de ambos países en los que murieron 20 soldados indios.

La tensión entre ambos países permaneció estancada durante todo el año y, aunque hubo diálogo político y militar a diferentes niveles, no se produjo ningún avance positivo. Si bien no hubo enfrentamientos directos ni ningún episodio de escalada de la crisis como había sucedido en 2022, la tensión se mantuvo y diferentes analistas apuntaron al riesgo de que esta pueda reactivarse a gran escala. Entre los factores de riesgo que se señalan se apunta al enorme despliegue militar que mantienen ambos países, así como a las construcciones militares que se han ido levantando desde la crisis de 2020 y al desarrollo de infraestructuras por parte de ambos países para posibilitar un rápido despliegue de tropas en caso de que la tensión militar escalase nuevamente. International Crisis Group estimaba el número de tropas chinas desplegadas en la zona en entre 50.000 y 60.000, con la posibilidad de sumar 120.000 soldados adicionales en el plazo de una semana.<sup>67</sup> Por su parte, India cuenta con 50.000 soldados en la zona y ha desplegado armamento

pesado. Durante todo el año continuó el diálogo político y militar sin que se llegara a ningún acuerdo para la retirada militar completa de las zonas en disputa sobre las que se han acordado zonas de separación militar para impedir el choque directo entre ambos Ejércitos. Desde la escalada de la crisis en 2020 se han llevado a cabo 20 rondas de diálogo militar de alto nivel, pero en ninguna de las que tuvieron lugar en 2023 se lograron avances concretos, aunque sí se acordó proseguir con el diálogo militar. Además del diálogo militar a un nivel técnico, durante el año se produjeron algunos encuentros políticos de alto nivel, como la conversación informal que mantuvieron Narendra Modi, primer ministro de India y Xi Jinping, presidente de China, con motivo de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica a finales de agosto. Tras este encuentro, el mandatario chino señaló que las disputas fronterizas no representaban la totalidad de las relaciones bilaterales entre los dos países, aunque días después de la cumbre de los BRICS, China hizo público un nuevo mapa estandarizado de su territorio en el que incluía zonas en disputa con India en Arunachal Pradesh y Aksai Chin. India respondió desacreditando la demarcación fronteriza mostrada por China. El presidente Xi no asistió a la cumbre del G20 en Delhi, de la que India era anfitriona por primera vez. Se trataba también de la primera vez que un presidente chino no asistía a esta cumbre que reúne a las 19 mayores economías del mundo y la UE. La ausencia de Xi de la cumbre del G20 mostró la distancia entre ambos Ejecutivos y el riesgo de escalada de la tensión, aunque numerosos medios de comunicación señalaron que la cumbre había sido un éxito diplomático para Modi. A pesar de que no se produjeron incidentes militares graves durante el año, si hubo algunos episodios de tensión. En abril, el ministro de Interior indio anunció un aumento de recursos para la seguridad en Arunachal Pradesh en respuesta a la construcción por parte de China de numerosas poblaciones en zonas cercanas a la Línea Actual de Control, frontera de facto entre ambos países. Se trata de poblaciones de nueva construcción, conocidas como "localidades modelo" en las que el Gobierno chino involucra a los nuevos pobladores en tareas de patrullaje conjunto en zonas cercanas a la frontera. En julio, las autoridades indias señalaron que China había plantado algunas tiendas en la zona de separación militar de Ladakh este, que fueron retiradas tras las protestas indias.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)
Síntesis: La tensión que er	nfrenta al Gobierno con los diferentes

grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgieron varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcó el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y fueron constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

La tensión escaló en el estado indio de Manipur, con enfrentamientos intercomunitarios entre grupos meitei y kuki, que provocaron la muerte de 163 personas, según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal. Por su parte, International Crisis Group señaló en octubre que, desde el inicio de la crisis en mayo, al menos 176 personas habían muerto como consecuencia de la violencia, siendo las cifras de mortalidad asociada a la crisis sociopolítica más elevadas desde 2009. Además, la violencia ocasionó el desplazamiento forzado de más de 67.000 personas. La crisis se inició después de que el Tribunal Supremo de Manipur emitiera una orden en la que emplazaba al Gobierno a recomendar el estatus de "tribu registrada" (scheduled tribe) para la población meitei del estado –grupo étnico mayoritario en Manipur que profesa la religión hindú y que habita en la capital y las zonas planas del estado-, generando la oposición fundamentalmente de las comunidades kukis y también nagas -comunidades minoritarias que habitan en las zonas montañosas del estado y mayoritariamente cristianas. El estatus de "tribu registrada" facilita, entre otras cuestiones, el acceso a cuotas reservadas en empleos y servicios públicos. La orden del Tribunal Supremo también daba pie a que la población meitei pudiera adquirir tierras en las zonas habitadas por población kuki, lo que incrementó el temor a la pérdida de control sobre el territorio en las zonas en las que esta población está establecida. Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, la organización All Tribal Students' Union Manipur convocó movilizaciones en 10 distritos montañosos del estado, en los que vive mayoritariamente la población kuki. Durante las protestas hubo disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en los que numerosas personas resultaron heridas. Además, se produjo la quema de casas por parte de milicias meiteis integradas por miles de personas. Como consecuencia de esta violencia, se estableció un toque de queda y el Ejército se desplegó con orden de disparar sin previo aviso. Además, se produjo la evacuación de 20.000 personas, población meitei que habitaba en zonas mayoritariamente kukis y viceversa, que fueron trasladadas a campos para personas desplazadas.

En julio se hizo viral un vídeo en el que se mostraban escenas de violencia sexual contra dos mujeres de la comunidad kuki, perpetrados por un grupo de hombres meitei, lo que desencadenó nuevos enfrentamientos y disturbios. El vídeo no se había difundido con anterioridad como consecuencia de las restricciones en internet que el Gobierno indio impuso tras los disturbios de mayo. Además, numerosas mujeres se manifestaron en defensa de las víctimas. Posteriormente emergieron múltiples denuncias sobre otros casos de violencia sexual y se acusó a la Policía de complicidad con los perpetradores. Además, organizaciones de derechos humanos señalaron que se habían difundido noticias falsas sobre violencia sexual contra mujeres meitei que derivaron en una intensificación de los disturbios. No se produjeron denuncias formales sobre esta violencia contra mujeres meitei y sí se registraron más de una decena de denuncias de violencia sexual contra mujeres kukis. Como consecuencia de la violencia se incrementó notablemente la segregación entre las comunidades kukis y meiteis, reduciéndose drásticamente las zonas habitadas por personas de ambos grupos. En los meses siguientes continuaron la violencia y los enfrentamientos. La Policía, integrada mayoritariamente por población meitei, acusó al cuerpo de seguridad federal Assam Rifles de dar apoyo a la insurgencia kuki en el estado y se incrementaron las demandas por parte de la población meitei para que el Gobierno retirara a los Assam Rifles de Manipur. Por otra parte, cabe señalar que en marzo el Gobierno puso fin al acuerdo de alto el fuego que mantenía desde 2008 con los grupos armados kukis Kuki National Army and Zoumi Revolutionary Front, acusando a las insurgencias de estar detrás de las protestas sociales que habían tenido lugar en los distritos de Churachandpur, Kangpokpi y Tengnoupa exigiendo al estado que respetase los derechos territoriales tribales.

## **Asia Oriental**

China – Filipinas	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Filipinas, EEUU

# Síntesis:

En el marco del conflicto entre varios estados en el Mar de la China Meridional, en los últimos años el contencioso territorial entre China y Filipinas que ha tenido mayores implicaciones militares, políticas y diplomáticas ha sido la disputa entre ambos países por dos formaciones terrestres que se hallan en la zona económica exclusiva de Filipinas (a 200 millas náuticas de la costa , dentro de lo que Filipinas denomina el Mar Oriental de Filipinas) y que Beijing reivindica que como propias, al estar incluidas en la llamada "línea de diez puntos" —una región que abarca aproximadamente el 90% del Mar de la China Meridional. La primera de dichas formaciones, el atolón de Scarborough, estaba ocupado por Filipinas hasta 2012,

cuando un incidente naval entre ambos países derivó en un control de facto del banco de arena desde entonces por parte de China. El segundo elemento en disputa es el Second Thomas Shoal (también conocido como Ayungin en tagalo y Renai en chino), un banco de arena de las Islas Spratly que se halla a unas 100 millas náuticas de la isla de Palawan (Filipinas) y a 620 de China, pero solamente a unas 20 millas del arrecife de Mischief, controlado y militarizado por Beijing. Desde 1999, Filipinas mantiene tropas permanentemente a bordo de un barco de la Segunda Guerra Mundial varado en Second Thomas para garantizar su control. En paralelo a los incidentes marítimos que se han registrado en las inmediaciones de ambas formaciones terrestres en disputa, en 2016 un tribunal de arbitraje de la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) dictaminó que no existía base legal para que China apele a derechos históricos sobre los recurso que están dentro de la "línea de los diez puntos", señaló que China había violado los derechos de soberanía de Filipinas con respecto a su zona económica exclusiva y también recalcó que los elementos geográficos en disputa en el archipiélago de las Spratly no generan una zona económica exclusiva, como sostiene Beijing. Sin embargo, China (ni tampoco Taiwán) no reconoció la validez del fallo por considerar que las disputas territoriales no están sujetas a la CNUDM y por considerar que estas deben resolverse a través de negociaciones bilaterales. Por otra parte, en varias ocasiones EEUU ha recordado públicamente sus obligaciones militares hacia Filipinas en virtud del tratado bilateral de defensa mutua de 1951.

En 2023 se incrementó sustancialmente la tensión política y militar entre China y Filipinas, con algunos de los incidentes marítimos más graves de los últimos años, un incremento de la retórica belicista y una profundización de las alianzas en materia de defensa entre Manila y varios países, especialmente con EEUU. En cuanto a los incidentes marítimos entre ambos países, Manila denunció que a principios de febrero la Guardia Costera china realizó maniobras peligrosas a menos de 140 metros de varios barcos filipinos y utilizó un láser de grado militar contra a uno de sus navíos cerca del banco de arena Second Thomas, cegando temporalmente a la tripulación. Según algunos medios, un ataque con láser suele considerarse hostil porque puede preceder el disparo de proyectiles contra un objetivo. Manila también denunció en febrero que alrededor de 30 buques chinos permanecían en su zona económica exclusiva y que la Guardia Costera china llevó a cabo advertencias por radio a varios aviones filipinos que sobrevolaban el banco de arena Second Thomas. El Gobierno filipino llamó a consultas al embajador chino para expresar su seria preocupación por el aumento de la frecuencia e intensidad de las acciones de China y por lo que consideró una clara violación de los derechos soberanos de Filipinas en el Mar de Filipinas Occidental. Algunos analistas consideran que la decisión del Gobierno filipino de hacer público el uso del láser y de llamar a consultas al embajador supuso un punto de inflexión respecto de la política exterior que había seguido Manila hasta el momento, en especial la administración de Rodrigo Duterte. Esta estrategia de China, catalogada como "transparencia asertiva" por parte algunos medios, consiste principalmente denunciar abiertamente las transgresiones chinas en su

zona económica exclusiva y en intensificar las patrullas en la zona. Poco después, en marzo, Manila volvió a denunciar que más de 40 navíos de la Guarda Costera china, la Armada y la llamada milicia marítima china (barcos pesqueros que según algunos análisis operan en coordinación con las autoridades chinas) permanecían en las inmediaciones de la isla de Thitu/Pagasa. administrada por Filipinas. En la misma línea, a finales de abril Manila afirmó que más de 100 embarcaciones chinas fueron avistadas en la región, y también denunció que varias de sus patrulleras costeras casi colisionaron con un barco de la marina china a finales de abril. En agosto la tensión militar entre ambos países volvió a incrementarse después de que la Guardia Costera china disparara cañones de agua contra barcos filipinos en misión de reabastecimiento del buque BRP Sierra Madre en el banco de arena Second Thomas. Algunos analistas consideran que la alta presión de los cañones de agua tiene la capacidad de hundir embarcaciones y también de infringir graves daños humanos (incluso la muerte) a su tripulación. En octubre, un barco de la guardia costera china chocó con un barco de reabastecimiento filipino a unos 25 km de Second Thomas, en paralelo a otra colisión entre un navío de la milicia marítima china y un buque de la Guardia Costera filipina. Poco antes, un barco chino se había acercado a unos 320 metros de un barco filipino al suroeste de la isla de Thitu, el mayor puesto de avanzada de Manila en el Mar de China Meridional. En la misma línea, en diciembre se produjeron otros dos incidentes considerados como graves por parte del Gobierno filipino. En el primero de ellos, barcos chinos utilizaron cañones de agua en ocho ocasiones contra barcos filipinos de una misión humanitaria para distribuir productos a los pescadores cerca del banco de arena Scarborough, controlado desde 2012 por China. En el segundo, Manila denunció que navíos chinos utilizaron cañones de agua contra barcos en una misión de reabastecimiento en Second Thomas, dañando gravemente uno de los barcos y poniendo en peligro la vida de su tripulación. Por otra parte, la guardia costera filipina declaró que fue acosada por un total de 13 barcos de la guardia costera y la milicia china y también que detectó más de 48 buques chinos en la zona, el mayor número de fuerzas marítimas en relación a misiones de reabastecimiento. Como en anteriores incidentes en las inmediaciones del banco de arena Second Thomas, el Gobierno chino declaró haber tenido que tomar medidas defensivas legítimas después de que los mencionados barcos en misión de reabastecimiento ignoraran repetidas advertencias por haber ingresado ilegalmente en las aguas adyacentes a Second Thomas, cuya soberanía Beijing reivindica.

En paralelo a un claro incremento en los incidentes y episodios de conflictividad entre China y Filipinas en el Mar de China Meridional, el presidente Marcos anunció su intención de modernizar e incrementar la dotación presupuestaria de las Fuerzas Armadas, alegando los retos que enfrenta el país en el Mar de la China Meridional. Además, en 2023 Filipinas incrementó significativamente su cooperación con varios países

que también disputas territoriales con China, como India, Vietnam, Malasia o Indonesia. Cabe destacar especialmente el incremento de la cooperación en cuestiones de seguridad y defensa con Australia, EEUU y Japón. En cuanto a Australia, en noviembre ambos países llevaron a cabo por primera vez patrullajes marítimos y aéreos conjuntos en el Mar de la China Meridional. En cuanto a Japón, en 2023 los Gobiernos de ambos países decidieron iniciar negociaciones para un Acuerdo de Acceso Recíproco, con el objetivo de facilitar la presencia de fuerzas visitantes y realizar actividades conjuntas de entrenamiento militar. El Acuerdo sería el primero de Japón con un estado miembro de ASEAN y el tercero que suscribe en su historia después de los acuerdos con Australia y Reino Unido. Algunos analistas no descartan que ambos países puedan incluso llegar a firmar un pacto más amplio, como un Acuerdo de Fuerzas Visitantes, parecido al que tienen desde hace años EEUU y Filipinas, por los que algunos medios consideran la relación actual entre Filipinas y Japón como de "cuasi-alianza". En este sentido, cabe destacar las maniobras conjuntas que realizaron las guardias costeras Filipinas, Japón y EEUU en junio en el Mar de la China Meridional, las primeras de este tipo.

En cuanto a la cooperación en materia de defensa entre Filipinas y EEUU, en febrero de 2023 EEUU y Filipinas anunciaron un pacto para ampliar su Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (EDCA, por sus siglas en inglés) para permitir el acceso militar estadounidense a cuatro instalaciones militares adicionales en Filipinas. Varios analistas consideraron tal acuerdo como uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos tiempos en las relaciones entre EEUU y Filipinas, y señalaron que puede tener importantes implicaciones geoestratégicas en el Mar de la China Meridional y en el Mar de la China Oriental y en las relaciones entre China y EEUU. El 3 de abril Manila anunció la ubicación de las cuatro bases adicionales accesibles a las fuerzas estadounidenses en virtud del EDCA, tres de los cuales en el norte, frente a Taiwán, y la otra cerca de las islas Spratly. Por su parte, Washington anunció que asignaría más de 100 millones de dólares para finales del año fiscal 2023 para mejorar la infraestructura en los cinco sitios existentes de la EDCA y apoyar la rápida puesta en funcionamiento de los cuatro nuevos sitios. Aunque el propio Marcos señaló que las nuevas bases tenían un propósito puramente defensivo y que no deberían generar preocupación a nadie que no ataque la soberanía nacional y la integridad territorial del país, Beijing advirtió que la expansión de EDCA dañará gravemente los intereses nacionales filipinos y pondrá en peligro la paz y la estabilidad regionales. Por su parte, en varias ocasiones durante el año el Gobierno de EEUU reiteró el compromiso militar de EEUU hacia Filipinas en virtud del Tratado de Defensa Mutua de 1951. Además, en abril EEUU y Filipinas llevaron a cabo el mayor ejercicio militar conjunto realizado hasta el momento, con la participación de más de 17.000 tropas. Además, en noviembre y a principios de enero de 2024, ambos países llevaron a cabo patrullajes conjuntos desde los estrechos de Taiwán hasta el Mar de la China Meridional.

Finalmente, cabe destacar que la relación entre ambos países se deterioró a raíz de la publicación en agosto por parte de China de un mapa actualizado del país que incluía reclamos territoriales -impugnados por otros países- en la frontera occidental con la India, el Mar de la China Meridional y Taiwán. La nueva "línea de diez puntos", que abarca el 90% del Mar de China Meridional, incluye toda la isla de Taiwán (el décimo trazo), así como también varias islas pequeñas e islotes reclamados por países como Vietnam, Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesia. El Gobierno de Filipinas denunció que la publicación de dicho mapa tenía como objetivo legitimar la supuesta soberanía y jurisdicción de China sobre zonas marítimas y territoriales de Filipinas y que dicha posición no tenía sustento en el derecho internacional ni en el fallo de arbitraje internacional de 2016 que invalidaba los reclamos de China en el Mar de China Meridional.

China – Japón	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Territorio, Recursos Internacional
Actores:	China, Japón, Taiwán, EEUU

#### Síntesis:

La disputa entre China y Japón por la soberanía y la administración de las islas Senkaku/ Diaoyu (en japonés y chino, respectivamente) en el Mar de la China Oriental se remonta a principios de los años setenta, cuando EEUU, que había administrado las islas desde 1945, cedió el control de éstas a Japón. La disputa por las islas Senkaku/Diaoyu, que tienen un alto valor geoestratégico y que se estima podrían albergar enormes reservas de hidrocarburos, se enmarca en las conflictivas relaciones históricas que han mantenido China y Japón desde el primer tercio del siglo XX a raíz de la invasión japonesa de China en los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial. El contencioso territorial entre China y Japón se había gestionado de manera relativamente pacífica desde principios de los años setenta, pero la tensión entre ambos se incrementó significativamente desde que el Gobierno japonés comprara en 2012 tres de las islas en disputa a un propietario privado, y de que China en 2013 declarase unilateralmente una nueva Zona de Identificación de Defensa Aérea que incluye el espacio aéreo de las islas. En los años siguientes a tales decisiones se incrementó significativamente el número de incursiones de patrulleras de la Guarda Costera china y navíos chinos en las aguas contiguas e incluso territoriales (12 millas náuticas desde la costa) de las islas Senkaku/Diaoyu, así como el número de cazas desplegados por Japón en control y supervisión de su espacio aéreo. Por su parte, Japón adoptó una estrategia de seguridad nacional crecientemente asertiva en la región, incrementó notablemente su gasto militar y consolidó alianzas de defensa con otros países activos en la región como EEUU, que repetidamente ha manifestado su compromiso militar con la soberanía e integridad territorial de Japón en virtud del tratado bilateral de defensa de 1951. Taiwán (oficialmente la República de China) también considera las islas Senkaku/Diaoyu forman parte inherente de su territorio -por razones históricas, geográficas y de derecho internacional-, aunque su política respecto del contencioso ha generado comparativamente menor atención internacional y fricción con Japón, que detenta el control de las islas. En 2023 se incrementó la tensión entre China y Japón acerca del contencioso sobre las islas Senkaku/Diaoyu, tanto en lo concerniente al número de incidentes en las aguas y el espacio aéreo en las cercanías de dichas islas, como con relación a las alianzas, estrategias y maniobras militares de ambos países en la región. En cuanto al primer aspecto, el Gobierno japonés denunció que en 2023 un total de 1.287 barcos del Gobierno chino operaron en la zona contigua a las islas Senkaku/ Diaoyu –entre 12 y 24 millas náuticas– durante 352 días, la cifra más alta desde que existen registros al respecto (en 2008). Según algunos medios de comunicación japoneses en 2024 el Gobierno chino tiene la intención de incrementar el número de incursiones a todos los días del año y de autorizar a la Guardia Costera china a realizar inspecciones in situ de los buques pesqueros japoneses cuando lo considere necesario. Además, Tokio también denunció que los barcos de la Guardia Costera china mantuvieron una presencia ininterrumpida en la zona contigua de las Senkaku/Diaoyu durante 134 días consecutivos entre agosto y diciembre y que incluso se adentraron en las aguas territoriales japonesas (12 millas náuticas desde la costa) durante 42 días. El número de tales incursiones chinas en aguas territoriales de las Senkaku/Diaoyu se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de una entre 2009 y 2011 a 23 en 2012, y manteniéndose en alrededor de la treintena en los últimos años. Cabe destacar que cada vez que los barcos de la Guardia Costera de China se adentran en las aguas territoriales de las Senkaku/Diaoyu, el Gobierno japonés envía a la Guardia Costera a la zona en disputa para exigir a los navíos chinos que la abandonen y en ocasiones eleva una protesta diplomática a Beijing. En este sentido, en varios momentos del año, pero especialmente entre los meses de octubre y diciembre, ambos países se acusaron mutuamente de incursionar en las inmediaciones de las islas Senkaku/Diaoyu y se registraron incidentes, maniobras peligrosas y movimientos de intimidación entre patrulleras guardacostas de ambos países y barcos chinos y japoneses.

En cuanto a la tensión respecto del espacio aéreo, en abril de 2023 el Gobierno japonés declaró que entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 desplegó 778 cazas, la gran mayoría (575) contra aviones chinos (575) y rusos (116). La cifra total supuso una disminución respecto de los más de 1.000 cazas desplegados en 2021, aunque algunos medios apuntan a que el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una disminución en el número de aviones rusos que volaron cerca de Japón. Desde el año 2013, la media anual del número de cazas que han despegado para supervisar el espacio aéreo o la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Japón ha sido superior a 700. A modo de ejemplo, en diciembre de 2023 Tokio desplegó varios cazas en respuesta al vuelo conjunto de 17 aeronaves chinas y rusas cerca de Japón y, poco después, al vuelo conjunto de cuatro bombarderos (dos chinos y dos rusos) en el Mar de Japón. Por otra parte, durante el año el Gobierno chino realizó varios avisos contra aviones japoneses que volaban cerca de las islas Senkaku/Diaoyu. Tal situación se ha incrementado exponencialmente desde que el 2013 Beijing incluyera el espacio aéreo de tales islas en su ADIZ, exigiendo a cualquier avión extranjero que solicite autorización a entrar en su ADIZ y reservándose el Gobierno chino la posibilidad de tomar medidas defensivas de emergencia.

Por otra parte, en varios momentos durante el 2023 el primer ministro japonés, Fumio Kishida, advirtió que la creciente agresividad de China en la región, así como las actividades militares de países como Rusia y Corea del Norte, hacían que Japón se enfrentara al entorno de seguridad más peligroso y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, Kishida acusó a China de hostigar permanentemente a sus países vecinos en el Mar de la China Oriental y Meridional y advirtió que el desarrollo militar de China es un desafío estratégico sin precedentes para Japón y la comunidad internacional. En esta línea, en 2023 Japón incrementó sus alianzas de defensa con otros países, aumentó su presupuesto militar y siguió desplegando la nueva estrategia de seguridad nacional aprobada en diciembre de 2022, que muchos analistas interpretaron como un punto de inflexión importante respecto de la estrategia de autodefensa que ha seguido el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en buena medida por las restricciones en materia de defensa impuestas por las potencias vencedoras en dicha guerra. Entre otras cuestiones, la nueva estrategia de seguridad incluye la adquisición a 10 años vista de capacidades de contraataque para interrumpir mucho antes y a mayor distancia agresiones contra el país, así como doblar su gasto en defensa para el 2027, dotándose para entonces del tercer mayor presupuesto militar del mundo, solamente por detrás de EEUU y China. Además, en 2023 Japón incrementó sustancialmente el presupuesto de su Guardia Costera -la agencia gubernamental más activa en el control de las islas Senkaky/Diaoyu- y llevó a cabo ejercicios entre la Guardia Costera, la Policía y las Fuerzas de Autodefensa para mejorar la coordinación entre estos cuerpos ante la eventualidad de que Japón sufriera un ataque y la Guardia Costera tuviera que ser integrada en el Ministerio de Defensa. Finalmente, cabe destacar que a mediados de marzo Japón desplegó a sus Fuerzas de Autodefensa, y también misiles, en la isla de Ishigaki (en la prefectura de Okinawa), cerca de las islas Senkaku/Diaoyu y de Taiwán, y al día siguiente llevó cabo por primera vez ejercicios para evacuar a más de 100.000 personas de las islas cercanas a Taiwán.

Además, en 2023 Japón incrementó sustancialmente sus alianzas y pactos de defensa con numerosos actores activos en la región. Además de los ejercicios militares conjuntos con EEUU que suelen Ilevarse a cabo rutinariamente cada año y de la adquisición de cuantioso equipamiento bélico procedente de EEUU, cabe destacar la firma de un pacto de defensa entre Japón y Reino Unido en enero —el primero de estas características con un país europeo, que incluye la posibilidad de entrenamientos y ejercicios militares

conjuntos e incluso de despliegue de tropas en sus respectivos países-; el anuncio en enero de un partenariado estratégico entre Japón e Italia; la realización en enero y marzo de los primeros ejercicios militares y aéreos conjuntos con India; la realización en marzo de ejercicios militares conjuntos en la región con EEUU, Canadá, India y Corea del Sur; la conducción en octubre de ejercicios militares conjuntos con EEUU y Corea del Sur; el inicio en noviembre de negociaciones entre Japón y Filipinas para el despliegue de tropas en sus respectivos países; la propuesta en noviembre de altos cargos políticos japoneses de incluir a Japón en AUKUS –la alianza estratégica de defensa entre EEUU, Reino Unido y Australia-; o los primeros ejercicios militares trilaterales entre EEUU, Australia y Japón en diciembre. Además, cabe destacar la aproximación entre Japón y la OTAN. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Lituania, ambas partes anunciaron su intención de incrementar su cooperación en varias áreas de defensa (como la ciberseguridad) y de incrementar la presencia de la OTAN en la región del Indo-Pacífico, generando importantes críticas por parte del Gobierno chino.

China – Taiwán	
Intensidad:	3
Evolución:	$\uparrow$
Tipología:	Territorio, Recursos, Sistema Internacional
Actores:	China, Taiwán, EEUU

#### Síntesis:

El conflicto entre la República Popular de China (China) y Taiwán (oficialmente República de China) se remonta al año 1949, tras la victoria del Partido Comunista en la guerra civil (1927-36 y 1945-49) contra el Gobierno de la República de China (creado en 1912 y liderado por el partido Kuomintang). Dicha victoria condujo a la proclamación por parte de Mao Tse Tung de la República Popular de China y a la huida del líder del Kuomintang, Chiang Kai Chek, y cientos de miles de personas a la isla de Formosa (Taiwán), donde el Kuomintang estableció un régimen autoritario de partido único y ley marcial hasta la democratización del país a finales de los años 80. Desde su creación en 1949, la República Popular China ha considerado a Taiwán como una provincia rebelde, negándose a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán y exigiendo a cualquier país que quiera mantener relaciones diplomáticas con Beijing que no reconozca a Taiwán. En sucesivas ocasiones, distintos mandatarios chinos han expresado su voluntad de lograr la reunificación bajo el principio de "un país, dos sistemas", pero a la vez no han descartado el uso de la fuerza para lograr tal objetivo. Por su parte, la República de China, con control efectivo sobre sobre Taiwán, Penghu, Kinmen, Matsu e islas más pequeñas, mantuvo su pretensión de ser el único representante legítimo de China y su territorio hasta 1991, cuando dejó de considerar al Partido Comunista como un grupo rebelde y reconoció su jurisdicción sobre la China continental. Hasta 1971, la República de China (Taiwán) detentó la representación de China en Naciones Unidas (ocupando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad), pero en tal fecha Naciones Unidas reconoció a Beijing como el único y legítimo representante de China, posición que también adoptó EEUU en 1979 en el marco de la normalización de sus relaciones diplomáticas. En paralelo a las tensiones políticas asociadas al estatus político de Taiwán, en el plano militar ha habido principalmente tres episodios bélicos significativos. En 1954-55, Beijing bombardeó las islas de Kinmen, Matsu y Tachen y tomó el control efectivo de las islas Yijiangshan, motivando la firma en 1954 del Tratado de Defensa Mutua Sino-Estadounidense. En 1958, la República Popular de China bombardeó nuevamente las islas de Kinmen y Matsu y hubo un enfrentamiento naval entre ambos países alrededor de la isla Dongding. En 1995 y 1996, Beijing lanzó varios misiles, coincidiendo con los comicios presidenciales de 1996, los primeros de elección directa tras el período de régimen autoritario.

En 2023 se incrementaron notablemente tanto la presión militar de China sobre Taiwán como la tensión política entre ambos países vinculada a la cercanía de las elecciones presidenciales en Taiwán en enero de 2024, el incremento de la cooperación militar entre Taiwán y EEUU y las relaciones exteriores de Taiwán con EEUU y otros países. En el aspecto militar, cabe destacar el alto número de aviones chinos (1.714) que incursionaron en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de Taiwán, una zona mucho mayor que el espacio aéreo de Taiwán y que algunos países han establecido para disponer de mayor tiempo en el proceso de identificación de una aeronave potencialmente hostil. El aspecto que generó mayor preocupación, sin embargo, fue el claro incremento de aviones que cruzaron la llamada "línea media" entre China y Taiwán, una demarcación marítima de facto (no oficial ni sancionada por ningún tratado) trazada en 1955 para minimizar el riesgo de enfrentamientos y colisiones fortuitas en los Estrechos de Taiwán. A excepción de alguna incursión esporádica en 1999 – derivada de un breve incidente diplomático-, hasta el año 2019 China había respetado tácitamente la línea media, pero a raíz de la elección de Tsai Ingwen como presidenta de Taiwán en enero de 2020, se produjo un drástico incremento tanto de incursiones en la ADIZ de Taiwán como en el cruce de la "línea media". Si en 2022 se produjeron 565 cruces de la línea media, que se halla a escasos quilómetros de las aguas territoriales de Taiwán, en 2023 se produjeron 703. En septiembre, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró haber detectado un número récord de aviones de combate chinos (103) sobrevolando en el espacio aéreo alrededor de Taiwán en solo un día. Además, durante el 2023, Taipei advirtió haber detectado entre 150 y 200 barcos chinos al mes en aguas cercanas. En respuesta a todas estas acciones por parte de China, en particular las incursiones de aviones en su ADIZ y el cruce de la "línea media" por parte de aviones o barcos chinos, el Gobierno de Taiwán desplegó sus aviones a reacción y barcos guardacostas cientos de veces, y en alguna ocasión incluso activó su sistema de misiles.

Por otra parte, durante el 2023 también se incrementó la frecuencia, alcance y complejidad de los ejercicios militares de China. Cabe destacar especialmente los ejercicios militares que Beijing Ilevó a cabo a principios de abril, en las que decenas aviones de combate y buques

de guerra chinos simularon ataques contra Taiwán y rodearon la isla. Dichos ejercicios fueron una respuesta a la reunión que mantuvieron pocos días antes en EEUU la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, en las que ambos reafirmaron la sólida alianza entre los dos países. A finales de abril, Taiwán declaró que durante ese mes se habían registrado 548 incursiones de aviones chinos en su ADIZ. En el mes de julio, China también llevó a cabo ejercicios con cazas, bombarderos y barcos de guerra en el sur y el suroeste de la isla. Pocos días más tarde, Taiwán llevó a cabo sus ejercicios militares anuales. También cabe destacar que en el mes de abril China envió un avión no tripulado alrededor de Taiwán por primera vez, repitiendo tal acción durante otras cinco veces a lo largo del año. Algunos analistas también advirtieron sobre la creciente presencia de portaaviones chinos el Océano Pacífico, desde donde despegan aviones en dirección a la costa oriental de Taiwán –mucho menos protegida que la occidental– y llevan a cabo ejercicios militares sobre cómo repeler a EEUU ante la eventualidad de una invasión de Taiwán. En esta línea, durante el año EEUU, Taiwán y otros países denunciaron la creciente agresividad de China hacia barcos que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación en aguas internacionales. En junio, por ejemplo, los Gobiernos de Canadá y EEUU denunciaron que dos barcos suyos que navegaban por los Estrechos de Taiwán casi colisionan con un barco de guerra chino por una maniobra peligrosa de este último. En la misma línea, Washington denunció que el Ejército chino ha intensificado su comportamiento agresivo contra los aviones de vigilancia estadounidenses en el Pacífico, realizando más de 180 intercepciones de riesgo -300 si se incluyen otros países- desde 2021, más que en toda la década anterior.

Otro de los ejes de tensión durante el año fue el incremento de la cooperación militar entre EEUU y Taiwán. En febrero, por ejemplo, varios medios informaron sobre la intención de Washington de incrementar el número de tropas desplegadas en Taiwán -de los 30 efectivos actuales a los entre 100 y 200. En las mismas fechas, una delegación bicameral del Congreso de EEUU se reunió en Taipei con la presidenta Tsai, comprometiéndose ambas partes a seguir fortaleciendo los vínculos en materia de defensa. Pocos días más tarde, el ministro de Exteriores de Taiwán y el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés se reunieron en Washington con el subsecretario de Estado y otros altos cargos del Gobierno estadounidense para discutir la cooperación militar entre ambos países. Además de la suscripción de numerosos contratos entre el Gobierno de Taiwán y empresas estadounidenses para la modernización o fortalecimiento de las capacidades militares de Taiwán y de la aprobación por parte de EEUU de varios paquetes de ayuda militar a Taiwán, cabe destacar la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de EEUU (en julio) y del Senado (en diciembre) de una ley que permite el desembolso de cuantiosos recursos para mejorar las capacidades de

defensa de Taiwán, incluyendo la formación y ejercicios militares, una mayor interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses o una mayor cooperación entre ambos países en ciberseguridad o inteligencia militar. La ley también incluye un informe semestral del secretario de Defensa al Congreso sobre las actividades militares de China en Taiwán, el Sudeste Asiático y el Mar de la China Meridional. En 2023, el gasto en defensa de Taiwán alcanzó una cifra récord de más de 19.000 millones de dólares, pero expertos en la materia estiman que el gasto militar de China es alrededor de doce veces mayor que el de Taiwán. Taiwán tiene alrededor de 169.000 fuerzas en servicio activo (y unos 2 millones en la reserva), mientras que el Ejército de China tiene más de dos millones de efectivos activos, el mayor del mundo. Finalmente, cabe destacar que en agosto, durante un encuentro con parlamentarios de Estonia, Letonia y Lituania, la presidenta Tsai solicitó la participación de Taiwán en los Centros de Excelencia de la OTAN en los países bálticos, que abordan cuestiones como ciberseguridad, comunicaciones y seguridad energética. (Destacado) Cabe destacar el alto número de aviones chinos (1.714) que incursionaron en la Zona de Identificación de la Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de Taiwán.

Finalmente, cabe destacar que la celebración de las elecciones presidenciales en Taiwán en enero de 2024 también provocó una escalada de la retórica y la presión militar de China sobre Taiwán, incrementándose el número de barcos que cruzaban la "línea media" y de aviones que se adentraban en la ADIZ de Taiwán. En el plano retórico, a finales de año el Gobierno chino declaró que la independencia de Taiwán significaría guerra, y Xi Jinping reiteró nuevamente la inevitabilidad histórica de la reunificación de Taiwán con China durante su discurso de fin de año. En la misma línea, el Gobierno chino declaró que el resultado de las elecciones no haría variar el hecho de que Taiwán, a la que considera una provincia rebelde desde 1949, es una parte innegociable de China. De hecho, algunos medios sostienen que la tensión entre China y Taiwán está en su punto más álgido desde 1996, cuando Beijing disparó misiles frente a la costa de Taiwán coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas de Taiwán tras el período de autoritarismo ejercido durante décadas por el Kuomintang.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea <sup>68</sup>	
Intensidad:	3
Evolución:	<u></u>
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

#### Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado "eje del mal". Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

En paralelo al notable deterioro de las relaciones intercoreanas, la tensión entre Corea del Norte y varios países (especialmente EEUU, Corea del Sur y Japón) acerca del programa armamentístico norcoreano se incrementó claramente durante el año. De igual modo, también generaron preocupación la creciente cooperación en materia de defensa entre Corea del Norte y Rusia, las demandas del Gobierno surcoreano sobre el desarrollo de capacidades nucleares, el incremento de los ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur, o la profundización de la alianza militar trilateral entre EEUU, Japón y Corea del Sur. En cuanto al desarrollo armamentístico de Corea del Norte, a finales de año el líder norcoreano Kim Jong Un señaló que el 2023 había sido un año de grandes transformaciones y avances en el terreno militar. Además del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto y medio alcance durante todo el año, los dos aspectos más destacados fueron el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y la puesta en órbita de un satélite de reconocimiento militar. En cuanto al primer aspecto, cabe señalar que en 2023 se realizaron cinco ensayos con misiles balísticos intercontinentales, tres de los cuales con el modelo Hwasong 18, según Kim Jong Un el arma más poderosa del arsenal nuclear norcoreano. Tales misiles son propulsados con combustible sólido (mucho más difíciles de detectar que los de combustible líquido) y, según algunos analistas, tienen la capacidad de transportar una cabeza nuclear y alcanzar una distancia de unos 15.000 kilómetros, alcanzando numerosos objetivos del territorio estadounidense. Según estos mismos análisis, el ensayo que Pyongyang llevó a cabo en diciembre, logrando una altitud de unos 6.000 kilómetros, fue el más exitoso. Previamente, la publicación de fotos sobre una carcasa de una ojiva nuclear por parte de Pyongyang provocó especulaciones sobre los avances de Corea del Norte en su capacidad de miniaturizar ojivas nucleares para poder ser adosadas

<sup>68.</sup> Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano y afecta a otros países más allá de los que aparecen en la denominación del caso.

a misiles balísticos. El segundo avance tecnológico más destacado del año por parte de Corea del Norte fue la puesta órbita a finales de noviembre de un satélite de reconocimiento militar, una de las cinco prioridades militares para el quinquenio 2021-2026 anunciadas por Kim Jong Un en enero de 2023. Aunque el Gobierno surcoreano expresó un cierto escepticismo acerca del avance que pueda suponer tal tecnología, algunos análisis sugieren que el funcionamiento exitoso de tal satélite podría suponer un punto de inflexión en la capacidad de Corea del Norte de obtener información sobre los recursos y estrategias militares tanto de Corea del Sur como de EEUU. Pyongyang había llevado a cabo dos intentos anteriores de lanzamiento de dicho satélite en mayo y en agosto, provocando en ambos casos la condena de la comunidad internacional por considerar que contraviene varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de que la puesta en órbita del mencionado satélite se produjera poco después de que se hiciera público un encuentro

en Rusia entre Kim Jong Un y el presidente ruso, Vladimir Putin, generó especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno ruso hubiera colaborado en el desarrollo de la tecnología de lanzamiento satelital. Según estas mismas especulaciones, el Gobierno norcoreano había aportado cuantiosa munición para la guerra de Rusia contra Ucrania, tal y como fuentes de inteligencia de EEUU confirmaron en el mes de octubre. Además del asesoramiento en cuestión de lanzamiento de satélites, algunos análisis señalan que Pyongyang también tendría interés en colaborar con Rusia para obtener submarinos nucleares, modernizar

su flota de cazas u obtener misiles tierra-aire. Antes del encuentro ente Kim Jong Un y Putin, en julio el ministro de Defensa ruso había viajado a Pyongyang para asistir los actos por el 70° aniversario del armisticio de la guerra de Corea (1950-1953), junto con un miembro del Politburó chino, en una de las visitas de mayor rango a Corea del Norte en los últimos años. Posteriormente, en octubre el ministro de Exteriores ruso se reunió con el líder norcoreano, mientras que en noviembre el ministro de Recursos Naturales ruso se reunió en Corea del Norte con el ministro de Relaciones Económicas Exteriores norcoreano para firmar un acuerdo de exploración geológica conjunta en Corea del Norte.

Otra de las cuestiones que generó mayor tensión en la península coreana fue la profundización de la cooperación militar de Corea del Sur con EEUU y Japón, tanto en clave bilateral como trilateral. En cuanto a la alianza trilateral entre Corea del Sur, EEUU y Japón, en agosto se celebró una cumbre en Camp David (EEUU) entre los líderes de los tres países en la que se comprometieron a profundizar su cooperación militar, compartir información de inteligencia, coordinar sus respuestas y políticas respecto de Corea del Norte, y

celebrar anualmente una cumbre del llamado Diálogo Trilateral Indo-Pacífico. Además, en distintos momentos del año (febrero, octubre y diciembre), los tres países llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos, en algunos casos en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Las relaciones entre Corea del Sur y Japón, históricamente afectadas por la anexión de la península coreana al Imperio japonés entre 1910 y 1945, también se vieron notablemente fortalecidas durante el año. Los máximos dirigentes de ambos países, que se reunieron en marzo y mayo en Tokio y Seúl respectivamente, acordaron la compensación de algunas de las víctimas de la época colonial y el reforzamiento de su cooperación militar y una mayor integración de sus respectivos sistemas de defensa.

En cuanto a las relaciones entre Corea del Sur y EEUU, cabe destacar la firma de la llamada Declaración de Washington a finales de abril tras la cumbre entre Joe Biden y Yoon Suk-yeol, en la que ambos mandatarios se

comprometieron, entre otras cuestiones, a fortalecer su histórica alianza en materia de defensa (que en 2024 cumplió su 70° aniversario), a desarrollar las capacidades disuasorias de EEUU en la península, a incrementar la magnitud de los ejercicios militares conjuntos, a desplegar submarinos nucleares en puertos surcoreanos y, especialmente, a crear el llamado **Grupo Consultivo Nuclear**. Dicho grupo, que se reunió en dos ocasiones durante el año, tiene el objetivo conceder un mayor protagonismo al Gobierno surcoreano en la estrategia nuclear de EEUU en la península coreana y de dar salida a la voluntad

expresada en varias ocasiones por Yoon Suk-yeol de que Corea del Sur desarrollara capacidades nucleares propias para hacer frente al programa armamentístico norcoreano. Tras la Declaración de Washington del mes de abril, en dos ocasiones (en junio y diciembre), EEUU envió un submarino nuclear al puerto surcoreano de Busan. Además, durante el 2023 EEUU y Corea del Sur llevaron a cabo algunos de los mayores ejercicios militares (navales, terrestres y aéreos) de los últimos tiempos, destacando especialmente por su magnitud los que se llevaron a cabo en marzo (Freedom Shield), mayo y junio (los de mayor envergadura jamás realizados cerca de la frontera) o agosto (Ulchi Freedom Shield). Finalmente, cabe destacar el incremento de la tensión militar entre Corea del Norte y EEUU a mediados de año. En julio, Corea del Norte amenazó con derribar aviones de reconocimiento estadounidenses que según Pyongyang había cruzado la demarcación fronteriza marítima e incursionado en su zona económica exclusiva, mientras que a mediados de agosto el Gobierno norcoreano desplegó aviones militares en respuesta a lo que consideró una nueva incursión de EEUU en su zona económica exclusiva, tildando dicha acción de provocación militar.

En varias ocasiones
el presidente de
Corea del Sur
expresó su voluntad
de desarrollar
capacidades
nucleares propias
para hacer frente
al programa
armamentístico
norcoreano

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Sistema, Territorio Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

#### Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra— y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental.

En paralelo al incremento de la tensión política y militar entre Corea del Norte y EEUU y al notable desarrollo armamentístico de Corea del Norte durante 2023, varios análisis señalaron que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron su etapa más tensa y delicada de los últimos años. Aunque no se registraron episodios bélicos significativos entre ambos países, Kim Jong Un en varias ocasiones advirtió sobre la posibilidad de una guerra en la península coreana. Además, la suspensión por parte de ambos países en noviembre

de un acuerdo de 2018 sobre la mejora de las relaciones bilaterales obstaculizó cualquier contacto o negociación entre ambas partes y posibilitó un incremento de la militarización y la ocurrencia de episodios bélicos en la frontera terrestre y marítima. Ya en el mes de enero, la tensión se incrementó notablemente después de que el presidente surcoreano, Yoon Sukyeol, advirtiera sobre la posibilidad de desarrollar armamento nuclear propio si

persistía o se incrementaba la amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, señalando que las capacidades científicas y tecnológicas del país permitían augurar un rápido desarrollo de tal armamento. Previamente, Kim Jong Un había prometido un incremento exponencial del armamento nuclear durante 2023 en respuesta a la amenaza que suponían para su país EEUU y Corea del Sur. Además, a finales de enero el Comando de las Naciones Unidas (UNC, por sus siglas en inglés) la misión de la ONU bajo competencia de EEUU que supervisa el armisticio desde 1953- señaló, tras llevar a cabo una investigación, que tanto Corea del Norte como Corea del Sur habían violado el armisticio de 1953 desplegando drones al otro lado de la frontera (a finales de diciembre, Corea del Norte envió cinco de dichos drones al espacio aéreo surcoreano, propiciando que Seúl enviara otro dron a Corea del Norte). Más tarde, en abril las Fuerzas Armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia para expulsar a una patrullera norcoreana que traspasó la Línea Límite Norte (NLL, por sus siglas en inglés), la frontera marítima de facto entre los dos países trazada por el UNC al final de la Guerra de Corea (1950-53). Corea del Sur ha patrullado las aguas alrededor de la NLL desde hace décadas porque Corea del Norte no reconoce la NLL y considera que la frontera se halla en aguas controladas por Corea del Sur. Además, durante el operativo de expulsión del navío norcoreano, un barco patrullero surcoreano colisionó con un barco pesquero chino cercano debido a la mala visibilidad, provocando leves heridas a parte de la tripulación surcoreana.

El episodio de mayor repercusión política del año se produjo a finales de noviembre, cuando la puesta en órbita de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte -tras dos intentos fallidos en 2023fue respondido por Seúl con la reanudación la vigilancia aérea a lo largo de la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) y la suspensión parcial del acuerdo entre ambos países firmado 2018 por Kim Jong Un y el entonces presidente surcoreano Moo Jae In, en un momento de aproximación de posiciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como entre Corea del Norte y EEUU. Al día siguiente, Pyongyang suspendió completamente tal acuerdo -denominado oficialmente la Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península de Corea-, considerado por algunos análisis como la máxima expresión de las perspectivas de alcanzar la reunificación y desnuclearización de la península coreana a través del diálogo. Entre otras

cuestiones, dicho acuerdo preveía la transformación de la DMZ en una zona de paz –cesando por completo desde el 2 de mayo de 2018 todos los actos hostiles en tierra, aire y mar—; el diseño conjunto de un plan para convertir las áreas alrededor de la NLL en el Mar Occidental en una zona marítima de paz con el fin de evitar enfrentamientos militares accidentales y garantizar actividades pesqueras seguras; o la celebración de manera periódica de

reuniones militares al más alto nivel, incluyendo a los ministros de Defensa de ambos países. Además, el acuerdo de 2018 también reafirmaba el Acuerdo de No Agresión –que excluye el uso de la fuerza en cualquier forma entre sí-; instaba a llevar a cabo el desarme de manera gradual, a medida que se aliviara la tensión militar y se lograran avances sustanciales en el fomento de la confianza militar, y confirmaba el objetivo común de lograr una península de Corea libre de armas nucleares. En este sentido, ambos países se comprometían a llevar a cabo activamente reuniones trilaterales con EEUU, o cuadrilaterales con China, con miras a declarar el fin de la guerra y establecer un régimen de paz permanente en la península coreana, así como a impulsar medidas de fomento de la confianza (como el establecimiento de una oficina de enlace conjunta para facilitar el diálogo entre autoridades; la gestión conjunta de cuestiones

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron su etapa más tensa y delicada de los últimos años, según diversos análisis humanitarias y del programa de reunión de familias separadas por la guerra; la participación conjunta en eventos deportivos internacionales; o la conexión y modernización de los ferrocarriles y las carreteras fronterizas).

A finales de año, Kim Jong Un declaró que su Gobierno ya no buscaría ni aceptaría ningún tipo de diálogo acerca de la reunificación y la reconciliación por considerar que Corea del Sur era el principal enemigo del país y que Seúl solamente buscaba la "unificación por absorción". El líder norcoreano ordenó la eliminación de los símbolos de la reconciliación intercoreana -a modo de ejemplo, exigió derribar un monumento en honor a la búsqueda de la reunificación en Pyongyang-, así como la abolición de conceptos como 'reunificación', 'reconciliación' y 'compatriotas' de la historia nacional. En la misma línea, Corea del Norte también cortó las vías ferroviarias transfronterizas y abolió las agencias gubernamentales de gestión de las relaciones y el diálogo con Corea del Sur. Además, Kim Jong Un también pidió a la Asamblea legislativa reescribir la Constitución de Corea del Norte para especificar que el país buscará "ocupar, subyugar y reclamar" Corea del Sur como parte del territorio de Corea del Norte si estalla otra guerra en la península coreana, y declaró que las Fuerzas Armadas aniquilarían completamente a EEUU y Corea del Sur si Corea del Norte era provocada. De hecho, en su habitual discurso a finales de año con motivo del congreso del Partido de Trabajadores, el líder norcoreano señaló que la guerra en la península podía estallar en cualquier momento.

## Sudeste asiático

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social, grupos indígenas papús

#### Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

En 2023 siguieron registrándose numerosos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el grupo armado de oposición OPM, así como denuncias de importantes violaciones de derechos humanos en el marco de la estrategia de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas y acusaciones al OPM de ataques contra población civil. Según datos oficiales del Gobierno, a lo largo de 2023, hubo 209 incidentes de violencia política en Papúa, en los que 79 personas murieron, entre ellas 37 civiles, 20 soldados y tres policías y 19 miembros de grupos armados. Según estos mismos datos, la cifra de víctimas mortales se incrementó respecto del año anterior, en la que registraron 53. Sin embargo, según otras fuentes la intensidad del conflicto fue superior. El centro de investigación ACLED señaló que en 2023 se registraron 187 eventos de violencia política, que provocaron 152 víctimas mortales, un número notablemente superior al del año 2022, en el que se registraron 81 víctimas mortales en 104 episodios de violencia. En 2022, las dinámicas de violencia ya habían registrado un incremento cuantitativo importante respecto de los años anteriores. En tal año, por ejemplo, murieron un número de civiles (43) claramente superior al de los dos años precedentes (27 y 28 respectivamente). Según las autoridades, la zona de Papúa que en 2023 experimentó un mayor número de incidentes de violencia fue la regencia de Yahukimo, en la provincia de Alta Papúa (o Papúa de las Tierras Altas). Según varias organizaciones de derechos humanos, en septiembre de 2023 había más de 76.000 personas desplazadas internas a causa del conflicto, una cifra notablemente superior a las 60.000 que se estima había a principios de año. En marzo de 2022, Naciones Unidas afirmó que entre 60.000 y 100.000 papúes occidentales habían tenido que abandonar de manera forzada sus hogares desde 2018. Las dinámicas del conflicto en 2023 están en consonancia con las tendencias observadas desde el año 2018. Aunque en los años anteriores ya se había observado un incremento en el número de incidentes protagonizados por la insurgencia (de 11 en 2010 a 52 en 2017), varios análisis sostienen que el punto de inflexión se produjo en 2018, primero con la declaración de guerra al Estado indonesio por parte del OPM –que también llamó a incrementar las acciones contra empresas extranjeras que operan en Papúa- y posteriormente con el asesinato de 19 trabajadores de la construcción en diciembre de 2018 en la regencia de Nduga (provincia de Alta Papúa). Según dichos análisis, desde entonces se ha observado un incremento en el número, frecuencia, sofisticación, letalidad y alcance territorial de las acciones armadas del OPM, que históricamente se limitaban en gran medida a las tierras altas centrales de la región (especialmente en los distritos o regencias de Puncak Jaya y Mimika, en la provincia de Papúa Central, y Lanny Jaya, en la provincia de Alta Papúa) y que se han expandido a zonas tradicionalmente menos afectadas por la insurgencia, como Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, Deiyai y Keerom.

En cuanto a los episodios de violencia en 2023, uno de los eventos con mayor repercusión política fue el ataque a principios de febrero por parte del OPM contra una avioneta indonesia que había aterrizado en la regencia de Nduga y el posterior secuestro de sus cinco pasajeros indonesios y un piloto neozelandés. Los pasajeros fueron inmediatamente liberados, pero el OPM mantuvo rehén al piloto (a finales de 2023 no había sido liberado) y exigió públicamente al Gobierno que reconociera la soberanía de Papúa y pusiera fin al colonialismo indonesio en la región y a varios países que dejaran de vender armas y formar a las Fuerzas Armadas indonesias. La avioneta en cuestión, que fue incendiada, transportaba material para la región de Timika (donde opera una de las minas de oro y cobre más grandes del mundo) y trataba de evacuar a 15 trabajadores de la construcción que habían sido amenazados de muerte por parte del OPM, y que fueron rescatados por las Fuerzas Armadas al día siguiente del ataque al avión. A mediados de abril, el OPM declaró haber matado a 15 soldados en la regencia de Nduga durante una emboscada a un contingente militar en tareas de rescate del piloto neozelandés secuestrado, aunque días más tarde el Gobierno reconoció la muerte de solamente cinco militares. En otro incidente de violencia significativo ocurrido a principios de octubre, el Ejército declaró que cinco rebeldes murieron durante un operativo militar en la región montañosa de Serambakon, en la provincia de Alta Papúa. Días más tarde, a mediados de octubre, el Gobierno declaró que siete personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras un ataque del OPM a una mina ilegal de oro en Serdala, en la regencia de Yahukimo. El OPM declaró que los trabajadores de la mina eran espías de las Fuerzas Armadas y que previamente al ataque había advertido a la población civil que abandonara la zona. A finales de agosto, dos trabajadores murieron y otros siete resultaron heridos tras un ataque del OPM a una mina de oro en la regencia de Pegunungan Bintang.

En este sentido, el Gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento de las amenazas y ataques del OPM contra civiles en los últimos años. Cabe destacar especialmente el asesinato de la activista Michelle Kurisi a finales de agosto en la regencia de Lanny Java (provincia de Tierras Altas), reivindicado por el OPM en un comunicado en el que alegó que la víctima había colaborado con las fuerzas de seguridad y había participado en actividades de espionaje, incluida información relacionada con la liberación del piloto neozelandés secuestrado. A mediados de agosto, el Gobierno declaró que tres personas (dos ellas trabajadores gubernamentales) murieron tras un ataque del OPM contra el camión en el que viajaban, en la regencia de Nduga. Por otra parte, en varios momentos durante el año, el OPM advirtió que los ciudadanos extranjeros en la región podían ser objetivo de las acciones del grupo y anunció su intención de incrementar sus ataques contra determinados aviones que aterrizaran en la región. Durante el año, además del mencionado ataque a mediados de febrero, el

OPM Ilevó a cabo varios ataques contra aviones. En marzo, las aerolíneas indonesias Wings Air y Trigana Air suspendieron sus operaciones en el aeropuerto de la regencia de Yahukimo (provincia de Alta Papúa), tras ser atacada por parte del OPM una aeronave con 66 pasajeros a bordo. En abril, el OPM disparó contra una avioneta que aterrizaba en la regencia de Intan Jaya (provincia de Papúa Central). En julio, el OPM atacó a un avión que transportaba personal militar en el aeropuerto de Pogapa, en la misma regencia de Intan Jaya.

Por otra parte, tanto el OPM como organizaciones locales e internacionales de derechos humanos denunciaron el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental durante el 2023 e instaron al Gobierno y a la comunidad internacional a revertir tal situación. El 5 de mayo de 2023, cinco Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas iniciaron una comunicación con el Gobierno de Indonesia sobre casos de violencia, incluidas ejecuciones extrajudiciales en Papúa Occidental. Más tarde, a principios de julio, la Asesora Especial del secretario general de la ONU para la Prevención del Genocidio, expresó en el seno Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su preocupación por la situación de los derechos humanos en Papúa, destacando prácticas como el acoso, el arresto arbitrario o la apropiación de tierras, y alentando al Gobierno de Indonesia a garantizar la asistencia humanitaria. En agosto, varias organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno que, en su intento de ser elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2024 a 2026, asumiera algunos compromisos en materia de derechos humanos, como cooperar plenamente con los Procedimientos Especiales del Consejo, erradicar la impunidad, garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, permitir el acceso a la región a periodistas extranjeros y observadores internacionales, ratificar varios instrumentos internacionales en la materia - especialmente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ICPPED). En este sentido, también a mediados de agosto, una organización de derechos humanos con sede en Alemania, Human Rights Monitor, señaló que las Fuerzas Armadas podrían haber cometido crímenes contra la humanidad en las operaciones de contrainsurgencia que llevaron a cabo en septiembre y octubre de 2021 en el distrito de Kiwirok, y en las que utilizaron helicópteros, drones y armamento pesado. En cuanto a eventos específicos del año 2023, tanto el OPM como algunas organizaciones de derechos humanos acusaron al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de importantes violaciones de los derechos en la región. En finales de febrero, nueve personas murieron y otras 14 resultaron heridas en la ciudad de Wamena (la mayor de la provincia de Tierras Altas) durante un operativo policial y militar para dispersar las protestas provocadas por los rumores sobre el secuestro de un menor. En septiembre, cinco menores aparentemente asesinados con disparos fueron

hallados en la desembocadura del río Brasa, en Dekai, capital de la regencia de Yahukimo (provincia de Tierras Altas). Aunque el Ejército señaló que su muerte se produjo en el marco de un enfrentamiento con el OPM, este grupo declaró que las personas fallecidas eran civiles y no miembros de su grupo. En la misma línea, algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que unas 20 personas resultaron heridas durante una manifestación en Jayapura -la ciudad más grande de toda Papúa Occidental- con motivo del 61º aniversario del Acuerdo de Nueva York en 1962, que posibilitó la posterior anexión de Papúa a Indonesia. Según estas mismas organizaciones, decenas de personas fueron detenidas en 2023 durante las numerosas manifestaciones que se produjeron en toda Papúa en favor de la autodeterminación de la región y en contra de las violaciones de derechos humanos en Papúa.

# 2.3.3.2 El Pacífico

Papúa Nueva Guinea	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Identidad, Recursos, Territorio, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, milicias comunitarias, Gobierno de Bougainville

#### Síntesis:

En las últimas décadas, se han registrado altos niveles de tensión y violencia intercomunitaria, clánica y tribal en varias regiones de Papúa Nueva Guinea, un país conformado por más de 600 islas y con una gran diversidad cultural (se hablan más de 850 lenguas). La mayor parte de tal violencia intercomunitaria, que afecta especialmente a provincias como Enga, Hela, Southern Highlands y Western Highlands, está vinculada a conflictos por la tenencia de la tierra -que en un porcentaje muy elevado se regula a través del derecho consuetudinario-, aunque históricamente también se han registrado episodios de violencia relacionados con otras cuestiones, como el control de los recursos, las rivalidades familiares o clánicas o las acusaciones de brujería y magia negra, que han provocado la muerte de decenas de personas. Las tensiones comunitarias se agudizan en periodos electorales (tal y como sucedió en 2022) y cada vez se tornan más letales por el creciente acceso a armas de fuego. Además, las regiones más afectadas por la violencia intercomunitaria se cuentan entre las que sufren mayores tasas de pobreza, menores niveles de educación formal y ausencia y fragilidad de instituciones vinculadas a la seguridad, la aplicación de la ley y el acceso a la justicia o la resolución de conflictos.

Durante el 2023 se registró un incremento significativo de la violencia comunitaria, clánica y tribal en varias partes del país, especialmente en la provincia de Enga, en la región de Tierras Altas. Según ACLED, en dicha provincia se registró la muerte de 208 personas, una cifra claramente superior a las del año 2022 (58) y 2021(52). Sin embargo, algunas fuentes sostienen que tal cifra es más cercana a las 300 víctimas mortales. Cabe destacar especialmente los enfrentamientos

tribales que se registraron durante todo el mes de agosto, y que según varios medios de comunicación provocaron la muerte de unas 150 personas. Otros de los episodios de violencia comunitaria más importantes en la provincia de Enga se registraron en enero -cuando milicias de las comunidades sangu, mun y malee atacaron el municipio de Tole, matando a 11 personas y secuestrando a otras 11-, marzo -cuando 44 personas murieron como consecuencias de los enfrentamientos entre clanes pyakaili-, junio -los enfrentamientos clánicos en la región de Wapenamanda provocaron a muerte de 10 personas-, julio -los enfrentamientos entre tribus kaekin y sikin contra las comunidades ambulin, antiokon, lungupin y saus provocaron la muerte de 15 personas-, noviembre -cuando los enfrentamientos entre los clanes maimai y pokale provocaron la muerte de un número desconocido de personas y la declaración de los distritos de Wapenamanda y Wabag como zonas de guerra, con medidas como el toque de queda- o diciembre -los episodios de violencia entre una quincena de tribus y los clanes sau walep y itiokon neninein provocaron la muerte de una treintena de personas. En otras provincias aledañas de la misma región de Tierras Altas también se registraron episodios de violencia comunitaria durante el 2023, que según ACLED provocaron la muerte de otras 44 personas. Según este mismo centro de investigación, en el conjunto del país se registró la muerte de 347 personas en brotes de violencia política y comunitaria. Según la Policía, aunque en determinadas regiones del país ha habido históricamente enfrentamientos de raíz clánica y tribal, los altos niveles de violencia y mortalidad que se han observado en los últimos años están relacionados con el desarrollo y resultado de las elecciones del 2022 y con el mayor acceso a armamento sofisticado. En cuanto al primer factor, la Policía señaló que, aún si se suele observar un incremento de la violencia en periodos electorales, en las elecciones del pasado año sí hubo una mayor alineación de determinadas comunidades con determinados candidatos locales, detección de prácticas de clientelismo y rumores y acusaciones de secuestro de urnas y fraude y soborno en el escrutinio de votos. En cuanto al segundo factor, el Gobierno declaró que si bien los episodios de violencia en el pasado se habían llevado a cabo con armas muy rudimentarias, en los últimos tiempos se había observado un mayor uso de armamento de fuego automático y sofisticado. Además, las autoridades regionales también declararon el creciente uso de "mercenarios" o de personas foráneas a la zona de conflicto que habían sido contratadas para participar en determinados ataques -en este sentido, la Policía registró la muerte de como mínimo 20 de estas personas no locales que habían participado en la espiral de violencia en Enga. En este sentido, las autoridades también señalaron que el aumento del tráfico de drogas procedente de Indonesia también podría ser un factor en el aumento de la violencia y en la participación de mercenarios externos a sueldo. Además, las autoridades pusieron el acento sobre otros factores para explicar la dificultad para prevenir y poner fin a los episodios de violencia comunitaria, como la dispersión geográfica de la población, el difícil acceso a determinadas regiones o, especialmente, la falta de policías (en Enga, hay unos 200 efectivos policiales para una población de unas 300.000 personas). Por su parte, el Gobierno desplegó efectivos policiales adicionales en Enga y se comprometió a hacer las reformas legislativas necesarias para dotar a las fuerzas de seguridad del Estado con los recursos y las competencias necesarias para hacer frente a lo que calificó de "terrorismo doméstico". En el plano político, los altos niveles de violencia provocaron numerosas críticas por parte de la oposición, así como la retirada de apoyo parlamentario al Gobierno por parte de varios partidos que hasta entonces habían conformado la coalición gubernamental.

# 2.3.4. Europa

# **Europa Oriental**

Belarús	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición social y política, UE, Polonia, Letonia, Lituania, EEUU, Ucrania, OTAN, Rusia

#### Síntesis:

La exrepública soviética de Belarús alcanzó independencia en 1991, convirtiéndose en una república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Con una economía centralizada, heredera de la etapa soviética, y dependiente energéticamente de Rusia, Belarús ha oscilado entre relaciones de alianza estratégica con Rusia y una política de afirmación de la soberanía nacional que le ha reportado etapas de crisis con su país vecino. El régimen de autoritarismo político y de vulneración de derechos humanos ha dejado escaso margen para la oposición política y social al tiempo que ha sido motor de tensión de baja intensidad. En 2020 la reelección de Lukashenko generó movilizaciones antigubernamentales masivas. La represión masiva del régimen a las movilizaciones desencadenó una grave crisis política y social. La guerra en Ucrania -desencadenada por la invasión de Rusia en 2022, incluyendo a través del despliegue de tropas rusas desde Belarús- incrementó la tensión en Belarús y entre esta y Ucrania y actores occidentales.

Se mantuvo elevada la tensión, con la continuación de la represión desencadenada desde la grave crisis electoral de 2020, y un incremento de la militarización en el país, influida por la guerra en Ucrania y la tensión entre Rusia y actores euroatlánticos. En enero el Ministerio de Defensa del país anunció la llegada de más tropas,

armamento y equipamiento, lo que incrementó alertas a principios de año sobre riesgos de un nuevo frente de guerra en Ucrania si Rusia atacaba desde Belarús -como hizo al inicio de la invasión en 2022-, pero que no se concretó. En todo caso, en 2023 Belarús siguió acogiendo tropas rusas y campos de entrenamiento para estas, con estimaciones dispares sobre la cifra de tropas, con entre un millar y varios miles de tropas. Asimismo, en enero el Ejército bielorruso llevó a cabo ejercicios militares conjuntos con Rusia en territorio de Belarús. Por su parte, Ucrania siguió denunciando el uso del espacio aéreo de Belarús por parte de Rusia para el lanzamiento de ataques con drones y con misiles. Asimismo, el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, ordenó en febrero la creación de una fuerza territorial de defensa, con voluntarios y que, según el Ministerio de Defensa, tendrá entre 100.000 y 150.000 miembros. Lukashenko, advirtió de que en caso de agresión, el país respondería de manera severa y rápida. En paralelo, en abril Belarús solicitó a Rusia garantías de seguridad. Asimismo, Belarús y Rusia anunciaron en junio el primer despliegue de armas nucleares "tácticas" de Rusia en Belarús. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en julio de que cualquier ataque contra Belarús equivaldría a atacar a la Federación rusa.

Por otra parte, tras el levantamiento armado fallido del Grupo Wagner en Rusia en junio, su líder, Yevgeny Prigozhin, y miles de sus mercenarios marcharon a Belarús, en el marco de las condiciones impuestas por el Kremlin al grupo, con supuesta intermediación de Lukashenko. Ucrania cifró en unos 5.000 los combatientes del Grupo Wagner en Belarús en julio. Algunos análisis señalaron que su llegada causó tensión social y cierta oposición, incluso en las Fuerzas Armadas del país.69 El Ministerio de Defensa de Belarús y el propio grupo informaron de entrenamientos militares conjuntos cerca de la frontera con Polonia en julio. En todo caso, algunos análisis señalaron que tras la muerte de Prigozhin en agosto,70 la presencia de efectivos de Wagner se redujo de forma significativa y algunos medios de comunicación cifraron en un millar el número de mercenarios del grupo a principios de 2024.

En paralelo, se incrementó la tensión política y militar entre Belarús, por un lado, y Polonia, Lituania y Letonia, por otro. La llegada a Belarús de combatientes del Grupo Wagner, así como los ejercicios militares conjuntos cerca de la frontera con Polonia, fue respondida con despliegue de fuerzas militares junto a la frontera de Belarús por parte de Polonia —con en torno a un millar de efectivos, según algunos medios de comunicación— y de Letonia. Polonia advirtió de que el país estaba preparado para diferentes escenarios y que podrían cerrar la frontera con Belarús y con el enclave de Kaliningrado en caso de incidentes críticos.

<sup>69.</sup> Harhalyk, Tatsiana. "What are Wagner Group mercenaries still doing in Belarus?". DW, 25 de enero de 2024.

<sup>70.</sup> El líder del Grupo Wagner murió en agosto al estrellarse el avión en que viajaba, en el que fallecieron diez personas. La muerte de Prigozhin fue atribuida al régimen ruso en numerosos análisis.

En diversas ocasiones Polonia y Belarús se acusaron de violaciones de sus respectivos espacios aéreos. Lituania cerró dos pasos fronterizos con Belarús en agosto y revocó los permisos de residencia a 910 ciudadanos de Belarús y a otros 254 de Rusia bajo consideraciones de amenaza a la seguridad nacional. Asimismo, población migrante fue objeto de instrumentalización, violencia y deshumanización en el marco de la disputa entre Belarús y Polonia, Lituania y Letonia. Polonia desplegó tropas adicionales, expulsó a personas migrantes y esgrimió la narrativa securitaria de que Belarús empujaba a migrantes con fines de desestabilización de Polonia. HRW denunció que las autoridades polacas llevaban a cabo expulsiones sumarias ilegales, en ocasiones con violencia, de migrantes y solicitantes de asilo que llegaban desde Belarús. Además, según denunció HRW, migrantes, incluyendo menores, permanecían atrapados en la frontera bielorrusa y afrontaban graves vulneraciones de derechos humanos por parte de agentes bielorrusos así como riesgo de muerte.1 El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González Morales, publicó en mayo un informe resultante de su visita a Belarús en 2022 y de su evaluación de la situación de derechos de las personas migrantes en la frontera entre Belarús y Polonia, en el que concluyó que la situación en dicha frontera reflejaba la crisis geopolítica en la región y condenó la instrumentalización política de las personas migrantes.<sup>72</sup>

Por otra parte, en relación con la disputa entre el régimen y sectores de la población en torno a derechos y libertades políticas y civiles, 1.500 personas continuaban encarceladas en 2023 con acusaciones motivadas políticamente, según el informe anual de HRW.73 La cifra incluía a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, sindicalistas, opositores políticos, entre otras. Según HRW, de manera creciente las autoridades sometieron a las personas presas a un régimen de incomunicación, tortura y otras formas de malos tratos. Entre otros muchos hechos de persecución durante el año, el Tribunal Supremo ordenó en agosto la disolución del partido Frente Popular de Belarús y el Partido Cívico Unido. En conjunto, según algunos análisis, las autoridades habían disuelto todos los partidos opositores y algunos pro-régimen, y a finales de año de 11 partidos políticos el número se había reducido a cuatro.74 En noviembre Lukashenko anunció elecciones parlamentarias y locales para febrero de 2024. A través de un cambio introducido en la Constitución en 2022, también estaba prevista para 2024 la creación de una Asamblea Popular de Belarús, un nuevo órgano que tendrá autoridad sobre todas las ramas del Gobierno.75

Moldova		
Intensidad:	2	
Evolución:	<b>↑</b>	
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada	
Actores:	Gobierno, oposición Rusia, UE, Ucrania, OTAN	política,

#### Síntesis:

Moldova se proclamó república independiente en 1991, en el contexto de disolución de la URSS. Históricamente, su territorio actual a la izquierda del río Dniéster formó parte del principado medieval de Moldavia -integrado también por áreas de la actual Rumanía y Ucrania. Atravesó etapas bajo control de diferentes poderes, incluyendo el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, Rumanía y la URSS. Durante la II Guerra Mundial y tras el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi, la Rusia soviética estableció la RSS de Moldova en 1940 (que pasaría a ser una más de las 15 repúblicas socialistas soviéticas que formaron parte de la URSS) uniendo parte de la región histórica de Besarabia y Transnistria -franja territorial al este del río Dniéster y anteriormente parte de una región autónoma de la RSS de Ucrania. La actual Moldova, país de 2,6 millones de habitantes y una tasa de pobreza absoluta del 24,5% (2021), es escenario de tensión en diferentes ámbitos entrecruzados. Por una parte, mantiene un conflicto no resuelto en torno al estatus de Transnistria, área de mayoría rusoparlante, independiente de facto desde 1992, apoyada por Rusia y reconocida internacionalmente como parte de Moldova. Por otra parte, el país se ha visto afectado por etapas de inestabilidad y división política, incluyendo en relación con la orientación del país en política exterior, así como por graves problemas de corrupción. Ha mantenido neutralidad respecto a la OTAN, junto a una relación de cooperación con la alianza militar. En diferentes etapas se ha incrementado la tensión entre Rusia y Moldova, incluyendo en la esfera energética, en la que tradicionalmente Moldova ha dependido del gas ruso. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la tensión e incertidumbre en la vecina Moldova por los riesgos de extensión del conflicto.

Continuó la situación de tensión multidimensional, incrementada desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania en 2022. La situación de crisis incluyó durante el año alertas en el Gobierno y actores internacionales aliados, como Ucrania, la UE y EEUU, sobre riesgos de acciones hostiles de Rusia contra Moldova; medidas gubernamentales contra actores locales políticos y medios de comunicación considerados pro-rusos; advertencias de Rusia al país; y medidas hostiles entre ambos, como la expulsión de diplomáticos. A su vez, actores locales como algunas ONG expresaron preocupación por riesgos de vulneraciones de derechos humanos como la libertad de expresión ante medidas del Gobierno de cierre de medios de comunicación considerados pro-rusos. Por otra parte, Moldova denunció en febrero dos violaciones del espacio aéreo por misiles rusos disparados desde

<sup>71.</sup> Human Rights Watch. "Belarus", en World Report 2024, HRW, 2024.

<sup>72.</sup> Consejo de Derechos Humanos. Visita a Belarús. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales. A/HRC/53/26/Add.2, 18 de mayo de 2023.

<sup>73.</sup> Human Rights Watch. "Belarus", en World Report 2024, HRW, 2024.

<sup>74.</sup> Shraibman, Artyom. "Belarus Gears Up for Elections and Powerful New People's Assembly". Carnegie, 14 de noviembre de 2023.

<sup>75.</sup> Ibid.

el Mar Negro y dirigidos contra Ucrania, e impactos de fragmentos de misiles rusos en su territorio.

En febrero de 2023, la presidenta moldava, Maria Sandu, denunció en base a información de inteligencia compartida por Ucrania, planes de Rusia de un golpe de Estado en Moldova mediante individuos con experiencia militar de Rusia, Belarús, Serbia y Montenegro que se infiltrarían como civiles y tomarían edificios gubernamentales. Según Sandu, el intento de golpe preveía contar con apoyo de grupos locales como el partido opositor pro-Kremlin Shor -liderado por el magnate y político Ilan Shor, sentenciado en abril de 2023 *in absentia* por fraude masivo en el sistema bancario en 2014 (caso en el marco del cual se condenó a otros actores económicos y políticos de diferente signo). En los últimos meses de 2022 ya se habían incrementado los temores de riesgo de injerencias externas de la mano de las protestas antigubernamentales organizadas por el partido Shor en septiembre y que se prolongaron a 2023 y en la que se reclamó la dimisión del Gobierno y la presidenta moldava. Entre otras medidas, Moldova denegó la entrada al país a un equipo de boxeadores de Montenegro y en marzo realizó diversas detenciones. La Policía moldova también advirtió en junio que los servicios de inteligencia rusos estaban utilizando las protestas promovidas por el partido Shor para desestabilizar el país. Rusia negó las alegaciones sobre un plan contra el Gobierno moldavo. Las protestas en los primeros meses de 2023 tuvieron alcance limitado, con la participación de entre algunos cientos y algunos miles de personas, incluyendo personas pensionistas contrarias al alza de precios. Se produjeron protestas también, con participación reducida, contra el cambio del nombre oficial del idioma del país, de "moldavo" a "rumano". Esta modificación se adoptó en marzo, a través de un proyecto de ley promovido por el Gobierno y aprobado en segunda lectura con 58 votos de los 101 escaños parlamentarios. Algunos analistas lo señalaron como una medida errónea y que enviaba una señal negativa para la población que se identifica como moldava.76

Por otra parte, el Tribunal Constitucional de Moldova ordenó en junio la disolución del partido opositor proruso Shor, al considerarlo inconstitucional, en una sentencia que determinaba que el partido actuaba contrario a los principios del estado de derecho y que suponía una amenaza a la soberanía e independencia del país, 77 decisión ratificada por el tribunal en septiembre, en dictamen final e inapelable. El líder del partido, llan Shor, anunció en junio la creación de un nuevo bloque político, "Şansă, Obligaţii, Realizări" (S.O.R, por sus siglas en moldavo), que aglutinase a diversos partidos, ante el ciclo electoral entrante (elecciones locales de noviembre de 2023, presidenciales de 2024

y parlamentarias de 2025). A su vez, las elecciones a gobernador de la región de Gagauzia de abril de 2023 habían otorgado el triunfo en segunda ronda (mayo) a la candidata del partido Shor, Eugenia Gutul.

Por otro lado, Moldova ordenó en julio la salida del país de 18 diplomáticos rusos del cuerpo diplomático de la Embajada rusa y de otras 27 personas del cuerpo técnico, con lo que solo permanecerán 10 diplomáticos y 15 técnicos (nota para traducción: en el original salía mencionado como "technical personnel"). Con relación a la decisión, Moldova alegó acciones hostiles de Rusia. La expulsión se produjo tras la publicación de una investigación periodística que identificó 28 antenas en los edificios diplomáticos rusos en el país, ubicados junto a la sede de la Presidencia, el Parlamento y el Gobierno moldavos. En respuesta, Rusia anunció la prohibición de entrada al país de 20 representantes de Moldova.

En los comicios locales de noviembre, el partido gubernamental PAS ganó en torno al 40% de los votos, pero no obtuvo la victoria en grandes localidades, como la capital, donde Ion Ceban -del partido Miscarea Alternativa Nationala (MAN)- resultó reelegido. Una semana antes de las elecciones locales, las autoridades de Moldova suspendieron las licencias de seis canales de TV propiedad o afiliados a Ilan Shor y Vladimir Plahotniuc -oligarca y ex líder del Partido Demócrata, huido del país en 2019, acusado de corrupción, incluyendo en el fraude masivo de 2014-, y también bloquearon 31 portales de internet -Tass e Interfax, entre otros. El Servicio de Información y Seguridad (ISI) les acusaba de difundir información falsa y el Gobierno enmarcó el cierre en la respuesta a lo que considera guerra híbrida de Rusia contra Moldova. Diversas ONG de Moldova (Centre for Independent Journalism, the Electronic Press Association, RISE Moldova, Access-Info Centre, entre otras) expresaron preocupación por las medidas ante lo que consideraron como falta de explicaciones suficientes sobre las circunstancias legales y de hechos que justificasen la suspensión. Además, días antes de los comicios la Comisión Nacional de Situaciones de Emergencia excluyó de estos al partido Şansă -partido integrante del bloque S.O.R., anteriormente conocido como "Ai Nostri", creado en 2020 y renombrado como Sansă coincidiendo con la creación del bloque S.O.R., en el que se integró. Su exclusión impidió la concurrencia de 652 candidatos. La OSCE señaló que las elecciones transcurrieron en calma, que la mayoría de los y las candidatas pudieron realizar sus campañas con libertad, pero que los amplios poderes de la Comisión Nacional de Situaciones de Emergencia fueron usados para restringir la libertad de expresión y asociación y la libertad de presentarse a elecciones.<sup>78</sup> La misión también señaló que interferencias externas

<sup>76.</sup> De Waal, Thomas. "Time to Get Serious About Moldova", Carnegie Europe, 11 de mayo de 2023.

<sup>77.</sup> Novaya Gazeta Europe. "Moldova: pro-Russian Şor Party ruled unconstitutional", Novaya Gazeta, 19 de junio de 2023.

<sup>78.</sup> OSCE. "Moldova's elections peaceful and efficient, but marred by sweeping restrictive measures amid national security concerns: international observers", OSCE, 6 de noviembre de 2023.

y denuncias de compra de votos durante la campaña fueron elementos de preocupación. Por otra parte, la UE estableció en abril una nueva misión civil en Moldova (Misión de Cooperación de la UE en la República de Moldavia, EUPM Moldavia), en respuesta a petición de apoyo de Moldova, con el objetivo de "reforzar las estructuras de gestión de crisis" y su resiliencia ante las "amenazas híbridas", incluyendo ciberseguridad, manipulación de información e injerencias de "agentes externos". En diciembre la UE aprobó el inicio de negociaciones para la adhesión de Moldova -país que recibió el estatus de país candidato en 2022. Ese mismo mes, el Parlamento moldavo aprobó -con el apoyo de 59 votos de un total de 101 escaños- una nueva estrategia de seguridad nacional que identifica a Rusia como amenaza, y que reemplaza a la anterior, de 2011. Durante el año se mantuvo elevada también la tensión en torno a la disputa con la región de Transnistria.<sup>79</sup>

Moldova (Transnistria)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transdnistria, Rusia, Ucrania

#### Síntesis:

Transnistria, un territorio de 4.000 km² y medio millón de habitantes, con mayoría de población rusoparlante, legalmente bajo soberanía de Moldova y de facto independiente, es escenario desde los años noventa de un conflicto no resuelto en torno a su estatus. El conflicto emergió en la etapa final de la URSS, cuando se incrementaron los temores en Transnistria sobre una posible unificación entre una Moldova independiente y Rumanía -ambas con vínculos históricos y culturales-. Transnistria rechazó la soberanía de Moldova y se declaró independiente de esta. Se asistió a una escalada de incidentes, que derivaron en un conflicto armado en 1992. Un acuerdo de alto el fuego ese mismo año puso fin a la guerra y dio paso a un proceso de paz, con mediación internacional. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio defensa de la integridad estatal y aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transnistria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transnistria. La cuestión de Transnistria es uno de los ejes de tensión en un escenario de fragilidad más amplio en Moldova, exrepública soviética, uno de los países más pobres de Europa y afectado por divisiones políticas en el eje pro-UE y pro-Rusia y por problemas históricos de corrupción. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 incrementó la incertidumbre en la región de Transnistria y en el conjunto de Moldova, fronterizas con Ucrania.

Se mantuvo elevada la tensión en la región de Transnistria, influida por la situación de guerra en la vecina Ucrania y los riesgos de extensión del conflicto.

En febrero Rusia amenazó con un escenario militar como el de Ucrania en Transnistria en caso de que Moldova intentase resolver por la fuerza la disputa sobre el estatus de la región y advirtió a Moldova contra los llamamientos de esta a la "desmilitarización" de la región. Además, en una retórica que recordaba a la utilizada por Rusia en Ucrania para justificar la invasión, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió de que defenderían a la ciudadanía de Rusia que vive en Moldova en caso de cualquier riesgo procedente de Moldova, EEUU o la UE. En la presentación en febrero de las prioridades del nuevo Gobierno, el nuevo primer ministro moldavo, Dorin Recean, había señalado en relación con Transnistria la retirada de las tropas rusas de la región y la desmilitarización de la franja. Según analistas, otros elementos prioritarios para el Gobierno incluían la búsqueda de una solución diplomática que permita la recuperación de la soberanía plena de Moldova sobre Transnistria. El Gobierno moldavo instó a la calma ante las advertencias de Rusia sobre un posible escenario militar. Por otra parte, Rusia revocó en febrero un decreto de 2012 que recogía el concepto de política exterior rusa de entonces y en que se explicitaba el compromiso de Rusia de buscar maneras de resolver la cuestión de Transnistria sobre la base del respeto a la soberanía, la integridad territorial y el estatus de neutralidad de Moldova, y en el que también se sugería el desarrollo de relaciones de proximidad con EEUU y la UE. En marzo Moscú presentó su nuevo concepto de política exterior, con relación al cual el liderazgo de Transnistria destacó la cláusula de apoyo a la seguridad de los aliados de Rusia.

Otros momentos de tensión durante el año incluyeron las denuncias de las autoridades de Transnistria en marzo sobre un supuesto plan de Ucrania de asesinar a representantes de la región mediante un atentado con coche bomba junto a una comitiva presidencial en la capital. El Kremlin acusó a Ucrania de estar preparando provocaciones como parte de un plan para invadir la región. El Gobierno de Moldova y medios de comunicación señalaron la falta de evidencias de las denuncias. Ucrania rechazó las acusaciones, que calificó de provocaciones dirigidas por Moscú. Por otra parte, Moldova expresó preocupación por unas maniobras militares en abril no anunciadas con antelación y llevadas a cabo por el contingente ruso de las fuerzas de mantenimiento de paz en Transnistria y que, según Moldova, habrían incumplido los términos del régimen que regula la llamada zona de seguridad. Rusia mantiene en Transnistria en torno a 1.500 tropas, una parte de ellas en el marco de las fuerzas trilaterales de mantenimiento de la paz (Moldova, Transnistria, Rusia) y otra parte como miembros del Grupo Operativo de Fuerzas Rusas (OGRF, por sus siglas en inglés), estas últimas consideradas ilegales por Moldova. Por su parte, también Moldova llevó a cabo ejercicios militares cerca de Transnistria, en diciembre.

<sup>79.</sup> Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en este capítulo.

# La reforma del código penal por parte de Moldova, con enmiendas aprobadas por el Parlamento en febrero, fue otra área de confrontación entre las partes en conflicto.

Los cambios aprobados prevén sanciones en casos de financiación e incitación al "separatismo", conspiración contra Moldova u obtención o robo de información que pueda dañar la soberanía, independencia e integridad del país. A lo largo del año, las autoridades de Transnistria criticaron la reforma y denunciaron la falta de garantías para sus representantes. En respuesta a una petición de la Misión de la OSCE en Moldova, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) se pronunció sobre la reforma, advirtiendo de que tipificar el "separatismo" como delito criminal tenía el riesgo de criminalizar la mera expresión de ideas y podía ser usado como pretexto para suprimir la movilización pacífica u opiniones sobre diferentes arreglos territoriales, autonomía o incluso independencia. En su pronunciamiento incluía también una serie de recomendaciones.80 En el plano interno de Transnistria, en julio murió asesinado un destacado líder opositor político de Transnistria, Oleg Khorzhan, líder del Partido Comunista en Transnistria desde 2004, miembro del Parlamento de la región entre 2010 y 2019, crítico con las autoridades locales y encarcelado entre 2018 y 2022. ONG de derechos humanos de Moldova instaron al Gobierno moldavo a investigar su muerte. Moldova, a su vez, solicitó el apoyo de la OSCE para investigar el caso.

Por otra parte, durante el año diversos análisis alertaron sobre los desafíos que afrontan Moldova y Transnistria en el nuevo contexto abierto desde la guerra en Ucrania. Entre otros, a finales de 2023, Transnistria continuaba siendo dependiente del gas de Rusia para su población y su economía, pero estaba en duda la continuidad futura del contrato entre Rusia y Ucrania de tránsito de gas, que expira en diciembre de 2024. Algunos análisis señalaron que la finalización de este acuerdo o la falta de alternativas podría generar shock económico y una crisis humanitaria en la región en disputa.81 En paralelo, Moldova continuaba siendo dependiente de la electricidad procedente de Transnistria -producida con gas ruso. Se añadían desafíos e incerteza relativos al proceso de adhesión de Moldova en la UE -con estatus de país candidato en 2022 y luz verde en diciembre de 2023 al inicio de negociaciones- y a cómo la disputa no resuelta en torno a Transnistria afectará y se verá afectada por ese proceso.82 En paralelo, las negociaciones de paz entre Moldova y Transnistria continuaron afrontando numerosos obstáculos, también por influencia de la guerra en Ucrania.83

# Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	<b>↑</b>
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, Rusia, Türkiye

#### Síntesis:

Armenia y Azerbaiyán afrontan una tensión interestatal con diversas dimensiones. Por una parte, han mantenido una disputa en torno a la soberanía de Nagorno-Karabaj, un territorio habitado históricamente por población local armenia mayoritariamente, pero que fue integrado en 1923 por la URSS como región autónoma dentro de Azerbaiyán. A finales de los años 80, la población armenia de Nagorno-Karabaj y sus autoridades locales iniciaron una campaña para unirse a Armenia. Precedido de incidentes y violencia civil desde 1988, y en el contexto de descomposición de la URSS e independencia de Armenia y Azerbaiyán, el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj escaló a un conflicto armado entre las fuerzas locales del enclave, apoyadas por Amenia, y Azerbaiyán. Finalizó con un alto el fuego en 1994. En esa guerra, las fuerzas de Nagorno-Karabaj tomaron el control del enclave y de los siete distritos de alrededor, pertenecientes a Azerbaiyán y cuya población azerbaiyana fue expulsada. Más de 24.000 personas (más 30.000, según algunas estimaciones) murieron y más de un millón de personas se desplazaron de Nagorno-Karabaj, Armenia y Azerbaiyán. Un proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán en años sucesivos no logró resolver el conflicto. Desde el alto el fuego de 1994 hubo diversas escaladas de violencia, como en 2016 con varios centenares de víctimas mortales. El conflicto se reabrió en 2020 con una ofensiva militar de Azerbaiyán y una guerra de 44 días, en la que Bakú retomó los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj y un tercio de este. Varios miles de personas murieron y decenas de miles se desplazaron. Se alcanzó un acuerdo de cese de hostilidades, que autorizó el despliegue de tropas rusas de mantenimiento de la paz, pero dejó irresuelto el estatus político del territorio en disputa. Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva militar de un día en 2023 contra Nagorno-Karabaj, que llevó al éxodo a su población armenia y con la que Bakú forzó su reintegración en Azerbaiyán. En paralelo, Bakú y Ereván mantienen una disputa en torno a la delimitación de su frontera y apertura de rutas de transporte, agravada por su hostilidad histórica en torno a Nagorno-Karabaj. La disputa política va acompañada de incidentes de violencia transfronterizos.

Tres años después de la guerra del 2020, una ofensiva militar de Azerbaiyán de un día de duración en septiembre llevó al éxodo de la práctica totalidad de la población de Nagorno-Karabaj, más de 100.000

<sup>80.</sup> ODIHR. Comments on the criminalization of "separatism" and related criminal offences in Moldova. Opinion-Nr.: CRIM-MDA/490/2023, 4 de diciembre de 2023.

<sup>81.</sup> Ibragimova, Galiya. "Is Moldova Ready to Pay the Price of Reintegrating Transnistria?". *Carnegie*, 24 de enero de 2024; Ceban Evghenii. "Time is running out to solve Moldova's Transnistria question". *Open Democracy*, 23 de agosto de 2023.

<sup>83.</sup> Ibid

<sup>84.</sup> Véase el resumen sobre Moldova (Transnistria) en Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de Paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

personas, y a la reintegración por la fuerza del enclave en Azerbaiyán. En el periodo de 2023 previo a la ofensiva militar, se produjeron incidentes de violencia tanto en la frontera interestatal, como entre fuerzas de Azerbaiyán y de Nagorno-Karabaj, con alegaciones por las partes en conflicto de diversas víctimas mortales y heridos. En respuesta a una petición de Armenia, la UE desplegó en febrero una misión civil de observación en el lado armenio de la frontera con Azerbaiyán (EUMA), que tomó el relevo de EUMCAP (octubre-diciembre de 2022). Azerbaiyán y Rusia criticaron el establecimiento de la misión. Pese a su despliegue continuaron produciéndose incidentes fronterizos entre fuerzas de seguridad armenias y azerbaiyanas, con diversas víctimas mortales y heridos. Por otra parte, junto a las hostilidades

armadas, en los meses previos al ataque de septiembre, continuó el bloqueo del corredor Lachin -única vía que conectaba Nagorno-Karabaj con Armenia. El cierre se inició en diciembre de 2022 por supuestos activistas medioambientales azerbaiyanos, mientras Armenia responsabilizó Azerbaiyán -cuyo régimen no tolera la protesta independiente. Azerbaiyán instaló en abril de 2023 un puesto de control militar en el corredor. Expertos de la ONU instaron a Azerbaiyán a levantar el bloqueo, que generó una situación de emergencia humanitaria, con graves restricciones de bienes básicos -incluyendo alimentos y medicamentos, entre otros- e impactos en el funcionamiento de centros médicos y educativos y que se fue agravando con el

trascurso de los meses. 85 Desde mitad de junio, bloqueó todo el transporte de productos humanitarios e impidió el paso del CICR periódicamente, según denunció HRW. 86 Bakú también cortó líneas eléctricas y de gas, causando apagones. 87 En agosto el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia sobre Nagorno-Karabaj, solicitada por Armenia, invocando el artículo 35(1) de la Carta de Naciones Unidas.

La tensión escaló en septiembre. Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar sobre Nagorno-Karabaj. Tras 24 horas de enfrentamientos, las autoridades de Nagorno-Karabaj capitularon y firmaron un acuerdo de cese completo de hostilidades, con facilitación de Rusia y en los términos impuestos por Azerbaiyán. El acuerdo incluía la retirada de todas las Fuerzas Armadas de Armenia presentes en Nagorno-Karabaj –inexistentes según el Gobierno de Armenia— y la disolución y desarme completo de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj. Estimaciones situaron en varios centenares las víctimas mortales entre el 19 y 20 de septiembre (en torno a 200 militares azerbaiyanos, según su Ministerio de Defensa; en torno a 200 soldados de Nagorno-Karabaj, según el portavoz de servicios de emergencia de la región;

10 civiles, de los cuales 5 menores, según el Defensor del Pueblo de Nagorno-Karabaj). Según el Defensor del Pueblo del enclave, otras 400 personas resultaron heridas, incluyendo en torno a 40 civiles –13 de ellas menores. Al menos otras 218 personas murieron y 120 resultaron heridas a causa de una explosión e incendio en un depósito de gasolina en torno al cual se habían congregado centenares de vehículos para repostar y huir a Armenia. Las autoridades de Nagorno-Karabaj atribuyeron la explosión a un incumplimiento de las normas de seguridad. La ofensiva militar de Azerbaiyán causó el desplazamiento forzado de la práctica totalidad de la población armenia de Nagorno-Karabaj. A principios de octubre en torno a 100.500 personas ya se habían desplazado a Armenia. Una misión de la ONU visitó

zonas de Nagorno-Karabaj el 1 de octubre y señalaron que, según sus interlocutores, solo permanecían en la región entre 50 y 1.000 personas armenias. La población previa estimada era de unos 120.000 habitantes.

En días posteriores al cese de hostilidades se produjeron diversas reuniones entre representantes de Nagorno-Karabaj y de Azerbaiyán, en que se abordaron cuestiones humanitarias, de desarme y de integración de la población armenia de Nagorno-Karabaj, al menos algunas sin acuerdos. El presidente de Nagorno-Karabaj, Samvel Shajramanián, emitió un decretó el 28 de septiembre de disolución de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, por el cual esta dejará de existir

el 1 de enero de 2024. En las semanas posteriores a la ofensiva se produjeron algunos incidentes y violaciones del cese de hostilidades. En paralelo, entre finales de septiembre y principios de octubre Azerbaiyán detuvo a varios dirigentes políticos y militares de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán presentó a principios de octubre su plan de integración, que contemplaba cinco ámbitos (esfera legal y administrativa; seguridad; economía; ámbito social; cultura; educación y religión) y que afirmaba garantías de derechos educativos, culturales, lingüísticos y religiosos. No obstante, el plan contrastaba con las acciones y retórica bélicas de Bakú y con la falta de garantías de derechos en el propio Azerbaiyán, así como con las inciertas perspectivas para el derecho al retorno de la población armenia de Nagorno-Karabaj. Entre otros hechos, el presidente azerbaiyano visitó en vestimenta militar la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, el 15 de octubre, alzó la bandera de Azerbaiyán, pisó la bandera de la extinta república de Nagorno-Karabaj en la antigua sede de su Gobierno, y emitió un discurso triunfalista en el cual acusó a los mediadores internacionales de falta de interés durante décadas en la resolución del conflicto, y de preferir congelarlo.

Una ofensiva militar azerbaiyana llevó al desmantelamiento de la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, a su reintegración por la fuerza en Azerbaiyán y al éxodo forzado de la práctica totalidad de su población armenia

<sup>85.</sup> ACNUDH. "UN experts urge Azerbaijan to lift Lachin corridor blockade and end humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh", ACNUDH, 7 de agosto de 2023.

<sup>86.</sup> Human Rights Watch, World Report 2024, 2024.

<sup>87.</sup> Ibid.

Por otra parte, en Armenia se produjeron movilizaciones antigubernamentales, en protesta por lo que se consideró inacción de Armenia ante la ofensiva militar de Bakú y sus consecuencias, con demandas de dimisión del presidente, Nikol Pashinián. A finales de octubre Shajramanián renegó del documento de disolución de la región. Representantes del Gobierno de Nagorno-Karabaj promovieron la idea de establecer un gobierno en el exilio, rechazada por las autoridades de Armenia. Además, se deterioraron gravemente las relaciones entre Armenia y Rusia —que no condenó la ofensiva azerbaiyana y cuyas fuerzas de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj no intervinieron.

Con posterioridad a la invasión, Armenia y Azerbaiyán mantuvieron su proceso de diálogo en torno a la normalización de relaciones, con dificultades.88 En diversos momentos, Armenia señaló riesgos de nuevas operaciones militares de Azerbaiyán que llevasen a la toma por la fuerza de partes de Armenia, incluyendo para conectar el enclave azerbaiyano de Najicheván con el resto del país. Entre octubre y diciembre se produjeron algunos incidentes en la frontera entre ambos países, con alguna víctima mortal y diversos heridos. La UE acordó en diciembre incrementar de 138 a 209 los efectivos de la EUMA. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán establecer medidas provisionales urgentes, de obligado cumplimiento, en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en respuesta a la solicitud de medidas a la Corte por parte de Armenia. Las medidas requeridas incluían, entre otras, garantizar que las personas que hayan abandonado Nagorno-Karabaj y deseen regresar puedan hacerlo de manera segura; que las personas que deseen quedarse estén libres del uso de la fuerza o intimidación que pueda obligarlas a huir; y proteger y preservar los documentos y registros de identidad y propiedad privada de las personas afectadas. El dictamen, de 17 de diciembre, requería a Bakú presentar informe sobre las medidas en ocho semanas.

# Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	<u> </u>
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional <sup>89</sup>
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, misión de la ONU UNMIK, misión de la OTAN KFOR, misión de la UE EULEX

#### Síntesis

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia. En 2011 las partes iniciaron un nuevo proceso negociador facilitado por la UE y con apoyo de otros actores. No obstante, continúa la disputa política entre Serbia y Kosovo, así como la tensión política y social entre las instituciones de Kosovo, por un lado, y actores políticos y sociales y población serbokosovar, por otro lado, con expresiones de violencia intermitentes.

# Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo y en el norte de Kosovo, incluyendo con incidentes violentos.

Pese a los avances a principios de año en el proceso negociador -con el respaldo verbal de Kosovo y Serbia al Acuerdo sobre la senda de normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia, el 27 de febrero, y a su anexo de implementación, del 18 de marzo-, continuó la tensión política y social en los meses siguientes, junto a obstáculos en las negociaciones.90 El principal partido en las áreas de mayoría serbia del norte de Kosovo, Srpska Lista, llamó al boicot de las elecciones municipales de abril de las cuatro municipalidades del norte de Kosovo. Había supeditado su participación al establecimiento de la asociación de municipios de mayoría serbia de Kosovo -cuestión sustantiva del proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo y dilatada por Pristina- y a la retirada de las unidades especiales de policía en el norte de Kosovo. Sin su participación, los comicios dieron la victoria -con solo un 3,4% de participación— a partidos albanokosovares, que tomaron posesión en medio de fuertes despliegues policiales y algunos choques, mientras Serbia puso a su Ejército en situación de alerta y ordenó el despliegue de tropas cerca de la frontera con Kosovo. Se produjeron protestas postelectorales con graves incidentes de violencia a finales de mayo, con más de un centenar de heridos, incluyendo manifestantes serbokosovares, policía y fuerzas de la KFOR. A raíz de los choques, la OTAN anunció un despliegue adicional de 700 efectivos para incrementar la misión. Además, dispuso

<sup>88.</sup> Véase el resumen sobre el proceso negociador Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

<sup>89.</sup> La tensión entre Kosovo y Serbia se considera "internacional" ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia emitió en 2010 una opinión consultiva en la que estableció que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violó el derecho internacional.

<sup>90.</sup> Véase el resumen sobre Serbia-Kosovo en Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

a un batallón adicional de fuerzas de reserva en estado de "alta disponibilidad". EEUU y la UE impusieron algunas sanciones a Kosovo, a cuyo Gobierno la UE instó a adoptar medidas de desescalada de la crisis, incluyendo, entre otras, la retirada de unidades de operaciones especiales de la Policía del entorno de las instalaciones municipales y la convocatoria anticipada de elecciones en esas alcaldías. En junio se registraron nuevos incidentes y choques. Entre julio y agosto, Kosovo retiró parte de las unidades especiales de Policía, pero seguían pendientes otras medidas, como nuevas elecciones.

La tensión escaló de nuevo en septiembre. Una emboscada paramilitar el 24 de septiembre contra una patrulla de Policía en Banjska (norte de Kosovo, a 15 km de la frontera con Serbia) y el atrincheramiento posterior en el monasterio ortodoxo de la localidad de los asaltantes -una treintena de hombres armados, según Kosovo-, resultó en un balance de un policía y tres asaltantes muertos y la incautación de armas pesadas, explosivos, uniformes, entre otros. Kosovo acusó a Serbia de organizar el asalto, que según las autoridades kosovares habría perseguido la anexión del norte de Kosovo. Belgrado negó su implicación. El embajador estadounidense en Kosovo señaló que el ataque había sido coordinado y sofisticado, que los atacantes parecían tener formación militar y que la cantidad de armamento sugería que había un plan para desestabilizar la seguridad en la región, y que todavía tenían que determinar si Serbia era responsable del mismo. A finales de septiembre, el vicepresidente de Srpska Lista, Milan Radoičić, se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmando haber planeado la operación sin apoyo de Serbia, y dimitió de su cargo en el partido serbokosovar. Fue detenido en Belgrado y puesto en libertad, y Serbia afirmó que sería procesado. Kosovo reclamó su extradición y la Interpol emitió en diciembre orden de arresto contra él y otras 18 personas. La OTAN incrementó su presencia de tropas en Kosovo tras el ataque, con varios cientos de efectivos adicionales, y en noviembre la organización señaló que valoraba incrementar de forma permanente sus tropas. El ataque del 24 de septiembre supuso un salto cuantitativo en cuanto a desafíos, por su envergadura. Además, se produjo en un contexto local tensionado, en el que también se proyecta la disputa internacional entre Rusia y actores euroatlánticos. El informe de octubre del secretario general de la ONU alertó de que el incremento de las tensiones en Kosovo siguió erosionando la frágil confianza entre comunidades y entre instituciones y comunidades, por lo que anunció que la misión de la ONU priorizaría

iniciativas de construcción de confianza e intercambios intercomunitarios. Una veintena de organizaciones de la sociedad civil de Serbia y de Kosovo alertaron del impacto profundo de los hechos de violencia del 24 de septiembre en las ya deterioradas relaciones dentro de Kosovo y de Serbia y entre ambos, e hicieron un llamamiento conjunto en octubre a la construcción de paz y a la normalización de las relaciones en la región e instaron a las autoridades en todos los niveles a apoyar la construcción de vínculos y cooperación dentro y entre Kosovo y Serbia. <sup>91</sup> Actores internacionales con papel de terceras partes en el proceso de diálogo instaron a Kosovo y Serbia a retomar el proceso negociador <sup>92</sup> y señalaron que la ausencia de diálogo podría llevar a una nueva escalada.

## 2.3.5 Oriente Medio

## Golfo

Irán	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

#### Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados en particular la Guardia Republicana- en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando el presidente Mahmoud Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persistieron. Movimientos de protesta recientes, en especial en 2019, 2022 y 2023, han evidenciado el malestar político y social en la población iraní y han sido duramente reprimidos por el régimen.

Después de un 2022 caracterizado por masivas movilizaciones populares alentadas por la muerte de la joven kurda Jîna Mahsa Amini en custodia policial<sup>93</sup> y de una dura respuesta del régimen que habría causado la muerte de más de 500 personas,<sup>94</sup> en 2023 las

<sup>91.</sup> VVAA, Renewing commitments to the cause of peace, 26 de octubre de 2023.

<sup>92.</sup> Véase el resumen sobre Serbia-Kosovo en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2024.

<sup>93.</sup> Véase el resumen sobre Irán en la edición 2023 de *Alerta!* y Pamela Urrutia, La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista, *Apunts ECP de Conflictos y Paz*, no.27, marzo de 2023.

<sup>94.</sup> Un año después del inicio de las protestas, los balances más consolidados apuntan a 551 muertes, incluyendo 68 menores. El Gobierno también informó de la muerte de otros 75 agentes de seguridad.

autoridades iraníes persistieron en sus políticas represivas para sofocar la contestación. Las medidas adoptadas por Teherán para hacer frente al movimiento conocido por el lema "Mujer, Vida, Libertad" derivaron en una reducción de las protestas en espacios públicos en comparación con el año anterior -en 2022, solo entre mediados de septiembre y principios de diciembre se contabilizaron más de 1.600 manifestaciones- y en múltiples vulneraciones a los derechos humanos. Varias ONGs y la misión de investigación internacional establecida por la ONU constataron los abusos y denunciaron el uso de violencia física, psicológica y sexual y el acoso judicial, entre otras prácticas, para impedir y disuadir el disenso pacífico que, si bien disminuyó en las calles, continuó plasmándose en otras formas de protesta.95 Durante 2023 continuaron los arrestos arbitrarios e intimidaciones a manifestantes y voces críticas, sus familiares, personas que les prestaban ayuda (abogados y personal de salud) y figuras que expresaron solidaridad con el movimiento. Se documentaron detenciones durante protestas, en escuelas, en accesos a hospitales e incluso durante funerales de las víctimas de la represión. Muchas de las personas procesadas y condenadas fueron acusadas de cargos como "difusión de propaganda contra el sistema", "crímenes contra la seguridad", "disrupción del orden público", "difusión de mentiras para alterar el orden público" o "insultos contra el líder supremo", entre otros. En febrero, el Gobierno anunció un "perdón" a 22.000 personas que habían sido detenidas en el marco de las protestas. No se conocen cifras oficiales sobre el total de arrestos durante y después de las movilizaciones, pero grupos de derechos humanos estiman que la cifra podía elevarse hasta las 60.000 personas. Tampoco hay cifras oficiales sobre las sentencias a muerte en estos casos, pero informaciones apuntan a que al menos 28 personas recibieron condenas a la pena capital en relación con las protestas, de las cuales al menos nueve -todos hombres- ya fueron ejecutados (entre de diciembre de 2022 y enero de 2024). Estas sentencias de muerte se enmarcaron en una intensificación de la aplicación de la pena de muerte, con más de 700 ejecuciones entre enero y noviembre de 2023, según datos de Iran Human Rights Organization citados por HRW.96

Durante 2023 diversas voces alertaron sobre el extenso uso de torturas contra las personas detenidas, algunas con resultado de muerte. Asimismo, se denunció el uso de la violencia sexual y de género, incluyendo violaciones, torturas en los genitales y desnudos forzados, entre otras prácticas. Desde finales de 2022 y hasta noviembre de 2023, pero en especial en el primer

trimestre del año, se denunciaron también numerosos envenenamientos de niñas en escuelas que afectaron a miles de estudiantes. No se reportaron víctimas mortales y la información oficial sobre los hechos fue confusa, pero estos episodios se interpretaron como una forma de intimidación y castigo a las menores por su implicación en el movimiento "Mujer, Vida, Libertad". En paralelo, durante 2023 también se informó de la suspensión o expulsión de más de 400 estudiantes universitarios por su implicación en las protestas, mientras que otros 2.800 fueron sometidos a comités disciplinarios. También se anunciaron cambios de directores en más de 20.000 escuelas en el marco de un proceso de "purificación" del sistema educativo. Las autoridades también intensificaron las normas y medidas para obligar a las mujeres a usar el hiyab según los estándares del régimen, incrementando los castigos, las intimidaciones y la campaña de acoso y vigilancia contra mujeres y niñas. El régimen impulsó normas para hacer responsables a actores privados de la vigilancia de uso del hiyab, amplió el uso de cámaras en espacios públicos para perseguir a las "infractoras" e incluso desarrolló una aplicación para facilitar las denuncias. En este contexto, el 1 de octubre se produjo un nuevo caso muy similar al de Jîna Masha Amini. Ese mismo día la joven estudiante Armita Garavand murió tras un altercado por el uso del hiyab con un grupo de personas en el metro. Las autoridades detuvieron a numerosas personas durante su funeral, incluyendo periodistas y la reconocida abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. En este contexto, varios premios internacionales reconocieron la lucha de las mujeres iraníes contra la opresión y por los derechos humanos y libertades del conjunto de la población iraní. El Nobel de la Paz de 2023 recayó en la activista encarcelada Narges Mohammadi, mientras que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sakharov a Jîna Mahsa Amini y al movimiento "Mujer, Vida, Libertad". Cabe destacar que tras un 2022 con una represión especialmente intensa en las zonas baluchis y kurdas del país,97 Teherán continuó con sus políticas represivas aunque con menores niveles relativos de violencia en 2023. En el caso de Baluchistán, que en 2022 fue escenario de masivas movilizaciones y graves hechos de violencia, en 2023 continuó viéndose afectado por el clima general de represión en el país. Amnistía Internacional denunció hechos ocurridos en Zahedan, incluyendo detenciones, maltratos, torturas y desapariciones forzadas.98 Adicionalmente también en esta zona, al finalizar el año, en diciembre, el grupo armado Jaish al-Adl reivindicó un ataque contra una estación policial en la localidad de Rask, en el que murieron 11 efectivos.

<sup>95.</sup> Human Rights Council, Report of the independent international fact-finding mission on the Islamic Republic of Iran, A/HRC/55/67, 2 de febrero de 2024.

<sup>96.</sup> Human Rights Watch, Iran, World Report 2024.

<sup>97.</sup> Véase el resumen sobre Irán (noroeste) en este capítulo.

<sup>98.</sup> Amnesty International, Iran: New wave of brutal attacks against Baluchi protesters and worshippers, 26 de octubre de 2023.

Irán (noroeste)	
Intensidad:	2
Evolución:	<b>↓</b>
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Komala, KDP, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Iraq

#### Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Türkiye, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria. Según trascendió, en 2011 el PJAK y el Gobierno iraní habrían pactado un cese el fuego que comprometería al grupo armado a cesar sus ataques y a las autoridades a suspender la ejecución de prisioneros kurdos, pero las hostilidades y los enfrentamientos de baja intensidad persisten.

Después de un 2022 en que la represión fue especialmente intensa en las zonas habitadas por minorías étnico-religiosas -de manera particular en las áreas kurdas y baluchis (suníes)- ante la contestación contra el régimen en todo el país, 99 en 2023 continuaron las acciones represivas e incidentes, aunque con menores niveles relativos de violencia respecto al año anterior. La situación continuó determinada por los efectos de la represión de las movilizaciones populares tras la muerte en custodia policial de la joven kurda Jîna Mahsa Amini. Organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando persecución judicial por motivos políticos y detenciones. Según la Kurdistan Human Rights Network, solo en julio más de un centenar de personas habían sido arrestadas por las fuerzas de seguridad a causa de motivos políticos. 100 Ese mismo mes, un total de 55 abogados que habían firmado una declaración ofreciendo asistencia legal a la familia de Mahsa Jîna Amini fueron requeridos por la fiscalía de Bukan, en la provincia del Kurdistán con motivo de este apoyo. Ad portas del primer aniversario de la muerte en custodia de la joven kurda, las autoridades iraníes desplegaron a miles de efectivos en las áreas con mayor presencia kurda, donde las manifestaciones fueron especialmente

masivas durante el año anterior. Paralelamente, durante 2023 Iraq continuó teniendo en la mira a los grupos político-armados kurdos. Teherán y Bagdad alcanzaron un acuerdo fronterizo por el cual el Gobierno iraquí se comprometió a desarmar y reubicar a las organizaciones kurdas iraníes que actúan en la zona fronteriza con Irán (principalmente desde el norte del país) antes del 19 de septiembre. 101 En julio, representantes militares iraníes advirtieron que recurrirían al uso de la fuerza en el norte de Iraq contra estas organizaciones opositoras -a las que ha calificado de secesionistas y terroristassi las autoridades de Bagdad no actuaban de acuerdo con lo establecido en el pacto en el límite establecido. En 2022, en el marco de la respuesta a las protestas tras la muerte de Mahsa Jina Amini, Irán lanzó varios ataques contra las posiciones de varios de estos grupos kurdos en el norte de Irag. En la fecha acordada, el Gobierno iraquí anunció que había cumplido con los términos del acuerdo. En diciembre, tras una reunión de altos representantes de ambos países en Bagdad, Irán agradeció a Iraq por remover a estas organizaciones de la zona limítrofe, pero aseguró que mantenían la preocupación por las evidencias sobre la presencia de grupos opositores kurdos iraníes en el área fronteriza. 102 En el caso de Baluchistán, que en 2022 fue escenario de masivas movilizaciones y graves hechos de violencia, en 2023 continuó viéndose afectado por el clima general de represión en el país. Amnistía Internacional denunció hechos ocurridos en Zahedan, incluyendo detenciones, maltratos, torturas y desapariciones forzadas. 103 Adicionalmente, también en esta zona, en diciembre el grupo armado Jaish al-Adl reivindicó un ataque contra una estación policial en la localidad de Rask, en el que murieron 11 efectivos.

Irán – EEUU, Israel <sup>104</sup>	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

#### Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Jomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del "eje del mal" y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus

<sup>99.</sup> Para más información, véase La revuelta de las mujeres en Irán: ¿un punto de inflexión? Claves desde el análisis de conflictos con perspectiva feminista, *Apunts ECP de conflictos y paz*, Núm.27, marzo 2023.

<sup>100.</sup> Human Rights Watch, Iran: World Report 2023, enero de 2024.

<sup>101.</sup> Maziar Motamedi, Iran says deal agreed with Iraq for disarming, relocation of Kurdish rebels, Al-Jazeera, 28 de agosto de 2023.

<sup>102.</sup> Rudaw, Iranian general says concerns remain over Kurdish groups on border, Rudaw, 3 de diciembre de 2023.

<sup>103.</sup> Amnesty International, Iran: New wave of brutal attacks against Baluchi protesters and worshippers, 26 de octubre de 2023.

<sup>104.</sup> Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015. En los últimos años la retirada de EEUU del acuerdo en 2018 y la intensificación de su política de sanciones, el progresivo alejamiento de Irán de los compromisos adquiridos en el acuerdo y un convulso contexto regional han agravado la tensión y dificultaban la búsqueda de una salida a esta disputa.

Siguiendo la tendencia del año anterior, la tensión en torno al programa nuclear iraní se mantuvo elevada a lo largo de 2023, en un escenario caracterizado por el bloqueo de las negociaciones diplomáticas para restablecer el cumplimiento del acuerdo de 2015 conocido por sus siglas en inglés como JCPOA- y por los incidentes de seguridad que involucraron principalmente a fuerzas de Irán, EEUU e Israel y que se intensificaron en el último trimestre. En 2023

no hubo nuevas rondas directas en el marco del llamado proceso de Viena, aunque continuaron los contactos por vía diplomática. 105 En los primeros meses del año los señalamientos internacionales a Irán por sus actividades nucleares se produjeron en paralelo a las crecientes críticas a la república islámica por su dura respuesta represiva a la contestación interna en el país, que se intensificó tras la muerte en custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022. 106 En este contexto, se aprobaron nuevas sanciones contra Teherán en represalia por los abusos en materia de derechos humanos y también por la provisión de material militar a Rusia -en especial drones que se estarían utilizando en Ucrania-, en vulneración de lo establecido en la resolución 2231

de Naciones Unidas (que formalizó el respaldo de la ONU al JCPOA). El OIEA continuó denunciando la transgresión de los límites establecidos en el acuerdo nuclear y aunque a mediados de año se identificaron algunos progresos y se clarificaron algunas actividades, al finalizar el año las expectativas en torno al diálogo nuclear volvieron a empeorar, en parte como consecuencia indirecta de la crisis en Gaza, pero también por otras variables, como el retiro por parte

de Teherán de la autorización a varios inspectores para la realización de tareas de verificación. En este escenario, la UE y Reino Unido decidieron mantener las restricciones y sanciones al programa de misiles balísticos de Irán -que expiraban en octubre de 2023argumentando incumplimientos por parte de Teherán desde 2019. EEUU también anunció nuevas sanciones a entidades y personas vinculadas a este programa iraní y otras por la presunta transferencia de armas a Hamas.

Respecto a los incidentes de seguridad entre distintos actores implicados directa o indirectamente en esta tensión, a lo largo del año continuaron registrándose Isfahan atribuido a Israel (enero), ataques contra la órbita de Teherán en Iraq y Siria, y ofensivas países. Las fricciones también derivaron en tensiones marítimas que se produjeron principalmente en el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz e involucraron a Yemen, presuntamente con armas para los al-

> navales, incluyendo tropas, aeronaves y unidades anfibias. Los incidentes se redujeron relativamente tras la distensión regional motivada por el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita (mayo) tras años de ruptura diplomática- y en paralelo a las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington mediadas por Omán que condujeron a una exención temporal de sanciones (julio) y a un acuerdo para la liberación por Teherán de cinco estadounidenses encarcelados en Irán a cambio del acceso de la república islámica a 6.000 millones de dólares que estaban retenidos en cuentas bancarias en Corea del Sur (septiembre). Desde octubre de 2023, los incidentes se incrementaron a consecuencia de la crisis en Gaza, dado el apoyo de Irán a

Hamas y el respaldo de EEUU a Israel. Hasta finalizar el año se habían multiplicado los ataques de grupos del autodenominado "Eje de Resistencia" (integrado por Hezbollah, milicias pro-iraníes en Iraq y Siria y los al-houhtistas en Yemen, entre otros) contra fuerzas de EEUU en Iraq y Siria, las ofensivas estadounidenses contra estas organizaciones y los ataques de Israel contra posiciones e intereses de Hezbollah e Irán. 107 En diciembre, Irán advertió de consecuencias por la

episodios como un ataque con dron en la central de fuerzas de EEUU presuntamente por fuerzas de estadounidenses contra estos grupos en ambos a algunos barcos petroleros. También se informó de la intercepción de embarcaciones desde Irán rumbo houthistas. En este contexto, a mediados de año EEUU anunció un refuerzo de sus capacidades La tensión en torno al programa nuclear

iraní se mantuvo

elevada en 2023.

en un contexto

de bloqueo en

las negociaciones

diplomáticas y

de incidentes de

seguridad que

involucraron a Irán,

EEUU e Israel, en

especial en el último

trimestre como

consecuencia de la

crisis en Gaza

<sup>105.</sup> Véase el capítulo 6 (Negociaciones de paz en Oriente Medio) en Escola de Cultura de Pau, Negociaciones de paz 2023. Análisis de tendencias y escenarios, Barcelona: Icaria, 2024.

<sup>106.</sup> Véase el resumen sobre Irán en este capítulo.

<sup>107.</sup> Véase los resúmenes sobre Iraq, Israel-Palestina y Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

muerte de un alto cargo de la Guardia Republicana (IRGC por sus siglas en inglés) en Siria en un ataque aéreo atribuido a Israel. EEUU e Israel también señalaron a Teherán por las acciones emprendidas por los al-houthistas en el último trimestre, incluyendo los ataques desde Yemen a Israel y contra naves en el Mar

Rojo. 108 En este contexto regional altamente volátil, al finalizar el año el secretario general de la ONU insistía en defender el JCPOA como la mejor opción disponible para abordar la cuestión nuclear iraní, garantizar su naturaleza pacífica y trabajar por la no proliferación y seguridad en la región.

<sup>108.</sup> Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 1 (Conflictos armados) y "Yemen: escalada de tensión en el Mar Rojo" en Escola de Cultura de Pau, Escenarios de riesgo y oportunidades de paz, enero de 2024.